

Octubre 2022

EL CAOS DE LAS PRIMERAS 24 HORAS EN LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS DE MADRID: "RIVAS, CELADOR SOLO, NO HAY NADIE. NO SABE QUÉ HACER"

AYUSO Y LA CULTURA DEL ESFUERZO

AYUSO AUMENTA UN 28% LOS FONDOS PARA BECAS EN CENTROS PRIVADOS A LAS QUE OPTAN FAMILIAS QUE GANAN MÁS DE 100.000 EUROS

TODAS LAS VECES QUE AYUSO LE HA TORCIDO EL BRAZO A FEIJÓO: ENERGÍA, ABORTO Y CGPJ

AYUSO PRESIONÓ A FEIJÓO PARA CERRAR LA PUERTA A CUALQUIER PACTO SOBRE EL PODER JUDICIAL

UN JUEZ DA EL PRIMER PASO PARA DECLARAR EN REBELDÍA A LA FUNDACIÓN FANTASMA QUE PRESIDE AYUSO

AYUSO PRESIDE UNA FUNDACIÓN FANTASMA INVESTIGADA EN 'PÚNICA', INACTIVA DESDE 2014 Y QUE NO PRESENTA CUENTAS

DECENAS DE MILES DE MADRILEÑOS SALEN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA: "AYUSO, DIMISIÓN"

EL TSJ DE MADRID CAMBIÓ EN FAVOR DE AYUSO SU CRITERIO SOBRE LA MEDICALIZACIÓN DE LAS RESIDENCIAS EN EL COVID

EL PLAN ALQUILA DE AGUIRRE LANGUIDECE CON AYUSO

MADRID YA ROZA EL MILLÓN DE PACIENTES EN LAS LISTAS DE ESPERA EN PLENA BATALLA DE LOS SANITARIOS CON AYUSO

AYUSO APLAUDIÓ EL MODELO FISCAL QUE HA PROVOCADO EL DECLIVE DE LIZ TRUSS EN REINO UNIDO

MONCLOA RECALCA QUE, EN PROPORCIÓN, TIENE MENOS ASESORES QUE AYUSO EN MADRID Y FEIJÓO EN GALICIA

AYUSO CREE LAS LEYES TRANS SON "MUY AGRESIVAS" PORQUE "NIEGAN EL SEXO A LAS PERSONAS Y SOBRE TODO LAS CONFUNDEN"

LA NUEVA APUESTA FISCAL DE AYUSO: 44 EUROS DE AHORRO PARA LAS RENTAS BAJAS Y 189 PARA LAS ALTAS

AYUSO CULPA A LOS SINDICATOS DE LA HUELGA POR EL RECORTE DE PERSONAL EN LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS: "QUIEREN QUE NOS VAYA MAL"

"YO POR BELTRÁN MA-TO": LO QUE AYUSO DECÍA EN 2014 DEL GERENTE QUE SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO POR LA CAJA B DEL PP

CESES, RENUNCIAS Y DIMISIONES POR LA CRISIS DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA

AYUSO CESA A LOS GERENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO Y DEL GREGORIO MARAÑÓN TRAS DESVELAR EL PLURAL UN AGUJERO DE MÁS DE 50 MILLONES DE EUROS

DIMITE LA GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

EL PP DE AYUSO CULPA A LOS PACIENTES DE LAS LARGAS LISTAS DE ESPERA: "DICEN, ESE DÍA NO"

AYUSO ASFIXIA LOS CENTROS DE MENORES PARA CONTENTAR A VOX Y A LAS EMPRESAS PRIVADAS

AYUSO VISITA POR PRIMERA VEZ A LOS VECINOS SIN CASA POR CULPA DEL METRO EN SAN FERNANDO DE HENARES: "¡MENOS PROPAGANDA, MÁS SOLUCIONES!"

AYUSO SE VUELCA EN UNA GUERRA CULTURAL CON VOX PARA MONOPOLIZAR EL 12 DE OCTUBRE

AYUSO JUSTIFICA COBRAR MÁS QUE PEDRO SÁNCHEZ: "YO NO TENGO FALCON NI NADIE ME PAGA EL DOMICILIO"

DOS AÑOS Y MEDIO DE MENTIRAS SOBRE LOS "PROTOSCOLOS DE LA VERGÜENZA" DE AYUSO

LOS DOS AÑOS EN QUE OSSORIO FUE JEFE DE AYUSO

LA IZQUIERDA DE MADRID SE VUELCA EN QUE NO QUEDE SIN INVESTIGAR LA TRÁGICA MUERTE DE MAYORES EN LAS RESIDENCIAS EN LA PRIMERA OLA DE COVID

EL PP DE AYUSO VETA LA REPROBACIÓN DE OSSORIO EN LA ASAMBLEA TRAS PERMITIR LA DE OTRA CONSEJERA

MADRID PAGÓ POR DERIVAR A MAYORES A RESIDENCIAS PRIVADAS, AUNQUE TENÍA MÁS DE 1.000 PLAZAS LIBRES EN LAS PÚBLICAS

VOX 'SALVA' A AYUSO Y PARALIZA LA COMISIÓN DE RESIDENCIAS: "AL PP LE FALTA HUMANIDAD Y A LA IZQUIERDA LE SOBRA RENCOR"

AYUSO ADMITE AHORA QUE TUVO EL "MANDO ÚNICO" EN LAS RESIDENCIAS Y NO PABLO IGLESIAS: "NO PUEDO ESTAR ORGULLOSA"

LAS SEIS FALACIAS DEL GOBIERNO AYUSO QUE HUMILLAN A LAS VÍCTIMAS DE LAS RESIDENCIAS

NUEVA GUERRA EN EL PP: AYUSO CONTRADICE A FEIJÓO EN EL CASO DE MACHISMO DEL AHUJA

AYUSO SE DESMARCA DEL PP Y NO CONDENA LOS GRITOS MACHISTAS DEL COLEGIO MAYOR DE MADRID

AYUSO UTILIZA UN ACTO PRIVADO DE HOMENAJE A DOS DEPORTISTAS FALLECIDOS PARA ATACAR A SÁNCHEZ

EL GOBIERNO ARGENTINO LE RESPONDIÓ A DÍAZ AYUSO: "LE RECORDAMOS QUE EL MACRISMO DEJÓ UN PAÍS ENDEUDADO POR 100 AÑOS"

LA FISCALÍA DA UN GIRO EN LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES EN RESIDENCIAS QUE ABRE ALGUNA ESPERANZA EN LAS FAMILIAS

AYUSO, SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS DE MADRID: "REABRIR ESTO NO TIENE NINGUNA EXPLICACIÓN"

OSSORIO NO RECTIFICA: INSISTE EN QUE "NO TIENE SENTIDO" INVESTIGAR LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS Y ACUSA A LA IZQUIERDA DE "HACER DAÑO A LOS FAMILIARES"

"NO LO SUPERAREMOS HASTA QUE HAYA JUSTICIA": LA RÉPLICA DE FAMILIARES DE FALLECIDOS AL 'NÚMERO DOS' DE AYUSO

LA IZQUIERDA EXIGE LA DIMISIÓN DE OSSORIO, QUE SE NIEGA A RECTIFICAR SUS PALABRAS SOBRE LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS, Y AYUSO CULPA A VOX

EL PP SE PLANTEA RENUNCIAR A PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DE LAS RESIDENCIAS DE MADRID Y DEJAR A VOX SOLO CON LA IZQUIERDA

VOX SORPRENDE AL PP Y OFRECE A LA IZQUIERDA UNA COMISIÓN SOBRE LAS RESIDENCIAS EN LA ASAMBLEA DE MADRID

EL 'NÚMERO DOS' DE AYUSO SOBRE LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS DURANTE LA PANDEMIA: "LAS FAMILIAS YA LO HAN SUPERADO"

LA CRISIS DE LA COVID DESGASTA AL GOBIERNO DE AYUSO: CINCO SALIDAS Y OCHO CAMBIOS DE CARGO EN TRES MESES

ANTONIO GONZÁLEZ TEROL, EL PARACAIDISTA DE AYUSO ABONADO A LAS POLÉMICAS

AYUSO RECOLOCA AL NÚMERO TRES DE CASADO Y VECINO DE BOADILLA DEL MONTE COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE ALCORCÓN

AYUSO ASEGURA QUE SUS PRIMAS DE BARCELONA CONOCEN LAS COMARCAS CATALANAS PERO NO LOS RÍOS DE ESPAÑA

DÍAZ AYUSO: "SÁNCHEZ ESTÁ DESLEGITIMANDO LA CORONA Y HACIÉNDOLA DESAPARECER"

AYUSO RECONOCE QUE POSPONE SU CONVENCIÓN IDEOLÓGICA PARA IR "DE LA MANO" DE GÉNOVA

AYUSO TOMA LA DELANTERA FRENTE A LA IZQUIERDA EN EL PULSO ELECTORAL DE MAYO DE 2023

UN CIRCUITO DE FÓRMULA 1 PARA MADRID: EL PROYECTO DE AYUSO QUE ARRUINÓ A LA VALENCIA DE CAMPS

EL CAOS DE LAS PRIMERAS 24 HORAS EN LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS DE MADRID: “RIVAS, CELADOR SOLO, NO HAY NADIE. NO SABE QUÉ HACER”

La reapertura de los 78 centros sanitarios vivió escenas de tensión, que se alivió el segundo día con un 26 % de casos de bajas entre todo el personal sanitario, una parte del cual está renunciando

El desastre del primer día de la reapertura de las urgencias extrahospitalarias de Madrid se cuenta con dos discursos. Uno, el oficial, el de la Administración, que aun reconociendo que el 57% de los médicos se dieron de baja el primer día, el 40% de todo el personal, se abrió el jueves “con una cobertura del 100%”. Y dos, el de los propios sanitarios, que vieron en cuestión de horas, a través de correos que llegaban por goteo pocas horas de antes de empezar su turno, algunos de madrugada, cómo sus vidas daban un vuelco, cambiaban de municipio, de horario y de pacientes. Y cómo las guardias que tenían previstas para todo el año saltaban por los aires. Con más días de trabajo. Más solos en los centros. Y más desesperados. El chat de Whatsapp de sanitarios en el que se encuentran más de 400 afectados no dejó de sonar en sus primeras 24 horas:

- En el PAC de Villarejo no se ha presentado nadie. Está abierto con una administrativa y un enfermero del equipo.
- No se ha presentado nadie en el PAC de mi centro... buscan voluntarios ya.
- En Moralarzal solo está la enfermera, no hay médico ni celador [y tres emoticonos de una cara enfadada].
- Carabanchel, enfermera sola ... No celador, no médico.
- Guadarrama, enfermera y celador, sin médico.
- Rivas, celador solo, no hay nadie. No sabe qué hacer.
- Federica Montseny, solo hay celador.
- Colmenar hay médico, la enfermera llegará, se supone. Sin celador.
- En Mejorada sin médico.
- Me acaba de llamar el jefe de guardia y quería mandarme de Morata a Federica, pero al final mandó al enfermero. Así que Morata solo médico. No me movió por tener residente, que no puedo dejar solo.
- Joder nos están llamando de la Consejería a todo mi centro para que hagamos la guardia de PAC del sábado...no tienen fe. En plan acoso, a un compañero llamando a su casa y al teléfono de su mujer.... de locos.

Pese a que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y diferentes representantes de la Comunidad de Madrid han deslizado la idea de que los médicos se estaban organizando para boicotear el nuevo plan de las urgencias extrahospitalarias de Isabel Díaz Ayuso (que consiste en abrir los mismos centros que antes de la pandemia, pero con la mitad de sanitarios), los facultativos insisten en que no hubo organización ni premeditación en el aluvión de bajas. Cuentan que no hay nada que les guste más que trabajar en una profesión para la que tuvieron que formarse durante al menos 10 años. Y que necesitan pagar el pan de sus hijos. Pero la cuerda se ha estirado tanto, que está rota.

“Hablan de boicot, pero los que nos están boicoteando son ellos a nosotros, a nuestra salud”, se queja María Chamón, de 39 años, una de las médicas hasta ahora del Servicio de Atención Rural (SAR) de Cadalso de los Vidrios, al suroeste de Madrid. Su doctor de cabecera le dio la baja por enfermedad en cuanto la vio este jueves y comprobó que era incapaz de atender a pacientes en cuestión de horas. “No puedo realizar correctamente mi trabajo porque me pongo a llorar solo

con que mi familia me pregunte qué tal estoy. Tengo presión en el pecho. Y mi salud está por delante porque pongo además en riesgo la salud de los pacientes. No tengo capacidad para dar respuesta a lo que me piden porque si luego hay un error médico, encima me demandan. Están jugando con la salud de todos”, explica, en un creciente estado de nervios.

Chamón recibió el correo con su nuevo destino pocos minutos antes de las 12 de noche del miércoles. Estaba de guardia en Cadalso de los Vidrios y a las ocho de la mañana del jueves, al salir, tuvo que empezar a recoger su taquilla, dejando sus sellos y sus recetas para encarar horas después un nuevo día de trabajo en el centro de salud La Fortuna, en Leganés. “En mi planilla de antes tenía 14 guardias en 60 días, ahora tengo 11 en 32. Antes estábamos dos médicos los fines de semana durante 24 horas, ahora solo hay uno. Antes sabía en enero los días que me tocaba trabajar durante todo el año, las fiestas, las noches, todo, ahora no sé nada. Yo me tengo que organizar la vida. Y aún tengo que aguantar que esto es un boicot. No. Lo que pasa aquí es lo que ponía una compañera en una pancarta: sanitarios explotados, pacientes maltratados”. Así que ha parado el tiempo suficiente para recomponerse, porque no está bien, y para ver qué hace con su vida.

Escudero, sin embargo, apunta a causas más oscuras que la propia salud de sus sanitarios o la incapacidad de acompañar las nuevas condiciones laborales con sus situaciones personales. “Hubo un 57% de ausencias sobrevenidas entre los médicos, comunicando su baja pocas horas antes de entrar y muchos de ellos cuando habían confirmado que iban a acudir a estos puntos. La situación se subsanó con la movilización de las 49 unidades de atención domiciliaria desplegada por el Summa 112. Todas estas bajas van a ser analizadas con detenimiento una a una al tratarse de un porcentaje absolutamente anómalo”, ha amenazado.

Mientras, guerra de datos. La Administración asegura que el primer día el 95% de los 78 centros contaron con personal sanitario, bien médico o bien enfermera, mientras el sindicato médico Amyts contabilizó 27 sin médico, es decir, bien con una enfermera o con un celador o directamente cerrado. El segundo día, este viernes, “las bajas sobrevenidas del personal llamado a trabajar alcanzaron el 26%”, según informó a última hora el Gobierno regional.

Pero lo cierto es que la situación de Chamón se repitió en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid durante la noche del miércoles al jueves. Médicos con ansiedad, debatiéndose entre su deber con los pacientes y su propia salud mental. En Soto del Real, al norte de la región madrileña, por ejemplo, ningún médico acudió a su puesto de trabajo el jueves. De seis que trabajaban hasta ahora, a uno lo han trasladado al centro Paseo Imperial (Madrid), a otro al de Mar Báltico (Madrid) y a un tercero a Fuenlabrada (al sur de Madrid). Y el resto vio cómo su vida perfectamente acompañada con su situación personal saltaba por los aires. “Yo recibí el correo famoso a las 12.06 del mediodía para decirme que trabajaba ese día a las 17.00. ¿Tú crees que eso es normal?”, se quejaba Rocío Alañón, de 52 años médica de Soto del Real. “Pero es que hasta llamaron para que se presentara a un compañero enfermero que está de baja desde el 5 de octubre. Todo esto es por hacer las cosas corriendo, sin pensar, solo porque Ayuso ha dicho que se tenía que abrir el 27”, lamenta la doctora, que explica que ahora se han dejado huecos en blanco en las nuevas planillas de guardias que nadie sabe quién va a realizar. “Y a quién le tocará? A nosotros. Al que esté ahí. Aunque llevemos trabajando 24 horas seguidas porque no tienen a nadie más. Esto es un despropósito. Están jugando con nosotros y con vosotros, los pacientes”.

Toques a la atención primaria

El estrés fue la tónica general de una profesión médica que llega tocada y se siente maltratada. También para los que sí se presentaron en sus nuevos puestos de trabajo y para los que supuestamente no tenían nada que ver con el nuevo plan, los médicos de atención primaria, que supuestamente solo harán guardias en los nuevos Centros Sanitarios 24 horas de forma voluntaria. En el antiguo SUAP de las Águilas, por ejemplo, cerrado desde el principio de la pandemia como el resto de 37 SUAP, no había equipos adecuados. Ni un electrocardiógrafo, ni materiales básicos, ni ordenadores operativos, ya que llevaban apagados más de dos años.

Y la presión por el desastre sobrevenido se extendió también a las casas de los facultativos de atención primaria, cuando la voluntariedad pactada saltó por los aires ante la desesperación de la Administración.

“Este plan nos va a acabar salpicando a todos”, avanza Alberto Rodríguez, médico de familia de Paracuellos del Jarama, al noreste de Madrid, quien el jueves por la tarde recibió ocho llamadas casi seguidas de la gerencia para que fuera a trabajar de urgencia. “Yo estaba con mi familia, tenía el día libre y para mí eso es sagrado. No cogí el teléfono porque encima, si dices que no puedes te hablan de muy malas maneras, te obligan a ir, porque esto ya pasó en pandemia”, razona. Rodríguez avanza que no se apuntará a las guardias voluntarias “porque las pagan fatal, a 20 euros brutos la hora, que se quedan en unos 11. No vale la pena”. Por lo pronto, la consejería ya ha empezado a mandar mensajes: “Si eres médico, enfermera o celador de atención primaria interesado en trabajar en los centros sanitarios 24 horas, llama al XXX”

Y ante la falta de voluntarios, las llamadas de urgencia a la atención primaria. Así lo demuestra el pantallazo del móvil de un médico de un centro de salud madrileño, con las horas de las llamadas entrantes del jueves de la gerencia de atención primaria: 19.44, 19.48, 19.50, 19.50 (de nuevo), 20.30, 20.33 y 20.42. Después del pantallazo, varios mensajes de WhatsApp desesperados:

- Yo duchando y dando de cenar a mi sobrino discapacitado, solo en mi casa, además con mis seis hijos. Con una ansiedad que no sabes. Es el [teléfono] de la gerencia. No voy a tolerar este acoso.

Nueva convocatoria de huelga: 7 de noviembre

Mientras el caos y la falta de médicos se instala en el inicio del nuevo plan de las urgencias extrahospitalarias de Madrid, el Gobierno regional avisa de que van a seguir adelante. “La estrategia que va a seguir la Consejería de Sanidad es decirles que este modelo es un modelo que va a venir para quedarse, no podemos olvidar que es un modelo negociado y aprobado por todos los representantes de los trabajadores, por todos ellos, aunque luego uno de los sindicatos cambió después de haber firmado esa desconvocatoria de huelga”, ha lanzado Escudero. De esa manera, trata de trasladar las críticas a los representantes de los trabajadores, que han estado durante dos meses negociando en la mesa sectorial el nuevo plan.

“Las Organizaciones Sindicales firmantes del acuerdo NO vamos a permitir, en ningún caso, que los condicionantes que nos llevaron a convocar la huelga sean pervertidos por otros elementos e intereses que no sean los de los propios trabajadores afectados, sea cual sea su motivo”, han respondido los cuatro sindicatos que firmaron el acuerdo con la Administración en un comunicado conjunto (Satse, CC OO, CSIT UP y UGT). “No vamos a permitir, tampoco, que las condiciones laborales conseguidas para los profesionales de los PAC sean alteradas por los problemas organizativos y las prisas para llevarlas a cabo, del mismo modo, que no vamos a permitir que al final repercuta en el resto de la Atención Primaria y por supuesto que todo ello vaya en detrimento de la mejor atención y de la calidad asistencial para la ciudadanía”.

La tensión de los profesionales se refleja en los propios sindicatos, que siguen defendiendo el pacto al que llegaron con la Comunidad de Madrid porque consideran que mejoraron, y mucho, las condiciones laborales de los sanitarios con respecto al plan inicial que tenía la Administración.

Amyts, el único que no lo hizo tras debatir con sus afiliados el preacuerdo, recuerda al Gobierno de Ayuso que retuerce la realidad. “No firmamos la desconvocatoria de huelga, firmamos un preacuerdo para debatir durante 48 horas sin huelga con los facultativos si suscribían el nuevo plan y no lo hicieron, por lo que después no firmamos el acuerdo”, recuerda Ángela Hernández, portavoz del sindicato médico. El matiz es importante, porque el paréntesis de esas 48 horas tenían una función. La prueba, dice, está en que poco después Amyts registró una nueva convocatoria de huelga en solitario que empezará el 7 de noviembre.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-29/el-caos-de-las-primeras-24-horas-en-las-urgencias-extrahospitalarias-de-madrid-rivas-celador-solo-no-hay-nadie-no-sabe-que-hacer.html>

AYUSO Y LA CULTURA DEL ESFUERZO

La presidenta madrileña asegura que los jóvenes de hoy lo tienen todo. Vuelve a coincidir con el discurso de Vox

La convención, convocada para esta semana por el primer partido de la oposición, se titulaba Juventud, un proyecto de vida. Abrió la jornada Beatriz Fanjul, presidenta de Nuevas Generaciones del PP: “Nos dijeron que si estudiábamos, si cursábamos una carrera, si nos pagábamos un máster, tendríamos la vida resuelta. Somos la generación que ha encadenado prácticas con trabajos temporales, pero no nos resignamos”. La cerró Alberto Núñez Feijóo: “Los que tenéis 35 o menos años, desde que os empezasteis a incorporar al mercado laboral habéis sufrido tres crisis consecutivas: la financiera, la del covid y la actual, agravada por la guerra de Ucrania. Realmente, lo tenéis muy complicado. Lo tenemos todos, pero los jóvenes, de manera muy especial”. En el medio intervino Isabel Díaz Ayuso, quien dijo: “¿Qué dificultades están encontrando los jóvenes hoy en España? Por un lado, la falta de estímulos. Lo tienen todo, o por lo menos tienen mucho más que otras generaciones. (...) Pero les falta esa cultura del esfuerzo que se ha ido perdiendo por las sucesivas leyes educativas que han convertido la educación en España en un gran fracaso, regalando los aprobados e igualando a la baja y con un exceso de promesas que solo lleva a una frustración de expectativas”.

Y estalló Twitter.

En su intervención, Ayuso añadió: “La izquierda se aprovecha de todo: para acortar la infancia, prolongar la adolescencia, sin responsabilidades, y ahora pretendiéndose adueñar de la salud mental. Todo en un mismo pack. Lo único que se pretende es que se estudie menos, se trabaje menos, pero se odie más”. En la convención sobre juventud del PP, la presidenta madrileña (103.090,32 euros de retribución anual) también habló de violencia —“las bandas juveniles... algunas son latinas, otras muchas no lo son, pero esto sucede por las consecuencias de las familias que han venido a vivir con nosotros en la segunda generación”— ; de drogas —“Es un problema que no tiene solución si no se erradica, si no queremos convertirnos en narcoestados. No se pueden financiar los servicios públicos de un país a través de un negocio que destroza vidas”—, y de soledad, lo cual tiene todo el sentido teniendo en cuenta lo anterior (drogas y violencia) —“Tienen menos aficiones, menos pandillas, menos amigos en el barrio...”—.

Feijóo la felicitó por su “extraordinario discurso, no de eslóganes fáciles”. Las generalizaciones son, efectivamente, un terreno fácil para los prejuicios, las caricaturas y las injusticias. Pero para evitarlas están los datos, las estadísticas. Más de un millón de personas en España, la mayoría menores de 30 años, estaban estudiando y trabajando a la vez en el segundo trimestre de 2022: es la cifra más alta desde que la Encuesta de Población Activa empezó a medirlo en 1987. Los españoles se independizan casi a los 30 años, es decir, tres más tarde que la media europea, según Eurostat. El último informe del Consejo de la Juventud en España precisa que, para vivir solo, un joven debe dedicar el 79,2% de su salario al alquiler. Si quisiera comprar, solo la entrada de la hipoteca de una vivienda media del mercado inmobiliario español supondría 3,8 veces su salario neto anual.

No es la primera vez que un político se burla de los jóvenes, quienes votan menos que los mayores. El líder de Vox, Santiago Abascal, que en su día admitió que la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social de la que cobró 83.000 euros de la Comunidad de Madrid entre 2013 y 2014 era un chiringuito innecesario, también ha acusado al Gobierno de acabar con la famosa “cultura del esfuerzo”. Y este verano, Juan García-Gallardo, de 30 años, vicepresidente de Castilla y León, sugirió que los jóvenes alarmados por la emergencia climática hagan “trabajos de prevención de incendios” para quitarse “la tontería” de la ecoansiedad. Como no es bueno generalizar, aclaremos que el joven García-Gallardo, de Vox, es graduado en Derecho, trabajó durante más de cinco años en el bufete de su familia y quedó decimotercero en el campeonato mundial de debate por parejas de 2013. El martes, en el Parlamento de la comunidad que gobierna con el PP, llamó al PSOE “banda criminal” y, hace unas semanas, “imbécil” a Francisco Igea, de Ciudadanos, su predecesor en el cargo. En mi colegio también había un niño así, chuleta, malhablado, y se repanchingaba en el pupitre igual que García-Gallardo en el escaño.

Los niños repiten lo que oyen en casa. Y sus señorías, especialmente las del PP y Vox, a veces también.

<https://elpais.com/opinion/2022-10-28/ayuso-y-la-cultura-del-esfuerzo.html>

AYUSO AUMENTA UN 28% LOS FONDOS PARA BECAS EN CENTROS PRIVADOS A LAS QUE OPTAN FAMILIAS QUE GANAN MÁS DE 100.000 EUROS

La Comunidad de Madrid tiene previsto invertir 163 millones en el curso 2023-2024 para financiar los estudios en cuatro etapas no obligatorias fuera de colegios públicos

El proyecto de Presupuestos para 2023 de la Comunidad de Madrid avanza la apuesta del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por incrementar un 28% los fondos destinados a becas para estudiar en centros privados a las que optan familias que ingresan más de 100.000 euros. Aunque el PP aún necesita recabar el apoyo de Vox para aprobar las cuentas públicas, la documentación enviada a la Asamblea, referente a 2023, sienta las bases para que en el curso 2023-2024 aumente de 127 a 163 millones de euros la partida de dinero público para financiar los estudios de más de 62.000 estudiantes en cuatro enseñanzas no obligatorias a cursar en centros privados (Infantil, Bachillerato, y Formación Profesional de grado superior y medio). Como consecuencia, el presupuesto recogido en las cuentas de 2023 para todas las ayudas educativas, que incluye las becas de comedor, transporte o acceso a libros, se disparará por encima de los 260 millones de euros.

El programa para becas en centros privados lleva en el centro de la polémica desde que EL PAÍS desveló en junio que un cambio en los requisitos de acceso para el curso actual (2022-2023) permite que opten a ellas familias con ingresos de más de 100.000 euros. De cara al próximo curso (2023-2024), la Administración no aclara si modificará esos parámetros para restringir las ayudas a familias con menos recursos económicos. Tampoco detalla si introducirá el requisito de la excelencia académica del alumno para optar a las becas, como planteó el pasado verano el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio. Ni explica si Madrid dejará de darlas exclusivamente para centros privados, lo que convierte a esta región en una excepción en toda España.

“En cada convocatoria anual se establecen los requisitos específicos de cada beca del curso escolar correspondiente”, explica un portavoz gubernamental. “Se publican a lo largo del primer trimestre del año”.

Lo único seguro es que va a haber más dinero. Mucho más dinero. En el curso 2023-2024 se invertirán más de 35 millones más que en el curso 2022-2023 en esta política, que este año ha concentrado en un 10% de alumnos que van a centros privados el 60% del presupuesto de ayudas escolares.

Así, la cuantía para becas de Educación Infantil aumentará de 50,6 millones a 67,3; la de Bachillerato subirá de 43,4 millones a 54,3; la de FP de grado superior se elevará de 30,5 millones a 38,2; y la de FP de grado medio pasarán de 2,43 millones a 3,04.

De esas cifras, proporcionadas a este diario por la Consejería de Educación, se deduce que los 62.000 alumnos que han aprovechado el dinero público para financiar parcialmente sus estudios en centros privados este curso serán muchos más en el próximo. O que aumentará la cuantía individual de unas ayudas que en estos momentos están bloqueadas por la burocracia de la Administración.

Ninguna de las familias solicitantes del curso 2022-2023 ha cobrado todavía un solo euro, según confirma un portavoz de la consejería de Educación. Dos meses después de que hayan abierto guarderías, colegios e institutos, las familias afrontan el pago de la tercera mensualidad de los estudios de sus hijos sin siquiera saber si su solicitud ha sido definitivamente aceptada. Un dato que refleja que se está gastando dinero público para que estudien en centros privados alumnos cuyas familias realmente no necesitan la ayuda, según denuncian los sindicatos: todos han podido pagar hasta ahora sus mensualidades, pese a no tener aún el giro mensual de la beca.

“El pago de las cuantías comenzará a efectuarse en breves fechas, tras pasar los pertinentes trámites administrativos como los plazos de reclamación, subsanación de errores y comprobación de datos de los solicitantes por parte de la Administración”, explica un portavoz gubernamental.

Mientras se resuelve la convocatoria actual, el Gobierno de Díaz Ayuso está decidido a profundizar el modelo educativo implantado en la región por los gobiernos del PP, un partido que lleva en el poder ininterrumpidamente desde 1995. Así, Madrid invertirá en el curso 2023-2024 un 150% más de fondos para este tipo de becas que en el curso 2021-2022. Un salto de gigante con el sello del consejero Ossorio que se ha dado en apenas tres cursos.

El resultado de esa política mantenida durante décadas es que Madrid se ha convertido en el paraíso de la educación privada: solo un 40% de los estudiantes de la capital de España acuden a centros públicos, por el 55% de media de la Comunidad, el 67% del conjunto de España y el 81% de Europa. Más madera: Madrid es la región española con más estudiantes en centros privados puros (15,8%) y tiene un 29,6% en concertados. Sumando las dos variables (45,4%) solo es superado por el País Vasco (48%). Y desde el curso 1994-1995, último con un gobierno socialista en la región, ha perdido el triple de estudiantes en la pública que la media nacional (1,6 puntos).

El curso que viene, el Ejecutivo de Díaz Ayuso dará un paso clave para acelerar esa tendencia: invertir más dinero en financiar con fondos públicos estudios no obligatorios en centros privados.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-29/ayuso-multiplica-un-28-los-fondos-para-becas-en-centros-privados-a-las-que-optan-familias-que-ganan-mas-de-100000-euros.html>

TODAS LAS VECES QUE AYUSO LE HA TORCIDO EL BRAZO A FEIJÓO: ENERGÍA, ABORTO Y CGPJ

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha mostrado disidencia con el PP nacional en numerosas ocasiones

Las discrepancias entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular en la región, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección nacional de la formación neoliberal, encarnada por Alberto Núñez Feijóo, no paran de sucederse.

A los ya numerosos casos en los que la baronesa y el presidente del partido han mostrado tiranteces, esta semana ha habido que sumar un nuevo choque: Ayuso le pidió a Feijóo, mediante un mensaje de WhatsApp, que no pactara con Pedro Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, de acuerdo con la presidenta madrileña, el líder del Ejecutivo quería “engañar” a Feijóo y el acuerdo le parecía “una barbaridad”.

El pasado jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó el municipio de Ordes, en A Coruña, y aprovechó para criticar los movimientos del Gobierno: “Favorecen los indultos y dan mayor peso a quienes quieren romper España”, sostuvo. A su vez, Ayuso indicó que actúa con “absoluta lealtad” al PP y a Feijóo porque su intención es “no entorpecer” la negociación de cara a la renovación del CGPJ, para no suponer “un problema para nadie”. Sin embargo, la baronesa le comunicó en privado al líder del partido lo que pensaba, suponiendo otro episodio más de discrepancias internas entre ambos.

No solo el CGPJ: La ‘rebeldía’ energética y la postura sobre el aborto

Este reciente episodio de tensión entre Ayuso y Feijóo por la renovación del CGPJ es solo uno de los múltiples que se han sucedido entre ambos. En primer lugar, hace escasos dos meses, cuando se anunciaba el plan de ahorro energético del Gobierno de España, consistente en varios paquetes de austeridad energética decretada para varios tipos de establecimientos.

“Por parte de la Comunidad de Madrid, no se aplicarán. Madrid no se apaga”, sostenía en su momento Ayuso, negándose frontalmente a aplicar dichas medidas y sin tener en consideración la postura de Feijóo al respecto, quien consideraba “imprescindible” un plan de ahorro energético. A pesar de estas tiranteces, Feijóo terminó contradiciéndose y alineándose con Ayuso. El PSOE,

por su parte, imploró al líder de la oposición que “pusiera orden” en el seno de su propio partido, para evitar episodios como ese.

Otro de los terrenos donde baronesa y líder nacional chocaron fue el del aborto. Mientras que Feijóo sostuvo tajantemente que “las jóvenes de 16 años no pueden abortar sin permiso” y que “al concebido no nacido hay que protegerlo”, la presidenta de la Comunidad de Madrid defendió que las menores de edad puedan abortar sin consentimiento paterno, tal y como propone la nueva ley del Aborto impulsada desde el Ministerio de Igualdad.

“No puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado”, argumentaba la lideresa del PP madrileño, comprendiendo la situación en la que se encontraban esas jóvenes. A su vez, matizaba: “Creo que una mujer de 16 años necesita reflexionarlo y hablarlo con los suyos. Yo defiendo un aborto legal, seguro y poco frecuente”, manteniendo una postura mucho más distendida y abierta que la del líder nacional del partido.

Así, continúan sucediéndose los episodios de discordancia entre una de las caras más visibles del partido, la de Ayuso, y la dirección nacional de los ‘populares’, en materias de altísima relevancia como las expuestas. El tiempo dirá si ambas figuras encuentran la manera de casar con sus diferencias, pero lo cierto es que las ocasiones en las que ambos discursos han chocado se van acumulando y no parece, por lo pronto, poder evitarse.

https://www.elplural.com/politica/todas-veces-ayuso-torcido-brazo-feijoo-energia-aborto-cqj_300267102

AYUSO PRESIONÓ A FEIJÓO PARA CERRAR LA PUERTA A CUALQUIER PACTO SOBRE EL PODER JUDICIAL

Feijóo da por acabada la posibilidad de acuerdo: “Será con otro PSOE”. Bolaños: “El acuerdo estaba listo. A Feijóo le han doblado el pulso. Empieza su declive definitivo”

Todo está roto de nuevo entre el PSOE y el PP y la crisis institucional y política no para de agravarse. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, da por muerta la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y asegura que, si algún día hay acuerdo para renovar su composición, será “con otro PSOE”, dando a entender que habrá bloqueo hasta después de las elecciones de finales de 2023. El Gobierno entiende que esta frase implica que Feijóo no reconoce la legitimidad de Sánchez y que decide unilateralmente que no negociará hasta que el PSOE cambie de líder, algo que considera inaceptable desde el punto de vista democrático. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presionó a su jefe de filas para que no firmase el acuerdo, según fuentes del entorno de esta.

“Sé que los ciudadanos añoran acuerdos, pactos de Estado. Yo también. Y estoy seguro de que llegarán: con este PP y con otro PSOE”, ha dicho el presidente popular este viernes, durante un acto organizado por El Correo en Vitoria, dictando así la sentencia de muerte a la negociación durante todo lo que queda de legislatura. “¿Qué se puede hacer ahora?”, se ha preguntado a continuación, en referencia al Poder Judicial. “Si el Gobierno no quiere llegar al acuerdo, que le devuelva al Consejo sus competencias”, ha pedido, en referencia a la competencia para hacer nombramientos de altos cargos judiciales que el Ejecutivo quitó por ley al CGPJ mientras siga en funciones, lo que está produciendo —al no renovarse el Consejo— un colapso de casos pendientes en distintas instancias judiciales.

El Gobierno denuncia que el acuerdo sobre el CGPJ estaba absolutamente listo para ser firmado, con fecha incluso para hacerlo —el 2 de noviembre, después del puente—, y que Feijóo decidió romper el diálogo a última hora del jueves porque el sector duro del PP, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, “le ha doblado el pulso” al líder de la oposición. “Empieza el declive definitivo de Feijóo, que no ha aguantado la presión”, ha resumido este viernes Félix Bolaños, principal negociador de Sánchez. El entorno de Ayuso confirma que ella estuvo en contacto con Feijóo el jueves por la mañana, en el momento decisivo, y le dijo que no debía pactar con Sánchez. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, respalda también la ruptura de Feijóo. Moreno llamó al líder popular en la noche del jueves y “le dijo que es absolutamente inaceptable que el Gobierno de España juegue con dos barajas en la reforma de la justicia, porque la reforma de la

sedición es un indulto para [Carles] Puigdemont [expresidente catalán huido en Bélgica]”, ha señalado el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco. “El respaldo es absoluto e inequívoco”, ha zanjado, informa Lourdes Lucio.

Fuentes de la dirección del PP sostienen que Sánchez les engañó porque Bolaños les había prometido que no seguirían adelante con la reforma penal para rebajar el delito de sedición que reclama ERC. El Gobierno contesta que el PP había dicho públicamente que no iban a mezclar las dos cuestiones —el enfrentamiento por la sedición y la negociación sobre el CGPJ— y que de repente ha cambiado de opinión. La portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, fue muy clara el martes en Antena 3 cuando dijo que el PP votaría en contra de rebajar el delito de sedición, pero que la negociación del Poder Judicial iba aparte. Sánchez llamó a Feijóo desde Sudáfrica el jueves por la tarde, convencido de que era una llamada para cerrar la negociación. Le ofreció verse al día siguiente, este viernes, pero Feijóo no podía y por eso, señalan fuentes gubernamentales, pactaron que se verían el 2 de noviembre. El comunicado el PP de la noche anunciando la ruptura dinamitó ese calendario.

El miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había dado a entender en el Congreso que la reforma del delito de sedición iniciaría su trámite, pero ella misma salió el jueves a los pasillos de la Cámara a matizar sus palabras. El Ejecutivo creyó que eso bastaba para rebajar la tensión con el PP. Sin embargo, la conversación entre los dos líderes, el jueves a las 18.30, fue muy mal desde el principio, según constatan fuentes de ambos partidos. El presidente popular exigió a Sánchez que abandonara su idea de reformar el delito de sedición. “Si lo mantienes no puedo seguir adelante”, le dijo. El jefe del Ejecutivo le respondió que eso era un “chantaje” y que nada tiene que ver la agenda legislativa del Gobierno con cumplir la Constitución (que obliga a renovar el Poder Judicial, que lleva cuatro años caducado). Sánchez considera que a Feijóo le han “temblado las piernas” ante la presión del sector duro del partido y del mundo conservador mediático, y subraya que el problema de fondo es que el PP no reconoce su legitimidad como presidente y no asume que hay una mayoría en el Congreso que puede cambiar cualquier ley, incluido el Código Penal, porque así funciona la democracia.

Sánchez se subió al avión de regreso a Madrid convencido de que las cosas estaban mal, pero que podían resolverse el día 2 en La Moncloa. De hecho, en la conversación entre ambos no dieron por roto el diálogo, según fuentes gubernamentales. Pero poco después, ya estando el presidente en pleno vuelo, llegó el comunicado del PP en el que anunciaba la suspensión de las negociaciones y desvelaba la conversación previa de los dos, un gesto que indignó a Sánchez. El PSOE contestó entonces con otro duro comunicado también dando por hecha la ruptura. Y el presidente, cuando aterrizó en Angola para una escala técnica, habló con los periodistas que lo acompañan en el viaje y mostró su “decepción” por la “falta de autonomía de Feijóo” respecto al sector más duro de su propio partido. Aseguró que estaba todo pactado: los nombres de los vocales del nuevo CGPJ e incluso los suplentes. “Habíamos quedado en hablar a las 18.30 para intentar quedar para cerrarlo, o eso pensaba”, contó Sánchez. “Él me ha dicho que con la sedición no puede seguir adelante. Hemos hablado una hora desde el coche camino del aeropuerto. Le he dicho que qué tiene que ver la agenda legislativa del Gobierno —un compromiso que yo tengo desde la investidura— con cumplir con la Constitución”.

Bolaños insiste en que el PSOE y el PP habían abierto hueco en sus agendas para firmar este mismo viernes la renovación del Poder Judicial. “El pacto estaba cerrado. Ya teníamos la fecha para firmar, la primera era el martes pasado y la otra hoy, incluso habíamos reservado hueco en las agendas”, ha afirmado durante una entrevista en la SER.

“El PP nos da una nueva excusa [para no renovar el CGPJ], y van 20, muchas de las cuales dan vergüenza repetirlas. La de ayer es una más, porque el señor Feijóo no tiene autonomía para dirigir el PP”, ha añadido Bolaños. “Ha perdido su crédito como líder de una derecha democrática. Los que tienen el poder de decisión son otros. No es un interlocutor válido”. El Gobierno asegura que sigue pensando en el acuerdo —“No hay alternativa al no acuerdo”, ha apuntado el ministro—, aunque también ha sugerido que si este no se produce el Ejecutivo podría plantearse otras vías de desbloqueo: “Tenemos que pensar si hay alguna opción”, ha respondido a la pregunta de si barajan alguna fórmula para cambiar la ley que regula la renovación del CGPJ.

Después de días de declaraciones contenidas, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha cargado también con dureza contra Feijóo: "No es fiable. No tiene palabra", ha dicho. "Las personas que quieren gobernar un país tienen que cumplir con un principal mandato: respetar la Constitución. El PP lleva cuatro años en rebeldía con la Constitución", ha afeado Díaz a su llegada a un acto de Sumar, el movimiento que impulsa, en Cáceres. "El señor Feijóo no está preparado para gobernar", ha insistido, tras señalar que el acuerdo sobre el CGPJ "estaba cerrado" ya y que el dirigente popular "está faltando a la verdad", informa Paula Chouza. En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hablado en TVE de "día negro para la democracia y el Estado de derecho" y ha acusado al PP de vulnerar la Constitución "desde hace años" mediante "el secuestro del Poder Judicial con excusas".

"Nos han llevado a la ruptura"

Desde Vitoria, Feijóo ha replicado que su partido no puede renovar el Poder Judicial si al mismo tiempo el PSOE quiere "erosionar el Estado de derecho". "El Gobierno nos ha querido llevar a la ruptura, planteando algo que ningún partido de Estado puede aceptar", ha dicho, en alusión a la rebaja del tipo penal de sedición reclamada por ERC y que podría favorecer a algunos líderes del procés encausados o huidos. Feijóo ha acusado al Gobierno de permitir que el Estado sea "demolido o socavado poco a poco" cediendo a los intereses de los partidos nacionalistas, y ha insistido en que Sánchez no puede poner en marcha esa modificación penal sobre la sedición y, a la vez, pretender llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

Su mano derecha en el Congreso, Cuca Gamarra, había afirmado poco antes que es imposible renovar el Poder Judicial y reformar la sedición al mismo tiempo, algo completamente diferente, si no opuesto, a lo que ella misma dijo el martes. "Lo que se constató ayer es que el Gobierno pretende negociar con nosotros el Poder Judicial y a la vez que tiene en marcha una reforma del Código Penal para reducir las penas por sedición para que sea de aplicación directa para los que no han rendido cuentas ante la justicia", ha dicho Gamarra. El martes había desvinculado ambos asuntos.

<https://elpais.com/espana/2022-10-28/bolanos-asegura-que-el-pacto-para-renovar-el-poder-judicial-se-iba-a-firmar-hoy.html>

UN JUEZ DA EL PRIMER PASO PARA DECLARAR EN REBELDÍA A LA FUNDACIÓN FANTASMA QUE PRESIDE AYUSO

La sorprendente demanda civil de Madrid contra la Fundación Dos de Mayo, que le pertenece al 100%, prolonga la estancia en el limbo de una entidad inactiva desde 2014 y a la que se ordenó investigar en 'Púnica' bajo sospecha de financiación ilegal

Un edicto atestigua que el juez que tramita el caso seguía hace un mes sin saber cómo localizar a la entidad: "Quien va a incurrir en rebeldía es la propia fundación ya que no da señales de vida", admiten los portavoces del Ejecutivo regional

El perfil de Ayuso se modifica en el portal de Transparencia para remarcar que la fundación, que obtuvo 6,4 millones de Caja Madrid y mantiene ocultas sus cuentas, está "en proceso de liquidación"

La fundación fantasma que preside Isabel Díaz Ayuso, inactiva desde 2014 y sobre la que se inició una investigación dentro del caso Púnica para esclarecer si había financiado al PP, corre ahora el riesgo de ser declarada en rebeldía. En este caso, por no comparecer a las citaciones del juez ante el que en enero de 2020 el Gobierno de la misma Isabel Díaz Ayuso interpuso una demanda civil.

Hace un mes, el juez emitió un edicto de contenido inequívoco: seguía sin saber dónde y cómo localizar a la fundación, que al no comparecer se sitúa en la antesala de la declaración de rebeldía. Lo sorprendente aquí es que demandante y demandado están dirigidos por la misma persona: Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La demanda, cuya existencia presenta al Gobierno regional de Madrid como quien litiga contra sí mismo por razones que se mantienen en secreto, busca un objetivo: que el juez ordene la extinción definitiva de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad. Es decir, que desaparezca para siempre del mapa la entidad demandada.

Para alcanzar tal objetivo había una fórmula legal más sencilla: que un órgano de control, el Protectorado de Fundaciones, ratificase la extinción acordada por el patronato de la fundación hace nada menos que ocho años, el 29 de julio de 2014. Pero ese paso -coinciden todos los expertos consultados- exigía que la Fundación Dos de Mayo remitiese al Protectorado tanto sus cuentas como sus memorias de actividades. Y eso no ha sucedido.

Aunque sus balances de 2012 a 2014 -y hay dudas sobre 2011- permanezcan en el cajón, lo innegable es que la Fundación Dos de Mayo había recibido en 2008 y 2009 nada menos que 6,4 millones de Caja Madrid. La extinta caja de ahorros también había suministrado fondos a otra fundación -Fundescam- que camufló el pago de actos electorales de Esperanza Aguirre. Fundescam acabó destripada, primero por informaciones periodísticas y finalmente por la investigación de Púnica. De la Fundación Dos de Mayo ha trascendido muy poco. Pero ahora la misteriosa entidad puede incluso convertirse en rebelde.

Sin “señales de vida”

"Quien va a incurrir en rebeldía es la propia fundación ya que no da señales de vida", admitieron este martes los portavoces del Ejecutivo regional en sus mensajes de respuesta a las preguntas de infoLibre. Las mismas fuentes remarcaron que la Comunidad de Madrid y la Fundación Dos de Mayo tienen personalidades jurídicas distintas. Y que el perfil de Díaz Ayuso en el Portal de Transparencia se ha modificado tras las preguntas de este medio: desde este martes ya hace constar que la fundación se encuentra “en proceso de disolución”.

Quienes hablan en nombre del Gobierno de Ayuso subrayan que “en 2020 se ralentizó la justicia por la pandemia” y añaden que, con el edicto, el juez “tiene como objetivo agilizar el proceso y que todas las partes se puedan dar por concernidas”. La Comunidad acudió a los tribunales – insisten las fuentes– porque un informe de sus servicios jurídicos lo señaló como el camino a seguir. “Confiamos en resolver este asunto pronto y en la confianza de que encontrándose en un juzgado es el mejor sitio en el que puede estar para resolver todo aquello que sea necesario”, agregan los portavoces.

Que la demanda lleve dos años y medio arrinconada se explica, según el Gobierno madrileño, por culpa del juzgado: se equivocó –sostienen los portavoces del Gabinete madrileño– al enviar sus notificaciones a la ya inexistente fundación. “El problema en la notificación –dicen las fuentes– ha sido lo que ha retrasado todo este asunto ya que tenía que haber sido remitida a Puerta del Sol número siete [la sede del Gobierno de Madrid] y fue remitida a Gran Vía número 12”.

En su día, ese de Gran Vía fue el domicilio de Fundación Dos de Mayo, constituida en 2007 por Esperanza Aguirre para “reforzar” España. La puso en marcha al abrigo del bicentenario de la Guerra de la Independencia. Y su patronato acordó disolverla el 29 de julio 2014.

Como explica Isabel Peñalosa, directora del área jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), “un demandado es declarado rebelde cuando no comparece en una fecha señalada por el juez en cualquier fase de un procedimiento judicial”.

Otro jurista especializado en la materia, Ramón Pérez Lucena, se centra en que “hay un cierto caos” en Madrid porque el Registro de Fundaciones toma a veces “decisiones que creemos arbitrarias”. Y puede -añade- que el Protectorado no ratificase la extinción de la Fundación Dos de Mayo porque “no le han enviado las cuentas”.

Una resolución... de hace 31 meses

Publicado en el BOE del 30 de septiembre, el edicto sobre la Fundación Dos de Mayo aparece con fecha del 27 de septiembre. Y con ese documento –los edictos permanecen cuatro meses

en un tablón de anuncios digital– avisa a la fundación de que para conocer las resoluciones que le afecten “podrá dirigirse a este órgano u oficina judicial”.

La resolución a que alude el edicto está datada el 5 de marzo de 2020 pero no se conoce lo que dice. Y el objeto del edicto es el “emplazamiento” de la fundación demandada en el plazo de 20 días. Traducido, el emplazamiento significa dar a la parte interesada un plazo para que comparezca ante el tribunal. Y si no lo cumple, se le declara en rebeldía.

“La fundación –remarcan las fuentes oficiales– figura en la ley de presupuestos para 2022 con presupuesto 0 por carecer de actividad o encontrarse en liquidación”. Como ya se ha señalado en un párrafo anterior, entre 2008 y 2009 recibió 6,4 millones de la ya extinta Caja Madrid.

Esa fue una de las claves para que el anterior instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, reclamara en 2017 información a la Agencia Tributaria sobre los ingresos y pagos de la Fundación Dos de Mayo. El magistrado pretendía averiguar si de forma “subrepticia” había financiado al PP. De qué ocurrió con aquel requerimiento, infoLibre no ha logrado averiguar nada. Velasco fue relevado por Manuel García Castellón en el juzgado central de instrucción 6 en junio de 2017.

En un breve párrafo de cinco líneas, el nombre de la Fundación Dos de Mayo y la investigación judicial ordenada por Velasco emergen en el informe final de la Fiscalía sobre la pieza de Púnica que investigaba la financiación del PP. El fiscal no aporta ningún dato sobre a qué resultado condujeron las pesquisas ordenadas por Velasco.

En línea con ese informe, el actual juez instructor de la causa, Manuel García Castellón, ha exculpado a Esperanza Aguirre de cualquier posible delito sobre la financiación opaca del PP madrileño. Según Anticorrupción, no hay indicios de que quien durante una década manejó todas las palancas de poder de la Comunidad de Madrid conociera aquella financiación ilegal. Tres de sus más estrechos colaboradores y subordinados se sentarán en cambio en el banquillo.

https://www.infolibre.es/politica/juez-da-primer-paso-declarar-rebeldia-fundacion-fantasma-preside-ayuso_1_1348554.html

AYUSO PRESIDE UNA FUNDACIÓN FANTASMA INVESTIGADA EN 'PÚNICA', INACTIVA DESDE 2014 Y QUE NO PRESENTA CUENTAS

Creada por Esperanza Aguirre para “reforzar” España, la Fundación Dos de Mayo recibió de la extinta Caja Madrid 6,4 millones cuyo destino ordenó investigar el juez

El Ejecutivo madrileño evita explicar por qué el acuerdo de extinción de 2014 nunca se ha ratificado y por qué la Comunidad presentó hace dos años una demanda civil para disolverla

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, preside a su vez una fundación fantasma, inactiva desde 2014, constituida siete años antes por Esperanza Aguirre para “reforzar” España y sobre la que a instancias de la Guardia Civil se inició una investigación dentro del caso Púnica para averiguar si el PP la utilizó como instrumento de financiación ilegal. De carácter público, esa fundación se llama Dos de Mayo, Nación y Libertad. Y ha desaparecido del mapa del mayor caso de corrupción vinculado al PP tras Gürtel sin que haya trascendido en qué quedaron las pesquisas. Con un patronato dominado por el Gobierno regional, la fundación recibió entre 2008 y 2009 más de seis millones de euros de la ya extinta Caja Madrid.

A partir de 2011, dejó de presentar cuentas y así lo confirman los buscadores que permiten acceder a webs ya inexistentes, como ocurre en este caso. El balance de 2011 figura como publicado pero es imposible descargar el documento.

¿Un pleito de la Comunidad contra sí misma?

Adoptado el 29 de julio de 2014 por su patronato, el acuerdo de extinción de la entidad lleva ocho años en el limbo. Cuatro informes sucesivos de la Cámara de Cuentas regional –fechados entre 2018 y 2021– alertan de que la extinción debía ser ratificada por el órgano que controla a las fundaciones de ámbito madrileño: el Protectorado. Y que si no se ha ratificado es porque la

Fundación Dos de Mayo no aportó “la documentación exigida por la normativa”: en primer lugar cuentas y memorias de actividades.

El Gobierno de Madrid ha denegado a infoLibre la información solicitada el lunes sobre este asunto. Sus portavoces se han limitado a señalar que la extinción definitiva de la Fundación Dos de Mayo pende de lo que dictamine el juez que tramita una “demanda civil” interpuesta por la Comunidad en enero de 2020. ¿Litiga el Ejecutivo madrileño contra sí mismo en lugar de acudir a la fórmula prevista por la ley para el cierre pacífico de una fundación que voluntariamente decidió hace ocho años su extinción? No hubo respuesta. Este es un tema –alegaron las fuentes– que “se encuentra en los juzgados y del que estamos esperando resolución judicial”.

Los portavoces trasladaron a este periódico que si quiere información curse una solicitud a Transparencia. O sea, que espere respuesta durante un mes prorrogable a dos sin certeza de finalmente obtener los datos. Y añadieron que se va a modificar el perfil de Díaz Ayuso. Se hará –afirman– para advertir a quienes visitan la web oficial de la Comunidad de Madrid que la Fundación Dos de Mayo, cuya presidencia se menciona como uno de sus cargos actuales, “está en proceso de disolución”.

El precedente de Fundescam

Sus similitudes con Fundescam, fundación ligada al PP madrileño y que financió campañas electorales de Aguirre con dinero en parte procedente de Caja Madrid, son las que llevaron en marzo de 2017 al juez que entonces instruía Púnica, Eloy Velasco, a requerir datos a la Agencia Tributaria (AEAT) sobre la Fundación Dos de Mayo.

Tal como pretendía la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil y apoyaba la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado pidió a Hacienda la remisión del llamado Modelo 347 de varios ejercicios. Es decir, la relación de ingresos y pagos cobrados y abonados por la fundación, entre 2007 y 2010. Esa diligencia –dice el informe de la UCO y corrobora el auto de Eloy Velasco– “es necesaria para esclarecer si el Partido Popular utilizó también para abonar gastos de campaña de forma subrepticia a la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, a la vista de las importantes cantidades recibidas” de Caja Madrid.

Este periódico no ha conseguido averiguar si tales documentos tributarios llegaron a incorporarse a la causa. Pero desde que en mayo de 2017 saltó a los titulares la existencia del informe de la UCO y del auto judicial dictado dos meses antes –el 22 de marzo–, nunca más se ha sabido nada de la Fundación Dos de Mayo en el marco de Púnica. Sus estatutos, aún vigentes, señalan que debe presidir la fundación quien ostente la jefatura del Gobierno regional. Nació así regida por Esperanza Aguirre, continuó entre 2012 y 2014 con Ignacio González al frente y finalmente está ahora en manos de Isabel Díaz Ayuso.

Eloy Velasco fue relevado el 25 de mayo de 2017 por el actual instructor de Púnica, Manuel García Castellón. Hace 11 días, García Castellón abrió ya la puerta a la recta final para el juicio sobre la pieza de financiación del PP, la número 9 del macrosumario de Púnica. Lo hizo dictando un auto que exonera a Esperanza Aguirre.

Según el magistrado, no se ha acreditado que Aguirre fuera “conocedora” de la financiación opaca de las campañas del PP ni del desvío de dinero público para mejorar su imagen. García Castellón sí mantiene como supuestos responsables penales de tal financiación a tres estrechos colaboradores de Aguirre. Los tres pertenecían al grupo de sus subordinados directos: el antiguo gerente y tesorero del PP regional, Beltrán Gutiérrez; el exsecretario general del partido en Madrid, Francisco Granados; y la que durante años fue jefa de prensa de la lideresa, Isabel Gallego.

El magistrado también exculpa a Ignacio González. A menos que prospere el recurso de la acusación popular, ni Aguirre ni su delfín y luego sucesor se sentarán en el banquillo por Púnica. En su informe final sobre la pieza de financiación, el último fiscal integrado en el caso, Manuel Cabaleiro, reclamó que ambos fuesen exonerados. Las dos fiscales que durante años han investigado Púnica, Carmen García y Teresa Gálvez, no firmaron el escrito.

El informe del fiscal Cabaleiro dedica cinco líneas y media a la Fundación Dos de Mayo en el apartado reservado a la Fundación Caja Madrid. El párrafo no desvela si, al final, la Agencia Tributaria mandó al juez instructor el Modelo 347 de esa entidad. Ni, en caso afirmativo, qué conclusiones se extrajeron de su datos sobre ingresos y pagos. El texto se limita a señalar esto: "El análisis de la documentación remitida [sobre Caja Madrid] hizo que la fuerza actuante [la UCO] remitiese el oficio (...) por el que solicitó el modelo 347 de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad al haber detectado dos transferencias [desde la ahora extinta caja de ahorros] por importe de 4.500.000 euros y de 1.862.760 en los años 2008 y 2009 existiendo también vínculos entre esta fundación y el Partido Popular".

El misterio de las cuentas

Por qué la Fundación Dos de Mayo no remitió al Protectorado las cuentas y memorias de 2012, 2013 y 2014 –quedan dudas sobre las de 2011– constituye de momento un misterio. Pero los expertos consultados incluso en organismos fiscalizadores coinciden en que tales documentos resultan esenciales e irrenunciables para el Protectorado de Fundaciones si una de ellas decide extinguirse.

Cuentas y memorias –confirma Isabel Peñalosa Esteban, directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Fundaciones (AEF)– no son papeles susceptibles de convertirse en un Guadiana que de pronto se sumerge. "Hay que enviar –señala Peñalosa– una serie de documentación que incluye, en efecto, las cuentas anuales, entre otras razones porque tras la ratificación del acuerdo de extinción debe procederse a liquidar la fundación, pagando deudas, si las hubiera, salarios, etcétera". Una vez cumplidos esos trámites, se decidirá a qué destino va el remanente. Si es que existe.

"Si es de forma voluntaria –prosigue la responsable jurídica de la AEF–, el acuerdo del patronato debe ser ratificado por el protectorado, que debe decidir si concurre o no la causa de extinción que alegue el patronato. Lo más habitual es que las fundaciones que acuerdan su extinción se basen en la causa de imposibilidad de cumplimiento de los fines fundacionales".

Y en cualquier caso –concluye Peñalosa– quien ratifica es el protectorado. "Es decir, si no se completa el proceso y no hay ratificación, no puede solicitarse la inscripción de la extinción en el registro de fundaciones".

De hecho, el último informe de la Cámara de Cuentas que aborda lo sucedido con la Fundación Dos de Mayo resalta lo que sigue: "Con fecha 25 de octubre de 2021, el Registro de Fundaciones certifica que en la actualidad no consta ninguna solicitud de extinción de la referida fundación".

Esperanza Aguirre recalcó en su momento que el fin de la Fundación Dos de Mayo era "reforzar el sentimiento de que España es una gran nación". Y defendió que había nacido con "vocación de continuidad" para "impulsar y difundir los valores de Nación y Libertad" catapultados por la resistencia a la invasión francesa de 1808 y luego por la Constitución de Cádiz.

https://www.infolibre.es/politica/ayuso-mantiene-limbo-fundacion-investigada-punica-e-imposible-extinguir-no-entrega-cuentas_1_1341237.html

DECENAS DE MILES DE MADRILEÑOS SALEN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA: "AYUSO, DIMISIÓN"

¿Silbatos?, ¿alguien quiere silbatos?

Una mujer morena de unos 40 años ataviada con una bata blanca reparte silbatos negros al inicio del emblemático paseo del Prado de Madrid. Faltan 20 minutos para que comience una nueva marcha sanitaria en defensa de la sanidad pública madrileña y tres sanitarios comienzan el reparto y el ascenso de las pancartas: "Ayuso, dimisión", "sanidad pública", "un médico para Ayuso". La marea blanca ha salido de nuevo a las calles del centro de la capital hastiada de tanto recorte y, sobre todo, enfurecida ante los últimos movimientos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado una reforma de las urgencias extrahospitalarias con más servicio, pero con el mismo personal. Más de 50.000 madrileños, según el cálculo de la Delegación de Gobierno, y más de 23.000, según la organización (los sindicatos Satse, CC OO, Amyts, CSIT-

UP y UGT), han ocupado la calle entre la glorieta de Neptuno y Sevilla durante al menos tres horas.

A la concentración también se han sumado los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid. “Tenemos un Gobierno en huelga, de brazos caídos y desguazando la joya de la corona en Madrid, que es nuestra sanidad pública”, ha dicho Mónica García, líder de Más Madrid. “El modelo del PP no funciona, los servicios no se están cubriendo”, ha manifestado Juan Lobato, portavoz del PSOE. “Estamos hartos”, ha recalcado Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos. La realidad, más allá de la política, es que vienen semanas turbulentas para la sanidad madrileña.

El Gobierno regional anunció el pasado jueves la reapertura —aunque con el calificativo de “apertura” como un neologismo que hace pensar al ciudadano de a pie que son nuevos— de los 78 puntos de urgencias extrahospitalarias de la región. Es decir, 40 centros de salud rurales, conocidos como Servicio de Atención Rural (SAR) que han seguido abiertos todo este tiempo, y 38 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que estuvieron cerrados durante la pandemia. El principal problema es que la Consejería de Sanidad quiere que estos 37 centros de atención primaria sean atendidos solo por los sanitarios que trabajan en los servicios rurales. Es decir, por la mitad. Un movimiento que implica cambios de turnos en el planillo, realizar más horas, o que algunos se cambien de centro. La situación es tan delicada, que hay prevista una huelga indefinida en la atención primaria a partir de este martes. Y, tres días después, la de las urgencias del hospital Infanta Sofía. “Empezamos a temer por la seguridad de los pacientes”, asegura Marina Parras, urgencióloga desde hace 21 años y delegada sindical de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts).

También los municipios de la región. María Chamón, de 39 años, es médico de familia en Cadalso de los Vidrios, un pueblecito de 3.000 vecinos a unos 80 kilómetros al suroeste de la capital. Ha acudido a la marcha junto a su niña pequeña, que corretea entre batas blancas. Dice que antes del anuncio de la presidenta, los centros de atención rural funcionaban a la perfección. No había problemas. “Éramos un reducto, sí, pero ahora todo es distinto”, explica. “No sé donde voy a trabajar la semana que viene. Si aceptamos esto, no se podrán cubrir festivos ni noches. Anoche no hubo médicos en Cadalso por primera vez en años. Es sencillo de entender”.

—¿Por qué cree que se toma esta decisión?

—Porque juegan con nuestra ética profesional. ¡Cómo vamos a dejar de atender a nuestros pacientes!

A la conversación se une Alberto Lafuente, de 53 años, un celador. “En tres semanas ha cambiado todo. Hemos pasado de hacer 1.500 horas a 2.300”. Tanto médicos, como enfermeras y personal auxiliar se sienten “ninguneados” por la Administración de Ayuso. Son la piedra angular de un nuevo proyecto de las urgencias situadas en los centros de salud de los municipios y en zonas rurales, pero nada se ha pactado con ellos. A esto se suma el deterioro paulatino y acumulado durante décadas. Por no hablar de pedir cita para el médico de cabecera. O del especialista. “Las consultas te las dan para muchos meses”, cuenta María Ángeles Villarán, de 66 años y vecina del barrio de Valdezarza. “He pedido para el traumatólogo y para el digestivo y me han dado para dentro de cuatro meses. Se necesita personal. No pueden atender a todos. Mi traumatóloga, por ejemplo, está en dos centros distintos. ¡No puede ser!”. El miércoles le llegó la convocatoria de la manifestación por un mensaje de WhatsApp y decidió sumarse.

Hay mucho hastío y cansancio entre los profesionales consultados. Una médica dice que ya no le importaría dejarlo todo e irse al Mercadona a trabajar. Cada uno cuenta un drama interno de su hospital o de su centro. “En mi centro de salud somos 10 médicos y estamos solo dos”, relata Dante Rafael, médico de Entrevías, en Vallecas. “Todos los días dejo a ocho, nueve o diez pacientes sin atender. No llego, no llego, pero tengo que irme a mi casa cuando termino mi turno. Necesito estar bien mentalmente”. Dice que los médicos jóvenes ya no quieren quedarse en Madrid. “Se van porque tienen mejores condiciones en otros países o comunidades”. De pronto, un sanitario agarra un megáfono: “Hacía falta ya una huelga, una huelga. Hacía falta ya una huelga en Sanidad”.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-22/decenas-de-miles-de-madrilenos-salen-en-defensa-de-la-sanidad-publica-ayuso-dimision.html>

EL TSJ DE MADRID CAMBIÓ EN FAVOR DE AYUSO SU CRITERIO SOBRE LA MEDICALIZACIÓN DE LAS RESIDENCIAS EN EL COVID

El tribunal ordenó en abril de 2020 al Gobierno de Madrid que las dotase de medios sanitarios para cumplir “lo previsto” en la normativa estatal sobre el covid-19, pero en julio de este año sentenció que nunca hubo obligaciones concretas

Nada más estallar la pandemia, la Comunidad anunció oficialmente que las medicalizaría: ahora, el TSJ califica de “inexigible” que se lleven a cabo las “promesas electorales o manifestaciones de voluntad”

Donde dije digo, digo Diego. El refrán más popular sobre el cambio de criterio podría resumir lo sucedido en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) tras el largo pleito iniciado en abril de 2020 por el Ayuntamiento de Alcorcón para obligar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a atender su solicitud de medicalizar cuatro residencias de mayores. Entonces ya se contabilizaban en las cuatro, todas sin personal sanitario, 116 muertes por el Covid. Y la respuesta del TSJM fue inmediata: antes de acabar ese mes de abril, con un auto ratificado luego en cuatro ocasiones y con la figura de las “medidas cautelares” como soporte, el TSJM ordenó a la Comunidad de Madrid medicalizar aquellas instalaciones para cumplir “lo previsto” en la normativa legal sobre la pandemia. Pero dos años después y sin que trascendiera la contradicción que entrañaba, el mismo tribunal dictó el pasado 7 de julio una sentencia donde sostiene lo contrario: que la normativa sobre residencias para combatir la pandemia, normativa derivada de una orden estatal, no establecía “ninguna obligación con un contenido prestacional concreto y determinado a cargo de los órganos autonómicos competentes”.

Esa fue desde el comienzo de esta batalla judicial la tesis de la Comunidad de Madrid: no existía “como tal una obligación de dotar de un uso sanitario a los centros residenciales”. El entrecomillado procede de la respuesta a la demanda del Ayuntamiento de Alcorcón que en diciembre de 2020 remitió al TSJM la Comunidad de Madrid.

El cambio de criterio del tribunal madrileño benefició al Ejecutivo de Ayuso al ver avalada su gestión por el TSJM. Se libró así de ser condenado en el ámbito de lo contencioso por incumplimiento de deberes. O lo que es lo mismo, por una “inactividad” —ese es el término legal— que se habría incrustado en titulares periodísticos y redes sociales.

Pero el respaldo final del TSJM al Gobierno madrileño no acabó ahí. El 12 de marzo de 2020, dos días antes de la declaración del estado de alarma en todo el país, el Ejecutivo madrileño había proclamado la puesta en marcha de “un plan histórico que unirá la sanidad pública y privada bajo una única coordinación”. El comunicado oficial decía literalmente esto en su tercer punto: “Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”.

Comunicado CM.

En su sentencia del 7 de julio, sin embargo, el TSJM dedica un párrafo a la nota de prensa sobre ese “plan” de medidas, a cuyo contenido nadie ajeno al Gobierno regional ha tenido nunca acceso. Y lo que se lee en ese párrafo de la resolución judicial cabe condensarlo así: el comunicado oficial era un papel mojado con derecho a serlo y sin consecuencias jurídicas de ningún tipo para quien lo lanzó porque las promesas no conllevan obligación de cumplimiento.

Según el TSJM, de aquel comunicado oficial el Ayuntamiento de Alcorcón dedujo que la Comunidad había optado “por una determinada línea de actuación que, en definitiva, considera que no siguió”. Pero ese razonamiento, prosigue la sentencia, “no puede siquiera tomarse en consideración a estos efectos [los de la acusación de que incumplió su deber e incurrió en inactividad], pues ello equivaldría a atribuir efecto vinculante —en definitiva, convertir en disposición general— todas y cada una de las promesas electorales o manifestaciones de

voluntad o intención de actuar de determinada manera de los dirigentes políticos, cosa que desde luego es inasumible e inexigible desde el punto de vista del derecho positivo”.

En ambos casos –el del auto inicial del 21 de abril de 2020 y el de la sentencia de este último 7 de julio–, quien encabezó el grupo de magistrados encargados de pronunciarse fue Juan Pedro Quintana: es decir, el presidente de la Sala de lo Contencioso del más alto tribunal madrileño. infoLibre trasladó al TSJM una pregunta sobre por qué la sentencia dictada el 7 de julio difiere de forma sustancial de los autos emitidos por el mismo tribunal. Pero según las fuentes consultadas en el tribunal madrileño, el presidente de lo Contencioso no considera oportuno hacer ningún comentario sobre las resoluciones judiciales de su Sala.

Recurrida ahora ante el Supremo por el Ayuntamiento de Alcorcón (PSOE), la sentencia del TSJM cosechó el voto particular –es decir, discordante– de dos juezas. Las magistradas mantienen la convicción firme de que la normativa estatal y autonómica sí imponía a la Comunidad de Madrid el deber legal de medicalizar las residencias, un concepto que el propio TSJM había marcado a cincel en un auto fechado el 30 de abril de 2020: medicalizar una residencia de mayores –remarcó aquella resolución– “puede considerarse lo que, en la propia Comunidad de Madrid y al amparo, sin duda, de las mismas normas que se han reproducido y que aquí interpretamos, se ha llevado a cabo de forma notoria y públicamente conocida en algunos hoteles de la capital y en el recinto ferial de Ifema”.

Varias líneas antes, el tribunal había dejado claro que la petición del Ayuntamiento de Alcorcón y “el preciso término” que definía su solicitud –medicalización– “han sido interpretados por la Sala a tenor de lo dispuesto en las Órdenes, ministeriales y autonómicas” previamente reproducidas.

Una de las dos autoras del voto particular, Pilar García, había participado en esa resolución y en las otras cuatro que sucesivamente confirmaron lo establecido en el auto inicial. Es decir, en aquel del 21 de abril de 2020 donde el tribunal ordenaba a la Consejería madrileña de Sanidad “dotar de manera inmediata a las residencias de mayores de Alcorcón (...) de personal sanitario necesario”. Y asignarles también “los medios materiales precisos para llevar a cabo pruebas diagnósticas y cumplir lo previsto en la Orden SND/265/2020 [de carácter estatal], de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

Juristas ajenos a la causa y consultados por este medio apuntaron a un argumento que consideran demostrativo de la contradicción entre los autos del TSJM y su sentencia definitiva: el tribunal aduce que no existió “inactividad” pese a que fue la resolución del 21 de abril de 2020 la que obligó a la Comunidad de Madrid a poner en marcha una determinada actividad hasta entonces inexistente. Inexistente –agregan las fuentes– fue la medicalización de las cuatro residencias de mayores de Alcorcón hasta que el tribunal se la impuso.

Esta semana, la catástrofe de las residencias de mayores madrileñas durante la pandemia ha vuelto a la escena política madrileña. Con un veto oficial a que, como desveló infoLibre [puedes acceder aquí al dossier] los contagiados fuesen ingresados en hospitales, se registraron más de 7.000 muertes en las residencias de la Comunidad. Con Vox como muleta parlamentaria, el PP acaba de aplicar otro veto: el de investigar la gestión seguida en esos centros.

El plan que se sustenta (solo) en una nota de prensa

Abortada por segunda vez –la primera fue en noviembre de 2021–, la investigación sobre las residencias no se llevará a cabo. El PSOE ya ha anunciado que prestará ayuda a los afectados para llevar el caso a la justicia europea. Pero, de momento, seguirá siendo un misterio el plan de marzo de 2020 que, según los comunicados oficiales –uno del día 12 y otro del 26–, incluía la “medicalización de las residencias”.

Quien en ese momento ostentaba el cargo de consejero de Políticas Sociales en nombre de Ciudadanos, Alberto Reyero, asegura que tampoco sabe en qué consistía exactamente aquel supuesto plan. “Es importante –afirma en declaraciones a infoLibre– leer la nota de prensa publicada ese día acerca del plan de choque porque es el único soporte documental público acerca del plan”. Reyero, que ha publicado un libro donde desnuda la situación –Morirán de

forma indigna– afirma que "no existe ningún documento que contenga el plan de choque como tal. Es terrible, pero es así".

Alberto Reyero, que terminó dimitiendo y que había intentado sin éxito un cambio en la política sobre las residencias durante la pandemia, no se queda ahí: "Hay una curiosa costumbre en la Comunidad de Madrid –prosigue– que consiste en anunciar planes sin ninguna clase de soporte documental, más allá de la nota de prensa, que no falta nunca".

Nadie los puede por tanto evaluar, remarca el exconsejero madrileño antes de asestar otro mazazo al Gobierno de Ayuso: "Los denominan planes, pero no tienen objetivos, ni calendario, ni responsables. Nada. Desde el punto de vista formal son un verdadero desastre, pero tienen una ventaja imbatible: con el paso del tiempo, nadie puede evaluar si han sido un éxito o un fracaso. Ya lo dijo un personaje de una famosa serie británica en los años ochenta, Yes Minister: «Si la gente no sabe lo que haces, nunca sabrá lo que haces mal»".

https://www.infolibre.es/politica/tsj-madrid-cambio-criterio-favor-ayuso-medicalizacion-residencias-covid_1_1343242.html

EL PLAN ALQUILA DE AGUIRRE LANGUIDECE CON AYUSO

La Comunidad de Madrid achaca el desplome de contratos firmados bajo el paraguas del Plan Alquiler a la aparición de competencia privada y el descenso de la oferta "por miedo a la okupación"

El Plan Alquiler nació en 2007 como una palanca para estimular la oferta de vivienda en alquiler en la Comunidad de Madrid. Según la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, se trataba de "remover los obstáculos que se ciernen sobre los propietarios por temor a impagos y destrozos". Básicamente, consiste en que el Gobierno regional ejerce de avalista de los inquilinos durante el primer año para cubrir las rentas en caso de impago.

El problema es que esos incentivos públicos resultan cada vez menos atractivos, a juzgar por los datos que arroja el propio plan. En 2021 se firmaron 1.749 nuevos contratos bajo este paraguas y se renovaron otros 1.122. En total, 2.871 arrendamientos, casi mil menos que los que se registraban tres años antes, según los datos obtenidos por la Cadena SER en aplicación de la Ley de Transparencia. Hace una década, en 2012, la cifra de operaciones anuales superaba las 12.800.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura lo achacan, entre otras cuestiones, a la aparición de competencia privada que ofrece protección a los caseros frente a la morosidad. "Ahora hay muchas plataformas privadas que cubren ese servicio", alega el viceconsejero de Vivienda, José María García, que habla de "estabilidad en torno a los 2.000 o 3.000 contratos firmados desde 2016".

En los mejores momentos del Plan Alquiler -entre 2009 y 2011-, el número de viviendas disponibles en el programa superó las 11.000 en toda la región, pero desde entonces su número ha caído en picado. En 2021 la oferta fue de solo 937 pisos. En ese año, el último con datos completos, la demanda fue también algo menor que en la edad dorada del programa, pero se mantuvo por encima de los 25.000 ciudadanos interesados en arrendar bajo el paraguas público. El resultado es que el descuadre entre oferta y demanda en el Plan Alquiler se ha disparado: si en 2010 había 3 potenciales inquilinos por cada vivienda disponible, en 2021 esa relación se disparó a 26 demandantes por piso.

Son datos que aparecen en el expediente público de contratación del seguro por impago que suscribe el Gobierno regional cada dos años para poder dar esas garantías y que supone una inversión de 575.137,62 euros. También revela que el saldo que arroja el Plan Alquiler está bastante por debajo de las estimaciones de la propia Consejería, que -según ese expediente- "prevé la formalización de un total de 4.000 contratos de alquiler al año".

"Es una cuestión de carencia de oferta", reconoce García, que la achaca "al miedo al riesgo a la okupación o a la intervención de precios", a pesar de que el objetivo de este instrumento es

precisamente salvar esas retenciones. Además, la escasa oferta de pisos en alquiler en el marco del Plan Alquiler contrasta con las cifras que ofrecen servicios privados de intermediación como idealista.com. Esa web, que no ofrece protección adicional alguna a los arrendadores, contaba el pasado martes con 10.649 inmuebles disponibles para alquiler.

La Consejería trata ahora de revitalizar el programa aumentando las garantías en el caso de los inquilinos de menos edad. Lo ha bautizado Plan Alquiler Joven y ofrece avalar a los menores de hasta 35 años durante 24 meses, en lugar de los 12 que ofrece el programa original. Durante los ocho meses que estuvo en marcha en 2021 –empezó a funcionar el 27 de abril- propició la firma de 630 contratos. En los ocho meses de 2022 para los que hay datos –del 1 de enero al 31 de agosto- la cifra bajó a 534.

La gestión del Plan Alquiler –y su hermano menor para jóvenes- está externalizada desde su creación y tiene un coste en torno al medio millón de euros anual, según se desprende de los expedientes colgados en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid. Entre las obligaciones del adjudicatario que aparecen recogidas en los pliegos está “la captación de viviendas libres susceptibles de inscribirse en el Plan Alquiler”. La última adjudicación se realizó en el año 2021, para dos años, por un importe máximo de 830.610,55 euros, aunque la Comunidad de Madrid tuvo que anularla ante el recurso de otra de las empresas que participó en el concurso.

<https://cadenaser.com/cmadrid/2022/10/21/el-plan-alquiler-de-aguirre-languidece-con-ayuso-radio-madrid/>

MADRID YA ROZA EL MILLÓN DE PACIENTES EN LAS LISTAS DE ESPERA EN PLENA BATALLA DE LOS SANITARIOS CON AYUSO

Los sindicatos ultimán los preparativos de los paros de la próxima semana contra la reforma de las urgencias extrahospitalarias

Nuevo mes y nuevo récord. La Sanidad madrileña bate otra plusmarca personal, superando el registro del pasado agosto. Las listas de espera en la Comunidad de Madrid se disparan por encima de los 900.000 pacientes y ya rozan la redonda cifra del millón tras experimentar un incremento de 46.681 pacientes. Hasta 933.367 personas esperan para ser atendidas por su especialista o bien para someterse a una operación quirúrgica o a una prueba diagnóstica. Es decir, en términos porcentuales, un 13,84% de los madrileños espera para ser atendido.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, como es habitual, ha publicado sus datos del mes de agosto en lo relativo a las listas de espera en la tensionada Sanidad madrileña. Algunas voces en la Asamblea apuntaban a una bajada en estos guarismos durante el mes de septiembre, pero nada más lejos de la realidad. Un total de 46.681 pacientes (886.686 en el mes de agosto) se han sumado a las largas colas para ser atendidos en los hospitales de la región. El incremento en septiembre deja a casi un millón de personas en las listas de espera.

Las consultas externas son las que más se resienten, una vez más. El mes pasado, las listas de esperas de esta área superaban ligeramente los 600.000 pacientes. En septiembre, cerca de 31.000 madrileños se han sumado a la cola para una primera consulta. Del total de ciudadanos a la espera de ser atendidos (643.332), cerca de 400.000 tienen plazos de demora superiores a los 90 días, mientras que la cifra se reduce hasta los 63.946 entre la horquilla de 60 y 90 días.

Las operaciones quirúrgicas no quedan exentas de demoras, aunque han contenido su subida, anotando a 2.752 madrileños en las colas. Las esperas medias superan los 80 días e incluso se pueden disparar hasta los 180, como les ocurre al 26% de los pacientes que esperan someterse a una intervención. Más allá de esos seis meses de espera se sitúan el 7% de los madrileños.

Los madrileños que están a expensas de una cita para una prueba diagnóstica se han incrementado en 13.000, disparando el total de personas hasta bordear las 200.000 (190.721). Más de la mitad de los integrantes de esta lista tienen una demora de más de 90 días para someterse a una colonoscopia o similar. De hecho, los plazos medios que estipula la Comunidad de Madrid se disparan hasta los 63 días.

Enfrentamiento Moncloa-Sol

Precisamente esta demora en las pruebas diagnósticas provocó un conato de enfrentamiento entre Moncloa y la Puerta del Sol. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba cuenta de las nuevas medidas para contener el impacto de la guerra en los bolsillos de los ciudadanos, la Asamblea vivía su particular foco de tensión, con la gestión de las residencias en plena efervescencia.

Sin embargo, en diferido, la presidenta madrileña aprovechaba sus intervenciones en la sesión de control para responder a una “mentira” que Sánchez vertió, a su juicio, en el fragor del debate en la Carrera de San Jerónimo. Un dardo bidireccional, que Ayuso no dudaría en replicar desde su escaño en Vallecas.

Sánchez reposó parte de su alocución sobre el estado de la Sanidad madrileña con el fin de denunciar que la acción política del Partido Popular lamina y deteriora el Estado del Bienestar. De hecho, matizó que el jefe de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, busca el recorte del sistema de salud pública.

Como ejemplo, Sánchez utilizó las listas de espera en la Comunidad de Madrid, tras preguntarse si los españoles buscan una sociedad “más igualitaria” y con un buen sistema sanitario o una “Sanidad débil” y salpimentada con servicios privados incapaces de cubrir todas las necesidades del paciente. “¿Aceptamos con normalidad que a pocos metros de aquí (en la Puerta del Sol) la administración sanitaria esté dando citas para hacer una colonoscopia para dentro de un año?”, se cuestionó el jefe del Ejecutivo.

La réplica no tardó en llegar desde Sol, en boca de la propia presidenta de la Comunidad de Madrid. Mientras Ayuso se sometía al control de la Cámara, acusó al presidente del Gobierno de falsear los datos. La lideresa conservadora sugirió que su “desesperación” le lleva a “faltar el respeto” a los profesionales de la Sanidad madrileña. “No se lo merecen”, apostilló. En este sentido, justificó que su autonomía presenta “mejores datos” que cualquiera bajo dominio socialista, incluyendo las tensionadas listas de espera.

De hecho, en la sesión plenaria de este mismo jueves, el Partido Popular interpelará a su presidenta sobre las “mentiras” vertidas, a su juicio, por Sánchez en sede parlamentaria. No obstante, los socialistas buscan desactivar la maniobra conservadora mediante la figura de Marcelino, un madrileño que tiene una cita para una prueba diagnóstica para el mes de octubre, pero del año 2024.

Tensión con sanitarios

El ambiente está enrarecido en torno a la gestión de la Sanidad madrileña con la polémica reapertura de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAPs), tras dos años clausurados sin explicación previa. Sobre este asunto, entre otros, pivota el paro convocado por los sindicatos de sanitarios para el 25 de octubre.

Esta convocatoria, sin embargo, no termina de encajar en la mente de la presidenta regional. En declaraciones a Espejo Público este pasado miércoles, Ayuso calificó la cuestión como una “polémica política” alentada desde la izquierda parlamentaria a través de sus brazos sindicales. “La huelga se producirá cuando se abran los SUAPs”, desliza la lideresa mientras afea y cuestiona la actitud de los sindicatos. Por ello, distingue entre dos tipos de “intenciones”; la de aquellos trabajadores que buscan “ofrecer el mejor servicio al ciudadano” y los que enarbolan la bandera sindical “a sueldo de un partido” porque ellos, a juicio de la popular, “nunca arrimarán el hombro”. “Parece que no quieren que abran”, deslizó.

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/madrid-roza-millon-pacientes-listas-espera-plena-batalla-sanitarios-ayuso_299720102

AYUSO APLAUDIÓ EL MODELO FISCAL QUE HA PROVOCADO EL DECLIVE DE LIZ TRUSS EN REINO UNIDO

La izquierda política se pregunta qué tiene que decir ahora la presidenta madrileña

Liz Truss, hasta ahora primera ministra de Reino Unido, ha presentado este jueves su dimisión por las constantes presiones que han despertado tras sus políticas económicas. La dirigente británica ha ocupado el máximo cargo de Downing Street por 45 días.

Ante tal acontecimiento histórico, y teniendo como telón de fondo la crisis energética y económica que asola Europa, cabe recordar cómo desde España, y especialmente desde la Comunidad de Madrid, se apoyaron las medidas de Truss que han derivado en su acelerado declive político. Isabel Díaz Ayuso compartió en redes sociales un titular de prensa que rezaba: “Reino Unido anuncia una masiva bajada de impuestos”, seguido de una pregunta que formulaba ella misma: “¿Y cómo piensa el Gobierno de Sánchez frenar el ‘dumping internacional’?”.

Ahora, esta cuestión se le ha vuelto en su contra. Muchos usuarios de las redes, y otros rostros políticos, han recordado este posicionamiento a la par que han puesto de relieve la renuncia de la británica. “Ayuso presumió con sorna defender el modelo que ha hecho dimitir a Liz Truss en 45 días después de mandar a pique a la economía británica. ¿Ahora qué tiene que decir?”, se pregunta Mónica García, líder de Más Madrid.

Unas palabras que ha secundado la portavoz de la misma formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre: “Esperando el tuit de Ayuso sobre su admirada Liz Truss y lo bien que ha funcionado su descabellada política de rebajas fiscales a los ricos en plena crisis”. Así como Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos en la Asamblea regional: “¿Qué debería hacer Ayuso?”.

Reproches a la derecha española

Incluso desde el ámbito nacional, Ayuso también ha sido el objetivo de las críticas: “Lo que está sumiendo en un caos económico absoluta al Reino Unido y lo que ha hecho dimitir a su primera ministra tras solo 45 días en el cargo es exactamente lo mismo que están prometiendo las derechas aquí. Tengan la bandera que tengan. Neoliberalismo salvaje”, ha advertido el diputado de ERC, Gabriel Rufián.

“La dimisión de Truss no sólo muestra lo caduco de sus ideas, sino las que el PP jaleaba y ahora calla. Si siguen con las mismas recetas, correrán la misma suerte”, se ha pronunciado en la misma línea el dirigente principal de Más País, Íñigo Errejón.

El temprano adiós de Truss

Alrededor del mediodía de este jueves, la primera ministra británica daba una breve rueda de prensa para comunicar su decisión final: “No puedo continuar el mandato que me fue encomendado por el partido (...) Continuaré en el cargo durante el periodo de transición”, ha esgrimido.

Su renuncia ha sido la guinda del pastel tras los escándalos previos que se han ido sucediendo en su corto mandato, como la destitución de su ministro de Finanzas después de dar marcha atrás a su plan fiscal y su modelo de bajos impuestos, así como la dimisión de la ministra de Interior este miércoles.

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/ayuso-aplaudio-modelo-fiscal-ha-provocado-declive-liz-truss-en-reino-unido_299759102

MONCLOA RECALCA QUE, EN PROPORCIÓN, TIENE MENOS ASESORES QUE AYUSO EN MADRID Y FEIJÓO EN GALICIA

Esgrime, además, que el personal es necesario por la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas

El subsecretario de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Alberto Herrera, ha defendido este miércoles la necesidad de contar con asesores en la Moncloa y ha replicado a las críticas del PP y Vox por lo que consideran un número desorbitado de personal eventual adscrito a este departamento subrayando que, en proporción, la Administración General del Estado cuenta con menos eventuales que la Comunidad de Madrid, donde gobierna Isabel Díaz

Ayuso, o Galicia donde hasta hace unos meses lo hacía el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha expuesto Herrera durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde, un año más, el PP y Vox han censurado el "infinito" número de asesores que hay en Moncloa según el diputado de Vox José María Sánchez. De su lado, la 'popular' Edurne Uriarte ha denunciado que el gasto en asesores ha pasado de siete millones del último presupuesto de Mariano Rajoy a más de 19 millones.

Herrera ha destacado que el personal eventual, con el que también cuentan los grupos parlamentarios, es necesario en las administraciones públicas para responder a la cada vez más creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas de los responsables públicos.

A su juicio, más que por su número, el trabajo de estas personas debe juzgarse por sus resultados. En cualquier caso, él también ha tirado de cifras y ha contrastado el personal eventual de la Administración General del Estado con el de otras dos administraciones gobernadas por el PP.

Según estos datos, en la Comunidad de Madrid, una región con más de seis millones de habitantes, hay 268 eventuales, y en Galicia la cifra asciende a 167. "Aproximadamente son 3,97 eventuales por cada 100.000 habitantes en Madrid y 6,2 por cada 100.000 habitante en Galicia, mientras que en la Administración General del Estado son 1,79 por cada 100.000 habitantes", ha comentado.

Modulen los decibelios

Por eso ha pedido a PP y Vox que "modulen los decibelios" de sus críticas sobre este particular. Además, les ha explicado que para censurar ese puesto excesivo número de asesores de Moncloa utilizan el número de plazas creadas para este tipo de personal, pero que no tienen por qué estar "cubiertas".

Asimismo, ha recordado que en 2019 se concluyó que los funcionarios de carrera que trabajan en el ámbito de Presidencia del Gobierno debían ser "computados como personal eventual". Se trata, ha dicho, de 124 empleados públicos que a los que, de no ocupar esas plazas habría que pagar igual porque son funcionarios.

Herrera también ha insistido en el dato de que "nada menos que 224" personas contratadas como personal eventual en el complejo gubernamental llevan allí "más de cuatro años", es decir, que ya estaban cuando gobernaba Mariano Rajoy y probablemente también presidentes anteriores.

Tres euros por habitante para la Presidencia de la UE

El subsecretario también ha replicado a los reproches del PP y Vox por el, desde su punto de vista, "excesivo" gasto previsto para la Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.

Herrera ha incidido en que se trata de unas cifras "razonables" que corresponden a "cerca de tres euros por habitante", frente a los más de once, por ejemplo, que empleó Suecia para organizar su presidencia de turno.

En concreto, el Gobierno tiene prevista una partida de 146 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para organizar la presidencia comunitaria, una cifra que se reparte entre varios ministerios, aunque el grueso corresponde a los de Presidencia y Exteriores.

https://www.elplural.com/politica/moncloa-recalca-que-en-proporcion-tiene-menos-asesores-ayuso-en-madrid-feijoo-en-galicia_299714102

AYUSO CREE LAS LEYES TRANS SON "MUY AGRESIVAS" PORQUE "NIEGAN EL SEXO A LAS PERSONAS Y SOBRE TODO LAS CONFUNDEN"

"Yo creo que se están mezclando cuestiones que tenemos que revisar entre todos porque cuando se negocian entre partidos acaban en negocio", dice la presidenta de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que las leyes trans, tanto la que se tramita a nivel estatal o algunas regionales, son "muy agresivas" porque "niegan el sexo a las personas y sobre todo las confunden y las llevan a situaciones dolorosísimas que van a pagar siempre".

Preguntada por la polémica dentro del PSOE por el retraso de la aprobación de la ley, que ha provocado la dimisión de la histórica diputada Carla Antonelli, Ayuso ha señalado que "qué barbaridad no llevará" para que dentro de este partido "sean los primeros que se dan de baja de todo eso".

"Yo creo que se están mezclando cuestiones en estas leyes que tenemos que revisar entre todos y no partidos políticos como se está haciendo, porque cuando las leyes solo se negocian entre partidos acaban en eso, en un negocio. Yo apruebo un Presupuesto si es con la ley esta... medidas no se qué... y eso es repugnante", ha manifestado, en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

"Estas leyes, no son solo de aquí, en Madrid también la hemos tenido, tenemos que analizarlas con cabeza y ver si esto está ayudando", ha apuntado a continuación.

A su parecer, "se están mezclando cosas distintas", por un lado, el "ayudar y acompañar a todas las personas que pasan por un proceso tan complejo, tan duro, como es el cambio o no de sexo", y, por otro, el que se esté diciendo "a mucha gente que pueden cambiarse de sexo sin ninguna preocupación y que no pasa nada". "Que las familias no importan, que los médicos no importan", ha apostillado.

Para la presidenta madrileña, se está llevando a mucha gente a "meterse en procesos sin sentido que una vez una inicia, como por ejemplo la hormonación, ya no tienen vuelta atrás y se está dejando a muchos, sobre todo a adolescentes, atrapados en una situación que van a arrastrar el resto de su vida". Ante esto, ha sostenido que hay padres que están pidiendo ayuda y "por parte de la Comunidad la van a tener".

Ayuso ha considerado que están "confundiendo" lo que "eres con lo que quisieras ver", algo que muchas veces durante la adolescencia está "todo mezclado".

<https://cadenaser.com/cmadrid/2022/10/19/ayuso-crea-las-leyes-trans-son-muy-agresivas-porque-niegan-el-sexo-a-las-personas-y-sobre-todo-las-confunden-radio-madrid/>

LA NUEVA APUESTA FISCAL DE AYUSO: 44 EUROS DE AHORRO PARA LAS RENTAS BAJAS Y 189 PARA LAS ALTAS

El Gobierno de Madrid envía a la Asamblea el proyecto para deflactar todos los tramos del IRPF en la declaración sobre el ejercicio 2022, que depende de Vox

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la deflactación de la tarifa y los mínimos exentos del IRPF en un 4,1% para todos los tramos de renta, que se aplicará al ejercicio 2022. El plan ayudará a que los contribuyentes combatan los efectos de la inflación, reducirá la recaudación en unos 200 millones y beneficiará especialmente a las rentas más altas. La reforma, que verá la luz si tiene el apoyo de Vox en la Asamblea, lleva el sello del PP más liberal: en otras regiones gobernadas por el partido de Alberto Núñez Feijóo solo se deflactarán los tres tramos por debajo de los 35.000 euros (caso de Andalucía y Galicia), o los cuatro que hay hasta los 60.000 (Murcia), por lo que los que más ganan no serán necesariamente los que más se benefician en términos absolutos, como sí ocurrirá en Madrid. Ese balance ha provocado este miércoles protestas encendidas en la oposición de izquierdas (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

“La medida es muy importante”, ha defendido el portavoz gubernamental, Enrique Ossorio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Nadie más aficionado que nosotros a bajar impuestos, en la Comunidad de Madrid llevamos 19 años bajando impuestos”, ha seguido, omitiendo que en 2019 no se rebajó ninguno por el choque entre PP, Cs y Vox. “Todos sabemos que se está produciendo una inflación que no conocíamos en España desde hace muchos años, y frente a eso lo que hace Madrid es lo que no ha querido hacer el Gobierno de la nación, deflactar todos los tramos de la tarifa”, ha añadido, recordando que la medida afectará a los madrileños que suban de tramo impositivo en el IRPF como consecuencia de un aumento de salario. Y ha rematado: “Es progresivo. Cuanto más renta tienes, el beneficio es menor”.

Sin embargo, esa afirmación solo se sostiene en términos porcentuales, no en términos absolutos. Así, la reforma supone una rebaja de la cuota del 6,26% para un sueldo bruto anual de 20.000 euros; del 2,71% para un sueldo de 32.600; y del 1,49% para un sueldo de 90.000. Al mismo tiempo, eso supone que un contribuyente menor de 65 años con dos hijos (uno de ellos menor de tres años), e ingresos brutos de 20.000 euros, se ahorre 44,34 euros, mientras que uno de las mismas características, y con ingresos brutos de 90.000 euros, se ahorrará 189,72. Una diferencia de 145 euros a favor del tributante de renta alta (que también es el que más tributa en términos absolutos) que se mantiene con cualquier otro ejemplo. Así, un soltero sin hijos menor de 65 años que ingrese 20.000 euros brutos al año tendrá un ahorro fiscal de 30,57 euros con la deflactación, por los 108,06 que beneficiarán a ciudadanos en circunstancias similares que ganen 45.000 euros, y los 175,95 que ganen 70.000 euros o más.

No es la primera vez que el Gobierno de Díaz Ayuso apuesta por esta vía. En junio de 2021, el Ejecutivo regional aprobó una rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF valorada en 330 millones y que beneficia especialmente a quien más gana, al aplicar un recorte de medio punto a todos los tramos. La razón es que, al igual que ocurre con la deflactación, las rentas altas se benefician de la rebaja en todos los tramos de la escala del impuesto. Y la unión de las dos reformas multiplica, en su caso, las ventajas.

Así, un contribuyente menor de 65 años con dos hijos (uno de ellos menor de tres años), e ingresos brutos de 20.000 euros, obtendrá un ahorro total del 10,81% (80,49 euros), mientras que uno de las mismas características, y con ingresos brutos de 90.000 euros, se ahorrará el 4,39% (577,54 euros). Una diferencia de 400 euros a favor de quien más cobra.

Quejas de la oposición

Ese balance ha despertado la indignación en la oposición de izquierdas de la Asamblea regional. Por su parte, Vox no solo apoya la medida, sino que reclama al PP que vaya más allá en la rebaja. “Estas medidas fiscales son un regalo envenenado”, se ha quejado Mónica García, líder de la oposición como portavoz de Más Madrid. “Es una maniobra de trilerismo: cuando abres el cubilete de los que más tienen, se ahorran 600 euros, y cuando abres el de los que menos tienen, se ahorran seis, y te encuentras con que van a tener que pagar de su bolsillo un seguro privado por los servicios públicos que se dejan de pagar con la deflactación”, ha seguido. “Más que una deflactación es una deflagración de los servicios públicos”.

“Otra vez el PP con la misma trampa, lo que hace es un descuento de entre 0 a 10 euros a la inmensa mayoría de las familias en Madrid, mientras que se rebajan miles de euros a unos pocos grandes patrimonios”, ha lamentado por su parte Juan Lobato, el líder del PSOE. “Desde el PSOE de Madrid lo que se propone es bajar los impuestos a las clases medias de Madrid”.

“Todo lo que sea seguir en esta deriva que pasa por la injusticia fiscal y por aumentar la desigualdad social es contrario a los intereses de los madrileños”, ha rematado Alejandra Jacinto, de Podemos. “Las rentas altas en la Comunidad de Madrid llevan ya demasiado tiempo deflactadas como para seguir haciéndolo”.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-19/la-nueva-apuesta-fiscal-de-ayuso-44-euros-de-ahorro-para-las-rentas-bajas-y-189-para-las-altas.html>

AYUSO CULPA A LOS SINDICATOS DE LA HUELGA POR EL RECORTE DE PERSONAL EN LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS: "QUIEREN QUE NOS VAYA MAL"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este miércoles a las organizaciones sindicales de ser las culpables de la huelga convocada a partir del próximo 25 de octubre para los trabajadores de los Servicios de Acción Rural (SAR) por la reorganización de las urgencias, que supone un recorte de personal respecto al que había antes de la pandemia, cuando se cerraron los antiguos SUAP.

En una entrevista en Antena 3, Ayuso ha afirmado que veía dos posiciones, la de los "sanitarios, que lo que quieren es volver a trabajar en esos puestos" y la del "sindicato político que está a sueldo de un partido político y que nunca quiere arrimar el hombro y quiere que nos vaya mal". La presidenta no ha especificado cuál es ese "sindicato político", en singular, de entre los cinco que han convocado la huelga: Amys, CCOO, UGT, Satse y CSIF.

Ayuso ha lamentado también: "La huelga, la primera que me hacen de este tipo, es justo cuando los voy a abrir". Los servicios de urgencias de Atención Primaria llevan cerrados desde marzo de 2020 y el Ejecutivo autonómico lleva meses comunicando su próxima reapertura. El último compromiso ha sido hacerlo durante el mes de octubre, para lo que se ha reunido hasta en tres ocasiones con la Mesa Sectorial, donde los sindicatos han acusado a la consejería de Sanidad de pretender imponer un plan sin consensuar.

La situación de la sanidad en Madrid ha llevado a renuncias y dimisiones en cargos de la Consejería, un departamento que vive enquistados conflictos en la región. El último caso ha sido la dimisión de la gerente asistencial de Atención Primaria, Sonia Martínez Machuca, que se marchó el pasado lunes, en plena crisis por la reestructuración de las urgencias extrahospitalarias. Desde la Consejería de Sanidad alegaron que esta médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria presentó su renuncia "por motivos médicos y personales", pero su futuro al frente de la gerencia se preveía conflictivo.

https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_9635436_1094830.html

"YO POR BELTRÁN MA-TO": LO QUE AYUSO DECÍA EN 2014 DEL GERENTE QUE SE SENTARÁ EN EL BANQUILLO POR LA CAJA B DEL PP

El sumario de 'Púnica' muestra el apoyo de la presidenta a Beltrán Gutiérrez, estrecho colaborador de Esperanza Aguirre y cuyo vínculo con los pagos opacos de actos electorales se conoció en 2009

La hoy presidenta le ofreció hablar en televisión en su favor mientras se le estaba investigando por las 'tarjetas black' de Caja Madrid

"Yo por Beltrán ma-to". Eso decía el whatsapp que Isabel Díaz Ayuso envió el 3 de octubre de 2014 al entonces gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, hoy uno de los ocho imputados en Púnica que están ya más cerca del banquillo por la caja B. La víspera de aquel día, la alcaldesa Ana Botella le había destituido como asesor municipal al trascender que un juez le estaba investigando por destinar a gastos privados 58.000 euros con lo que se bautizó como las tarjetas black de Caja Madrid. Finalmente, condenado por ese caso, la conexión de Beltrán Gutiérrez con los pagos opacos de actos políticos de Esperanza Aguirre a partir del tamayazo se conocía desde 2010.

Pero cuatro años más tarde de que saliera a la luz la relación de Beltrán con la trama Gürtel a través de Fundescam, fundación utilizada por el PP madrileño para camuflar facturas electorales, Ayuso le seguía considerando una figura admirable. Tanto que en aquella serie de mensajes fechados aquel 3 de octubre, la actual presidenta del Ejecutivo madrileño y diputada autonómica desde 2011 bajo el mando de Aguirre arrancó ofreciéndole esto: decir algo sobre él en un programa de televisión en el que iba a participar. Gutiérrez no quiso. El hombre que tras su cese como asesor municipal siguió manejando las cuentas regionales del PP por decisión de Aguirre

le respondió: "Isa, te lo agradezco mucho, pero prefiero no decir nada". Esos mensajes, como otros de un larguísimo historial, fueron extraídos por la Guardia Civil del teléfono de Beltrán Gutiérrez y constan en el sumario de Púnica en documentos a los que ahora ha tenido acceso infoLibre.

Fue a partir de la negativa del gerente a que Ayuso hablara sobre él cuando esta le expresó su fervor con una frase casi idéntica a la patentada por la televisiva Belén Esteban: "Por mi hija ma-to". Aquel whatsapp de "yo por Beltrán ma-to" salió a la una y diez de la tarde del móvil de la entonces diputada autonómica y responsable de redes sociales del PP madrileño. Tres días más tarde, la figura política del PP que podría acabar siendo la rival de Alberto Núñez Feijóo, insistió en su apoyo al gerente: "Mucho ánimo estos días! Te queremos, jefe!!!".

Este lunes, infoLibre informó a los portavoces de Díaz Ayuso de la existencia del whatsapp a Beltrán Gutiérrez que encabeza este texto. No hubo comentarios.

Las referencias a Isabel Díaz Ayuso han desaparecido del auto por el que el juez Manuel García Castellón procesa solo a ocho de los que llegaron a ser más de 80 investigados en la pieza sobre la caja B del PP madrileño. En ningún momento imputada, el informe del fiscal anticorrupción Manuel Cabaleiro la mencionaba cinco veces. En todas ellas, por su relación profesional con el seguidor de la trama y estrategia de cómo mejorar la imagen de dirigentes del PP en internet, Alejandro de Pedro. Aquel nexo profesional se dio cuando la actual presidenta trabajaba en el ámbito de la comunicación del PP madrileño y del manejo de sus redes sociales. El citado informe de Cabaleiro lleva el sello de Anticorrupción. Pero no cuenta con la firma de las dos fiscales que desde el inicio investigaron el caso Púnica. Sus razonamientos y conclusiones constituyen el armazón del auto por el que el juez García Castellón exonera a Esperanza Aguirre.

Aguirre, sostiene el juez, "no tenía conocimiento" de que Fundescam pagaba actos del partido. El magistrado considera en cambio que sí lo sabían tres de sus colaboradores más cercanos: su directora de comunicación, Isabel Gallego; el exsecretario general del PP madrileño y mano derecha de la lideresa, Francisco Granados; y el propio Beltrán Gutiérrez. En apoyo de su tesis, García Castellón toma como "indicio sólido" de la ignorancia de Aguirre una conversación telefónica que ella misma mantuvo con su sucesor, Ignacio González, el 8 de marzo de 2017. Es decir, mes y medio antes de que González fuese detenido y cuando ya estaba siendo objeto de una investigación oficialmente secreta.

En aquella llamada, Aguirre le dice a su antiguo delfín lo que sigue: "Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado". En mayo de 2009, el diario Público ya había reproducido documentos demostrativos de los pagos efectuados a la trama Gürtel por Fundescam. Aguirre, que en 2009 ya presidía aquella fundación, financiada con fondos públicos, nunca se dio por aludida.

https://www.infolibre.es/politica/ayuso-le-dijo-exgerente-sentara-banquillo-caja-b-pp-beltran-ma-to_1_1341329.html

CESES, RENUNCIAS Y DIMISIONES POR LA CRISIS DE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA

La salida de la gerente de Atención Primaria se suma a los ceses de los responsables de Asistencia Sanitaria y el Summa 112 en pleno conflicto por la reapertura de las urgencias extrahospitalarias y la saturación de los centros de salud

La presidenta de la Comunidad de Madrid presume de tener el Gobierno más estable de España. En esta breve legislatura, Isabel Díaz Ayuso no ha realizado ningún cambio en su gabinete, pero esa afirmación no es extrapolable a otros escalones de su Ejecutivo. Y si una consejería se ha visto especialmente afectada por ceses, renuncias y dimisiones ha sido la de Sanidad, un departamento que ha cobrado especial importancia tras la pandemia y que vive enquistados conflictos en la región.

La última en dejar su cargo ha sido la gerente asistencial de Atención Primaria, Sonia Martínez Machuca. Anunció su dimisión este lunes, en plena crisis por la reestructuración de las urgencias

extrahospitalarias, que llevan funcionando a medio gas desde marzo de 2020. Desde la Consejería de Sanidad alegaron que esta médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria presentó su renuncia “por motivos médicos y personales”, pero su futuro al frente de la gerencia se preveía conflictivo, con una huelga indefinida de los trabajadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) recién convocada para el próximo 25 de octubre.

“La decisión de dimitir de la gerente de Atención Primaria es consecuente con el desastre y el caos generado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Sanidad Pública madrileña, y más concretamente con su nefasto Plan de Atención Primaria, con su ofensivo y demoledor plan para las Urgencias de Atención Primaria, con su abandono a la población usuaria de la Sanidad Pública y con su desprecio a los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad, con más ahínco después de su gran esfuerzo durante la pandemia”, reaccionaba el secretario general de CCOO Sanidad de Madrid, Mariano Martín-Maestro.

La dimisión, que llega en pleno conflicto por la remodelación de las urgencias extrahospitalarias que supone un recorte de personal respecto al que había antes de la pandemia, se produce tres meses después de la reestructuración llevada a cabo por Ayuso en la consejería de Sanidad. En julio ya hubo un baile de nombres en el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. Algunos fueron reubicados y otros se quedaron descolgados del Gobierno regional.

Fue el caso del que era hasta ese momento director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud, Jesús Vázquez, que llevaba en el puesto menos de un año. Vázquez había tenido que lidiar con los volantazos de Ayuso y Escudero en la gestión de las urgencias extrahospitalarias. Primero, intentaron minusvalorar su importancia. Después, dijeron que reabrirían solo algunos de los SUAP que habían cerrado por la pandemia. Luego, que serían todos cuando en cuanto fuese posible. Por el camino, las protestas de profesionales sanitarias y vecinos que se manifestaban frente a diferentes centros de salud.

Además, a las puertas del verano, la consejería de Sanidad puso en conocimiento de los centros de salud un nuevo procedimiento por el que se mandaba a las enfermeras atender y derivar pacientes cuando no hubiera médicos, pese a no tener competencias para hacerlo.

“No son gente del partido. Los trabajadores los conocen y saben lo que significan estas políticas para la atención primaria, así que se los cargan o se van ellos”, señala una fuente sindical sobre los movimientos en la consejería de Sanidad. En los de julio, se produjeron ocho ceses y nombramientos. En esa remodelación, ganó relevancia Pedro Irigoyen, a quien Escudero puso al frente de una nueva viceconsejería de gestión económica, con competencias similares, pero con más peso a las que ya tenía. También sumó galones Fernando Prados Roa, que cesó como director general de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias, donde coordinó el Hospital Enfermera Isabel Zendal, para ser nombrado viceconsejero del Proceso Integrado de Salud.

Prados asumió en septiembre una nueva responsabilidad. La de Salud Pública que dejaba el hasta entonces viceconsejero Antonio Zapatero, a quien Ayuso fichó para dirigir el hospital de Ifema en lo peor de la pandemia y a quien luego puso al frente de la COVID-19. El cese, aseguró entonces el vicepresidente Enrique Ossorio, se producía “a petición propia”, pero la decisión fue tomada, según fuentes de Sol, entre la presidenta y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le nombró nuevo responsable nacional de Salud Pública del partido. En la Comunidad de Madrid dejó unas listas de espera de casi 900.000 personas.

“Aclarar el futuro de los trabajadores de los SUAP”

A quien sí se le comunicó su cese, que se hizo efectivo con fecha de 1 de agosto de 2022, fue al gerente del Summa 112, Pablo Busca, que llevaba en el cargo siete años. En su despedida, Busca envió una carta en la que reconocía que se iba con “orgullo” pero también con la “decepción de no haber podido tener la oportunidad de afrontar desde esta posición el futuro más inmediato de este Servicio”. Además, admitía que “quedan muchas cuestiones por resolver”, como “aclarar el futuro de los trabajadores de los SUAP”.

Este mismo martes se ha conocido también el cese del gerente del Hospital Clínico San Carlos, José Soto, que se suma al del Gregorio Marañón, Joseba Barroeta. “Yo no tengo que valorar ni poner en tela de juicio ni el trabajo ni el nombre de ningún gerente de ningún hospital en la

Comunidad de Madrid. La consejería de Sanidad está llevando a cabo la renovación de algunos directivos, sobre todo algunos que llevan décadas al frente, como un proceso habitual en todas las administraciones”, justificó la presidenta Ayuso a preguntas de los periodistas.

Una de las dimisiones más sonadas a las que se ha enfrentado el Gobierno regional ocurrió en la anterior legislatura, una suerte de primer tiempo que el ejecutivo ha utilizado para evitar rendir cuentas de lo que ocurrió entre mayo de 2019 y mayo de 2021, fue su directora de salud pública. Yolanda Fuentes dejó su cargo en mayo de 2020, ante el riesgo de “colapso” de las UCI en el empeño de Ayuso se pasar a la fase 1 del plan de desescalada. Desde entonces, Fuentes no ha ocultado su desacuerdo con lo ocurrido aquellos días. “Dimití tras horas intentando convencer de que no cometieran una barbaridad”, llegó a escribir en su cuenta de Twitter.

Cinco meses después de la de Fuentes se produjo la dimisión de Marta Sánchez-Celaya al frente de la gerencia asistencial de Atención Primaria, el mismo puesto que vuelve a quedar ahora vacante. El personal de esta puerta de entrada al sistema de salud madrileño lleva años reclamando mejoras. Sánchez-Celaya renunció en octubre de 2020 tras aprobar un plan con el que bloqueó un amago de huelga de los médicos y las médicas de familia. En él, la consejería se comprometía a llevar a cabo reformas estructurales, equiparaciones salariales, subidas de sueldo, medidas coyunturales y una estrategia para ocupar plazas de difícil cobertura, para superar el colapso que vivían los centros de salud, en un momento en el que los hospitales también estaban saturados y la administración dedicaba recursos en personal al Zenda.

“Una relación complicada”

Cuando Martínez Machuca tomó el relevo, el plan tardó poco en quedar en papel mojado. En diciembre de aquel año, el departamento madrileño de Hacienda se opuso a esa estrategia y el Gobierno de Ayuso impuso uno nuevo, sin el acuerdo de la mesa sectorial. En marzo de 2021, los sindicatos convocaron una huelga que, pese a tener un seguimiento del 80%, duró una sola mañana. La misma en la que la presidenta convocó elecciones anticipadas.

“Nuestra relación con ella [Martínez Machuca] ha sido complicada. Desde los incumplimientos de la huelga de primaria y de los acuerdos de 2020 con el plan ‘Ayuso 1’, la transformación e imposición de lo que llamamos el plan ‘Ayuso 2’, y desde Amyts hemos pedido su dimisión con anterioridad a todo este sinsentido que se está produciendo con el nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias, que en realidad parece ser una especie de paso a una atención continuada con insuficiente personal”, señala la secretaria general del sindicato, Ángela Hernández, que espera que “venga otra gerente que sepa escuchar mejor a los profesionales”.

La líder de Más Madrid, Mónica García, fue este lunes la primera en exigir a la presidenta regional explicaciones por la dimisión de su gerente de Atención Primaria. “Es un toque de atención que demuestra que el plan de Ayuso es inviable y debe rectificarse”, escribió en su cuenta de Twitter. El grupo parlamentario ha registrado una petición de comparecencia del consejero de sanidad para conocer el motivo de los diferentes cambios en la gerencia de Atención Primaria y en los equipos de dirección de hospitales públicos.

“Llevamos un año en Madrid encadenando rectificaciones, cambios de planes, ceses, dimisiones de directivos de la sanidad pública. Improvisando”, criticó el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, que pidió “parar un momento y resolver este problema de una vez”. “Lo que, por desgracia, está haciendo el Partido Popular con este magnífico sistema sanitario que históricamente hemos tenido es desmantelarlo, desproveerlo de recursos profesionales, de recursos económicos”, lamentó, para pedir un “pacto por la salud”. “Después de llevar casi 1.000 días con los servicios de urgencias de atención primaria cerrados y con una huelga en ciernes. Esto demuestra que el modelo de negocio que tiene la señora Ayuso sobre la sanidad pública es insostenible hasta para ellos mismos”, aseguró la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto.

Más allá de las dimisiones, el vicepresidente Ossorio aseguraba a finales de septiembre que los cambios llevados a cabo por el propio Gobierno dentro de la consejería de sanidad respondían a la necesidad de “ser un revulsivo” tras la pandemia y de dar “todavía más pasos” en la mejora del servicio. “Por eso se hicieron una serie de cambios para que sea una organización más moderna”, aseguró el número dos de Ayuso.

Entre tanto, la presidenta ha evitado aclarar si contará con su consejero de Sanidad en un hipotético Ejecutivo si consigue gobernar tras las elecciones del próximo mes de mayo. “Es muy pronto para hablar del futuro de la siguiente legislatura, de los nombres de mi futuro Consejo de Gobierno. Lo que estamos haciendo en la actualidad es trabajar como llevamos haciendo desde el primer día, con un gobierno estable, probablemente el gobierno más estable de España si tenemos en cuenta las crisis que ha habido en otros”, dijo Ayuso, obviando que dinamitó su propio gabinete hace menos de un año y medio.

https://www.eldiario.es/madrid/ceses-renuncias-dimisiones-crisis-sanidad-publica-madrilena_1_9631109.html

AYUSO CESA A LOS GERENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO Y DEL GREGORIO MARAÑÓN TRAS DESVELAR EL PLURAL UN AGUJERO DE MÁS DE 50 MILLONES DE EUROS

Escándalo en la sanidad pública madrileña: prórrogas millonarias sin control

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha cesado al gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, José Soto Bonel. Un cese que se produce días después de que EIPlural.com desvelase en exclusiva un nuevo agujero de 26.736.763,30 millones de euros en el mencionado centro sanitario.

Todo ello debido a las prórrogas recibidas por el Grupo Empresarial Electromédico (GEE), encargado del mantenimiento de radiología convencional, equipamiento electromédico y equipos de alta especificidad técnica del hospital público. En concreto, según lo desvelado por este periódico, en el Clínico se produjeron hasta 134 contratos desde 2010 (cuando comenzaron los aplazamientos) hasta 2021, alcanzando un montante de casi 27 millones de euros.

El Gerente del Gregorio Marañón, también cesado

Al igual que Soto Bonel, el gerente del Hospital Gregorio Marañón, Joseba Barrera, también ha sido cesado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Cabe recordar que el Gregorio Marañón ha tenido que renunciar a tres proyectos vinculados a electromedicina por un valor superior a 27 millones de euros que notificó hace apenas cuatro meses. Tras las informaciones hechas públicas por EIPlural.com, el hospital público de la Comunidad de Madrid ha compartido la resolución de desistimiento de los contratos para el mantenimiento del equipamiento después de detectar "infracciones no subsanables" en la preparación de la licitación.

Una situación que, tal y como ha adelantado este periódico, además, ha llevado a la cúpula de la sanidad madrileña a destituir a su gerente, según fuentes cercanas al centro.

El gerente de la Paz, “en la cuerda floja”

Fuentes sanitarias consultadas por este periódico admiten que la Comunidad de Madrid también estaría sopesando el cese del gerente del Hospital La Paz, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo. “Está en la cuerda floja”, admiten.

También en exclusiva, EIPlural.com desveló que La Paz lleva diez años encadenando prórrogas al Grupo GEE. Un escándalo que en este centro también tiene cifras de vértigo: más de 230 contratos por un montante que alcanza casi los 22.500.000 euros.

Sin mediar licitación

Con estas informaciones, se pone en evidencia una reiterada concatenación de continuidad de servicio, sin soporte en derecho y sin causa que justifique el que el contratista GEE siguiese facturando en los mencionados hospitales sin mediar licitación alguna durante prolongados espacios de tiempo.

Se pone de manifiesto de igual modo los ingresos ingentes cantidades de dinero obtenidas por el Grupo GEE, el oscurantismo entorno al personal que desempeña el servicio en hospitales como La Paz y la inexistencia de un control en cuanto a la determinación del valor económico de cuantiosos contratos.

https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-cesa-gerentes-hospital-clinico-gregorio-maranon-desvelar-plural-agujero-mas-50-millones-euros_299550102

DIMITE LA GERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La salida de Martínez Machuca “por motivos médicos y personales”, según el Gobierno regional, se produce apenas una semana antes de la huelga indefinida de los profesionales

La gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Sonia Martínez Machuca, ha dimitido este lunes de su cargo “por motivos médicos y personales”, según un portavoz del Gobierno autonómico. La renuncia llega justo antes de la huelga indefinida convocada por los profesionales a partir del 25 de octubre para protestar por la saturación de la Atención Primaria y la reapertura de las urgencias extrahospitalarias con la mitad de personal que antes de la pandemia. Una coincidencia que ha subrayado la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, con Más Madrid a la cabeza, y que el viceconsejero Fernando Prados Roa ha resumido así este lunes, durante una comparecencia en la Asamblea regional: “Por razones de salud, importantes razones de salud, [la gerente] ha decidido que no es el mejor momento para estar al frente del problema más grave que tiene la Consejería de Sanidad”.

Desde julio, ha habido seis salidas y ocho cambios en la Consejería de Sanidad. Pero el terremoto interno no cesa. A la renuncia de Martínez Machuca se ha unido un proceso de examen a los gerentes de todos los hospitales públicos de la región, según documentación a la que ha accedido EL PAÍS. En ese contexto, la Comunidad ha decidido prescindir del gerente del hospital Clínico San Carlos, que llevaba 21 años en el cargo, y también del gerente del Gregorio Marañón. Son tantos los cambios, tantas las renunciaciones, y tantos los ceses, que Más Madrid ha registrado una petición de comparecencia para que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, explique qué está pasando en su departamento.

“Llevamos un año encadenando rectificaciones, ceses, dimisiones de directivos de la Sanidad pública, improvisando...”, ha lamentado Juan Lobato, el portavoz del PSOE. “¡Ya está! ¡Vamos a parar y a resolver este problema!”, ha pedido.

“Dimite la gerente de Atención Primaria de Ayuso por la chapuza con las urgencias que llevan más de 900 días cerradas”, ha escrito Mónica García, la líder de Más Madrid, en Twitter, pese a que el Gobierno regional insiste en que la renuncia se debe a “motivos médicos y personales”. Y ha añadido: “Es un toque de atención que demuestra que el plan de Ayuso es inviable y debe rectificarse”.

Los sindicatos han seguido la misma línea argumental de los partidos de la oposición, criticando la labor de la gerente en medio del conflicto que enfrenta a los profesionales de la Atención Primaria con el Gobierno.

“A nosotros no nos parece mal que se vaya”, ha explicado Ángela Hernández, portavoz del sindicato médico de Amyts, sobre la renuncia de Martínez Machuca. “Ha sido muy inflexible en el plan de la atención primaria y lo ha estado defendiendo a capa y espada”, ha continuado. El meollo de esa cuestión ha sido la planificación de las urgencias extrahospitalarias, por la que los cinco sindicatos que se sientan en la mesa sectorial con la Administración (SATSE, CC OO, AMYTS, CSIT UP y UGT) han anunciado que irán a la huelga indefinida a partir del 25 de octubre.

“Tener este pastel enfrente poco antes de unas elecciones debe crear muchas tensiones dentro del Gobierno”, ha opinado Julián Ordóñez, de UGT.

Defensora del plan de atención primaria

“La dimisión es consecuente con el desastre y el caos generado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Sanidad Pública madrileña, y más concretamente con su nefasto Plan de Atención Primaria, con su ofensivo y demoledor plan para las Urgencias de Atención Primaria, con su abandono a la población usuaria de la Sanidad Pública y con su desprecio a los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad, con más ahínco después de su gran esfuerzo durante la pandemia”, ha rematado Mariano Martín- Maestro, de CC OO.

La Atención Primaria lleva saturada desde antes de la pandemia, aunque el cierre en 2020 de las urgencias de los centros de salud (y la reorganización de la plantilla de médicos) terminaron de convulsionar un servicio en el que cada vez hay más listas de espera, con más médicos de familia que sufren el conocido burnout (desgaste profesional): desde marzo de 2020 hasta ahora han pasado del 40% al 60%.

Mucho han peleado ciudadanos, sindicatos y profesionales médicos para que las urgencias extrahospitalarias se abrieran de nuevo tras el cierre provisional cuando llegó el coronavirus. La Administración regional primero argumentó que necesitaba reorganizar ese servicio. El pasado junio presentó un plan que levantó ampollas: de las 37 urgencias de Atención Primaria, solo abriría 17, siete de ellas sin médico y solo con enfermeras.

Aquella bomba movilizó a parte de la población. Y Ayuso rectificó y prometió finalmente la apertura de todas esas urgencias de los centros de salud. Parecía que el agua había vuelto a su cauce y la Comunidad de Madrid, sindicatos y profesionales sanitarios caminaban de la mano. Pero en septiembre llegaron las negociaciones en la mesa sectorial y la situación volvió a su punto de partida. Era cierto que la presidenta había dado marcha atrás al anunciar que finalmente los 20 SUAP que iban a cerrar, finalmente se abrirían; que habría 78 puntos de atención continuada (PAC) —el mismo número de centros que antes de la pandemia, aunque bajo otras nomenclaturas—; y que el nuevo plan de las urgencias levantaría sus persianas al completo a lo largo de octubre.

Sin embargo, la negociación entre el Gobierno regional y los sindicatos sobre la nueva reorganización se estancó de nuevo cuando comprobaron que el plan era abrir los mismos puntos de atención, pero con la mitad de sanitarios, ya que los PAC estarían formados por los 41 SAR (Servicio de Atención Rural) y los 37 SUAP, cuyos profesionales dependían directamente de la gestión del Summa 112, y no de Atención Primaria. Una dependencia que, salvo para 16 médicos que estuvieron en el Hospital Enfermera Isabel Zendal (HEIZ), seguirá a partir de ahora bajo el paraguas del Summa 112, algo que descuadra los números de los nuevos PAC.

Por lo que la cuerda terminó por romperse al conocerse que habría los mismos puntos de atención al ciudadano, pero con casi la mitad de médicos. Y los cinco sindicatos que negocian directamente con la administración se levantaron de la mesa de negociación y anunciaron que a partir del 25 de octubre habría huelga indefinida entre sus profesionales.

“Martínez Machuca siempre ha defendido que los SAR estaban sobredimensionados”, ha criticado Hernández, del sindicato Amyts. “Pero no es verdad”, ha recalcado. “Es gente que trabaja las noches, los festivos y los fines de semana para atender cualquier urgencia que aparezca en cualquier momento”, sigue. Y ha preguntado: “¿A los bomberos se les evalúa por el número de actuaciones que realizan o por estar ahí preparados en cualquier momento para realizar su trabajo?”.

El viceconsejero Prados Roa, que fue coordinador del hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, se ha convertido en el nuevo hombre fuerte de Ayuso en Sanidad, toda vez que el exviceconsejero Antonio Zapatero ha dejado el Gobierno para asesorar a Alberto Núñez Feijóo en el PP, y que el consejero Enrique Ruiz Escudero evalúa su futuro (está en las quinielas como candidato en Pozuelo para las elecciones de mayo de 2023). Él examinará a los gerentes de los hospitales.

“Se va a iniciar, desde la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, un proceso de evaluación del desempeño dirigido a los gerentes de los hospitales adscritos al Servicio Madrileño de Salud”, se lee en el documento que anuncia el proceso a los gerentes.

“Dicho proceso de evaluación consistirá en la presentación y defensa de una memoria de gestión de los últimos cinco años (...) y la realización de una entrevista individual (...)”.

Un aviso de que los cambios en la Consejería de Sanidad, y todas sus áreas dependientes, no han hecho más que empezar.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-17/la-gerente-de-atencion-primaria-de-ayuso-dimite-justo-antes-de-la-huelga-de-los-profesionales-sanitarios.html>

EL PP DE AYUSO CULPA A LOS PACIENTES DE LAS LARGAS LISTAS DE ESPERA: "DICEN, ESE DÍA NO"

Un diputado 'popular' ha afirmado que estos retrasan las citas ya que "no están deseando operarse al día siguiente"

La Comunidad de Madrid se desentiende de sus competencias y responsabiliza a los propios madrileños de las largas listas de espera que existen actualmente en la región. Esto es lo que se extrae de las declaraciones manifestadas por un diputado del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha apuntado directamente al retraso de las citas por parte de los pacientes por cuestiones personales. "No están deseando operarse al día siguiente", ha asegurado.

Este jueves, el Partido Popular de Madrid ha hecho un alegato en defensa de la sanidad pública de la región ante la lluvia de críticas por parte de la oposición, quienes acusan a la Administración liderada por Ayuso de desentenderse del caos provocado por la falta de médicos en el sistema de salud regional. Tal es la desorganización que las listas de espera marcan un nuevo récord prácticamente cada mes: según los datos del pasado mes de agosto difundidos por la Consejería, rozan los 900.000 pacientes, lo que supone que un 13% de los madrileños espera para acudir a su especialista, realizarse una prueba diagnóstica o, incluso, para operarse.

El PP culpa a los pacientes de las listas de espera

Así, tras el pleno semanal celebrado en la Asamblea de Madrid, un diputado aseguró que la causa del aumento de estas esperas se debe a los propios pacientes, que deciden retrasar sus citas por motivos personales. Afirma que, ante la llamada del médico para concertar el encuentro sanitario, los ciudadanos aseguran que "ese día no porque necesita avisar con un mes de antelación en su trabajo, quiere que esté su hija presente y tiene vacaciones o ahora mismo le pillan en nosedonde y tiene que volver".

De esta forma se ha manifestado el portavoz popular, Eduardo Raboso, en la Comisión de Sanidad de la Cámara regional, donde ha achacado a los afectados estos retrasos. "No crean que están siempre deseando operarse al día siguiente", ha asegurado con vehemencia, afeando así que los madrileños intenten organizarse para no tener que faltar en su trabajo o puedan conciliar sus citas médicas con sus familiares.

Además, Raboso ha ido más allá en su defensa de la sanidad madrileña y ha asegurado que las listas de espera de la región -en las que miles de ciudadanos tienen que aguardar de dos meses hasta dos años para ver a su especialista- son merecedoras de presumir de ellas. "Agradezco a la oposición que saque una iniciativa en la que el PP y el Gobierno se puede lucir, porque la situación en las listas de espera en Madrid es para alardear de ella", ha afirmado textualmente.

Un caos "dentro de los límites razonables"

Unas manifestaciones que han ido acompañadas de una crítica a la propuesta presentada por Unidas Podemos para que el consejero de sanidad declare de forma pública para explicar la situación en el sistema sanitario. "Hay que tener mucho cuajo para venir aquí con demoras en sitios donde gobiernan ustedes, que son casi africanas, a intentar sacarle los colores a la Comunidad de Madrid", ha dicho Raboso.

Lejos de reconocer la responsabilidad de la Administración dirigida por Ayuso, el portavoz ha insistido en que la situación sanitaria se encuentra "dentro de los límites razonables" y ha llegado a afirmar que "no solo respecto a la media nacional", sino "en comparación con la situación internacional".

Por su parte, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, no solo no ha dado marcha atrás a estas declaraciones sino que ha amparado la postura del diputado en su intervención. "Suscribo su discurso de principio a fin", ha afirmado desde el estrado de la Asamblea. De hecho, también ha afirmado que las cifras de la Comunidad de Madrid son las "más bajas de toda España" y que la región "sigue siendo donde menos días se tarda para ser intervenido".

Además, ha aprovechado este asunto para atacar tanto a la oposición en la Cámara regional como a toda la izquierda. "Tiene una media de 50 días menos que cualquiera de las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda", ha cargado para continuar asegurando que le "gustaría saber cuál es el modelo que ofrece la izquierda para tratar de mejorarlo". Las declaraciones del responsable de sanidad no se ajustan a la realidad ya que en Madrid la espera media es de dos meses.

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/pp-ayuso-culpa-pacientes-largas-listas-espera-dicen-ese-dia-no_299433102

AYUSO ASFIXIA LOS CENTROS DE MENORES PARA CONTENTAR A VOX Y A LAS EMPRESAS PRIVADAS

Una supuesta "reorganización" de los centros de protección de la infancia y adolescencia de la Comunidad de Madrid desmantela seis residencias de gestión pública directa. El origen de la medida está en la exigencia de Vox de llevar fuera de la ciudad un centro de menores no acompañados.

"No tiene ni pies ni cabeza y va en dirección contraria a los mandatos internacionales", "solo se justifica por el impulso privatizador de Ayuso" y "se trata de una medida de la Comunidad para contentar a Vox". Así definen diversos expertos en infancia, sindicatos y partidos políticos de Madrid el desmantelamiento que el equipo de Isabel Díaz Ayuso hace con los centros de menores tutelados de gestión pública directa en la Comunidad de Madrid.

Un servicio de protección a la infancia más vulnerable que el Ejecutivo madrileño afirma estar "remodelando", pero que, lejos de mejorar las condiciones de niños, niñas y adolescentes, supone un desmantelamiento de los mismos en favor de su privatización a empresas privadas y una violación de los derechos más básicos de estos menores.

En total, la Comunidad de Madrid pretende desmantelar o "reorganizar" seis centros en una progresión que funciona como la caída de las fichas de un dominó. El origen de todo el desbarajuste, afirman a Público diversas fuentes, está en la necesidad de sacar a los menores no acompañados del centro que los "acoge" en la actualidad en la Casa de Campo, en pleno centro de Madrid. Una medida pedida largamente por el socio ultraderechista del Gobierno de Ayuso. El plan del Ejecutivo madrileño es trasladarlos a unas instalaciones que están en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas, rodeado de naves industriales donde no existe nada alrededor y que se asemeja más a un Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE), que un lugar de protección de menores vulnerables.

"El origen de todo este dominó es que había que cerrar el de la Casa de Campo por un compromiso con Vox. Se los llevan a una finca en medio de la nada, con las rejas bien altas. Como si hubiera que encerrarlos y sin ninguna posibilidad de integrarse. Estos menores no tienen a nadie, no se les da formación y a los 18 años se los echa a la calle. Da igual si tienen alguna patología o necesidad especial o si no tienen ni para comer, no tienen apoyo. Las condiciones en las que viven son penosas, en muchas ocasiones durmiendo en el suelo y con una comida mala y escasa, lo que, además, genera conflictividad", afirma Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid.

En el camino, la Comunidad de Madrid arrasa con otros seis centros en un galimatías complejo, no recogido en ningún plan, ni ligado a financiación. Esta medida viene a sumarse a una situación ya considerada como dramática en estos centros de menores, donde se ha denunciado la mala y escasa alimentación de los menores y la falta de personal para atenderlos correctamente.

Una campaña iniciada por trabajadores de los propios centros de acogida exige al Gobierno de Ayuso un cambio urgente en la rigidez del sistema de distribución de raciones en los menús de estos menores porque está "ocasionando un desajuste en las necesidades alimenticias de niños niñas y adolescentes que se alojan en las residencias infantiles". Dicho de otro modo, porque pasan hambre y la calidad nutricional de la comida queda muy lejos de lo necesario.

En junio pasado, el Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), José Manuel Miranda, anunció que cerraría y "reorganizaría" diversos centros de acogida. Entre ellos, La Casa de los Niños, un centro de referencia para la atención de niños entre 0 y 6 años con patologías graves. Se trata de un espacio instalado en un ambiente campestre que funciona desde hace 40 años y que está considerado como un lugar de referencia a copiar.

Con cabida hasta para 40 menores con graves patologías, está instalado en Colmenar Viejo, a solo siete minutos del Hospital de La Paz, en un enclave bucólico y a pie de calle, lo que permite la entrada y salida eficiente de ambulancias y de carros de hasta cuatro niños para poder pasear y vivir en el medio natural. Tal y como afirman trabajadoras de ese centro, se trata de un lugar ideal para niños pequeños que no están escolarizados y cuyos cuidadores pueden realizar actividades o salir al exterior con varios a la vez. "Si precisan atención médica, el centro y sus profesionales están formados y puede entrar una ambulancia desde el hospital cercano", lo que ocurre con frecuencia. Muchos de estos niños están sujetos a máquinas de respiración o monitoreo o necesitan moverse en sillas de ruedas y precisan atención permanente.

Es considerado uno de los proyectos más exitosos y a copiar. "Son niños que por diversos motivos no pueden convivir con su familia y que requieren una atención constante y especializada, por lo que difícilmente pueden optar al acogimiento familiar", explica Covadonga Díaz, una trabajadora que lleva más de 22 años en dicho centro con contrato temporal. Recuerda que desde el año 1997 la Comunidad de Madrid no convoca una oferta de empleo público para cubrir plazas en residencias de menores, y que en esa ocasión solo se abrieron siete "cuando se necesitan cientos". Por ello, "un 85% de los que trabajamos con menores somos temporales" y que en un 80% se trata de mujeres que tienen ahora más de 50 años.

El desmantelamiento de este centro ya ha comenzado. Las obras de mejora que estaban programadas e iniciadas se han detenido y algunos de los menores han sido trasladados a otros centros. El gerente del AMAS afirmó que serían trasladados a dos centros públicos de la Comunidad y que se repartirían entre el centro La Rosa, en el centro de Madrid, y El Valle.

El edificio donde se encuentra la Casa de los Niños será reconvertido para albergar a menores de 3 a 12 años. Otro de los cambios tiene que ver con la Residencia Infantil Las Acacias, en Carabanchel, a donde serán reubicados temporalmente los menores del Centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia (ICE) hasta que esté listo el Colegio San Fernando, también en la carretera de Colmenar Viejo, que se prevé para 2024. Al ICE, por su parte, irán las personas con discapacidad que acuden actualmente al Centro Ocupacional de Barajas.

Un galimatías de recursos que deja un mapa en donde bebés prematuros y menores de seis años con necesidades especiales y problemas de movilidad dejarán la zona bucólica de Colmenar Viejo para ser encerrados en un centro de barrio, donde se precisa ascensor para subir y bajar y donde los carros de tres o cuatro niños no pueden circular por las aceras. Por contra, los mayores y adolescentes, que tienen autonomía y necesidades de integración, son desplazados a zonas campestres o a polígonos industriales donde no tienen ninguna capacidad de integrarse con el entorno.

Según el plan de la Comunidad, tres de las residencias salen del casco urbano de Madrid para establecerse entre la carretera N-2 y el aeropuerto en un caso (Casa de Campo) y en el kilómetro 13 de la carretera N-607 en los otros dos (ICE y Acacias). Dos de ellas ven aumentado el número de niños que venían atendiendo y modifican sustancialmente su trabajo (El Valle y El Rosa).

Juan Calle, responsable de la sección sindical de menores de UGT, resalta la incongruencia de que la ciudad escolar de San Fernando, a donde se llevarán los menores que ahora están en el ICE, está en la nacional 607, cuando ahora están en Hortaleza. "Esto no solo dificultará la

integración de los menores, sino también la posibilidad de los padres y madres de visitarlos, puesto que tendrán que viajar durante dos horas en cada sentido para perder ver a sus hijos".

Además, todo este plan de desplazamiento supone desarraigar a los menores y adolescentes de su barrio, del colegio, de los servicios médicos... En muchos de los emplazamientos donde serán recolocados, además, no hay colegios ni tiendas ni posibilidad de interactuar.

Comenzar por el tejado

"La Comunidad de Madrid dice que los niños pequeños deben estar en acogimiento familiar. Estamos de acuerdo. Pero hay que buscar esos acogimientos. Lo están haciendo al revés. Porque por mucho que nos diga la Comunidad que hay familias, sabemos que no las hay ni las han buscado. El proceso es complejo y precisa de personal y, sobre todo, de fondos destinados a tal fin. Sin embargo, han decidido cerrar los centros y cambiar a los niños antes de tener a las familias. El cambio será concentrarlos en centros privados concertados. Cuando un recurso público desaparece o se cierra, no vuelve. Eso es lo que hemos visto en las últimas décadas. Es pulverizado", afirma Público Juan Calle.

Tanto CCOO como UGT denuncian que en las últimas tres décadas el número de plazas públicas de gestión directa ha disminuido y que se han incrementado las plazas en centros concertados, cuya gestión se licita a empresas privadas, algunas de las cuales no tienen experiencia en el sector y que, en cualquier caso, buscan el beneficio en lugar del mejor cuidado para los menores.

"La Comunidad de Madrid comenzó el proceso de cierre con una falacia. Afirmaban tener familias de acogida para los niños, tal como marca la ley. Pero la realidad es que no es cierto. El último plan que existe y que venció en 2021, ya decía que las familias de acogida iban a la baja. Tampoco hay suficientes técnicos para realizar ese proceso y revisar cientos de expedientes. Por lo que hemos visto como aumenta el acogimiento residencial que ahora quieren cerrar", añade Covadonga Díaz.

De hecho, Isabel Díaz Ayuso anunció un nuevo plan de acogimiento familiar para niños tutelados a mediados de septiembre durante una sesión plenaria del estado de la región. Es decir, más de tres meses después de haber anunciado el cierre y traslado de distintos centros y cuando éstos ya se están ejecutando.

En la actualidad, en la Comunidad de Madrid existen 25 centros de acogida de menores de gestión pública directa. Los sindicatos UGT y CCOO afirman no saber con exactitud cuántos de estos centros son concertados, es decir, cuya gestión se ha cedido a una empresa, pero afirman que el 70% de las plazas que existen en la actualidad están bajo esta última modalidad. También critican la opacidad de los fondos destinados por el Gobierno de Madrid a esta política pública.

"Hace unos años las políticas de infancia estaban en el Instituto Madrileño del Menor y la Familia, pero esto cambió y los presupuestos se fueron repartiendo en distintos organismos, por lo que es difícil saber cuánto se está dedicando. Sabemos que han ido a la baja, excepto por una inversión puntual en 2018 debido a la llegada de menores extranjeros no acompañados. Pero la tendencia es a la reducción de partidas", explica José Manuel Íñiguez, delegado sindical de CCOO en residencias infantiles.

Juan Calle afirma que se trata de un gran negocio. Las licitaciones que se hacen anualmente, como las de urgencia, se hacen al menor postor. Es decir, que prima el precio más bajo, por lo que la calidad del servicio queda en un segundo plano. "Esto afecta a la atención a los menores, porque se contrata a personal no formado o con menos experiencia y en muchos casos más escaso que lo que se precisa. La Comunidad afirma que sale más barato que tener a estos menores en centros públicos, pero no es cierto. Lo que pasa es que se da dinero a empresas privadas y no se mira la calidad".

"Lo que sabemos es que hay un plan para cerrar todos los centros de gestión pública de la Comunidad. El Rosa lo cerrarán en 2024. En 2025 está previsto que no haya centros de acogida entre 0 y 6 años", afirma Díaz. Sin embargo, añade, esto no se puede hacer si el acogimiento de

estos menores en familias no va bien. Y no va bien. La Comunidad de Madrid no tiene un plan, afirma.

Una ley que abre la puerta a la privatización

Paralelamente a todos estos movimientos en los centros de acogida de menores gestionados de forma directa por la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Díaz Ayuso se encuentra inmerso en la aprobación de una nueva ley de Servicios Sociales, que sustituirá a la anterior de 2003. Este nuevo texto, que pone las bases sobre la atención a menores, personas mayores o personas con discapacidad, abre la puerta a una privatización total de este tipo de centros. En el primer borrador que presentó el Gobierno Regional se incluía una frase que afirmaba que estos centros residenciales "serán públicos y de gestión directa". En el segundo borrador, el que se debate esta próxima semana en comisión, esa frase ha desaparecido y sólo afirma que serán públicos, pero no acota el tipo de gestión.

Otro dato importante es que el borrador de la nueva ley fue presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en primer lugar a los empresarios. En una reunión que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, se reunió con la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) para presentarle el nuevo texto. Sólo dos días después de producirse esta reunión, la Coordinadora del Tercer Sector hizo público un comunicado en el que pidió a los partidos representados en la Asamblea de Madrid, que rechazaran la ley, porque "busca privatizar y hacer negocio a costa de los más vulnerables" y porque "ha sido acordada por la CEIM" (la patronal).

Según la coordinadora, esta norma abre la puerta a "una nueva modalidad paralela al contrato público, el concierto", que permitiría que "cualquier nivel de la administración externalice, sin límite alguno, sus servicios de asistencia social a cualquier empresa o particular, sin incorporar criterios de solvencia o capacidad". De hecho, estas organizaciones denuncian que el Ejecutivo autonómico ni siquiera las consultó sobre esta ley ni sobre las medidas que ahora emprende para el desmantelamiento de los centros de acogida de menores.

Esta semana, la ley se debatió en el pleno de la Asamblea de Madrid. El PSOE había presentado una enmienda a la totalidad y un texto alternativo. Partidos como Más Madrid hicieron más de 150 enmiendas al proyecto de ley. Ninguna prosperó.

<https://www.publico.es/sociedad/ayuso-asfixia-centros-menores-contentar-vox-empresas-privadas.html>

AYUSO VISITA POR PRIMERA VEZ A LOS VECINOS SIN CASA POR CULPA DEL METRO EN SAN FERNANDO DE HENARES: "¡MENOS PROPAGANDA, MÁS SOLUCIONES!"

Centenares de personas reciben a la presidenta de Madrid entre gritos y protestas porque sus viviendas se caen a causa de la línea 7B del suburbano

Entre lágrimas de los vecinos, gritos desesperados —"¡menos propaganda y más soluciones!"— y el ruido de inmensas máquinas de construcción, Isabel Díaz Ayuso visita este jueves, por primera vez desde que llegó al poder en 2019, las calles que ha habido que desalojar en San Fernando de Henares porque la línea 7B del Metro de Madrid ha afectado a los cientos de edificios. Son 27 viviendas derruidas, 85 desalojadas, más de 120 personas afectadas, decenas de bloques llenos de grietas y el miedo de miles de residentes a que pronto les llegue el turno de hacer las maletas y de dejar atrás su vida, sus recuerdos, sus sueños y su futuro. Muchos de ellos acuden este jueves a la carrera para echarle en cara lo que ocurre a Ayuso, que se presenta en el lugar avisando con 20 minutos de antelación y sin programar el desplazamiento en su agenda oficial. A la presidenta la rodean una decena de policías municipales, que sufren para mantener el orden mientras Díaz Ayuso va atendiendo a los vecinos. "¡Menos parches y más soluciones!", le gritan. "¡Asquerosos!", se oye.

La desesperación recorre las aceras de este municipio del sureste de la Comunidad de Madrid, de unos 40.000 habitantes, con la misma intensidad que reflejan las decenas de pancartas que cuelgan de los balcones de las casas: Metro hunde vidas, ¡soluciones ya! ¡Justicia! Es un golpe

de realidad para la presidenta regional, que se traslada por primera vez a la zona afectada por un problema conocido por la Administración desde al menos 2008, agravado de forma acelerada desde 2016, y que ha obligado a sucesivos desalojos desde 2021: la construcción de la línea 7B de Metro, en 2007, facilitó la entrada del agua en el subsuelo, disolviendo el terreno al entrar en contacto con sal, y provocando que el municipio se hunda poco a poco.

—La visita se ha demorado mucho, presidenta, el apoyo moral...—, arranca Juan Fuentes, representante de los afectados, quien, paciente y templado de ánimos, ha esperado a la líder conservadora en la oficina abierta por la Comunidad para atender a los vecinos.

—Pero las actuaciones han estado—, responde Ayuso sobre los 40 millones que lleva gastados la Administración desde hace un decenio en intentar solucionar el problema. “Somos responsables de esto”, reconoce, como ya hizo en la Asamblea en diciembre de 2021. “Vamos a agilizar todo lo que se pueda. En muchas ocasiones, la Administración es horrorosa”, añade.

—Es que en este caso tienes que vivir fuera de tu casa—, replica el vecino. “En el Carmel [Barcelona, donde el metro abrió un socavón en 2005], se hizo mucho más. Se adelantaron los alquileres, se pagaba a los comerciantes por el negocio perdido...”.

—Probablemente, la situación no es la misma.

— ¿En Barcelona [los afectados] son mejores que nosotros?

—Lo lamento mucho, dice la presidenta—, que deja intervenir a su consejero de Transportes, David Pérez, mientras escucha a más vecinos.

Todo empezó con unas elecciones. A las puertas de las de 2007, Esperanza Aguirre, entonces presidenta regional en busca de la reelección, decidió construir un hospital con su correspondiente estación de metro. Para eso, había que cambiar el proyecto original, ampliar el recorrido y añadir estaciones. Un error, según se descubrió un decenio después, porque las obras del túnel del metro facilitaron la entrada del agua en el subsuelo. El líquido contactó con terrenos solubles, alteró su solidez y afectó a los cimientos de los edificios cercanos. Desde entonces, ha habido que cerrar la línea de Metro en nueve ocasiones. Así está ahora mismo: sin que circule ni un tren. Peor: según un informe encargado por la Comunidad de Madrid al que accedió EL PAÍS, un tramo de las vías se hundió una media de entre 15 y 20 milímetros entre junio y agosto, sin que existiera ningún signo de estabilización.

Más de una década después, Ayuso visita este jueves la zona cero del problema. Rodeada de ingenieros y obreros con casco y peto brillante, la presidenta de Madrid ve las inmensas grietas que recorren de norte a sur y de este a oeste las fachadas de los edificios, inclinándolos y retorciéndolos, llenándolos de los ruidos y crujidos que preceden a los derrumbes, e impidiendo cerrar puertas y ventanas. Ayuso ve también las maderas que apuntalan desde el exterior los comercios de los bajos. Y, como remate, observa a decenas de obreros afanándose en operar la inmensa maquinaria con la que se está bombeando cemento para intentar asentar 10.000 metros cuadrados de terreno.

“¡Metro, culpable! ¡Ayuso responsable!”, retuenan los gritos entre el intenso ruido de fondo, mientras cientos de vecinos esperan a que acabe la visita oficial, que Ayuso protagoniza después de que la policía impida el paso a los residentes, agolpados en un extremo de la calle. Luego, cuando la presidenta avanza por el lugar y se mezcla con los vecinos, se desatan las protestas, se agitan las pancartas y se escuchan cánticos futboleros de afines al PP (“Ayuso, Ayuso, Ayuso es cojonuda, como Ayuso no hay ninguna”).

Esos gritos chirrían porque el ambiente no tiene nada de festivo. Todo lo contrario. Las protestas llenan el aire de palabras dolidas. “¡Menos propaganda y más soluciones!”, reclaman a pulmón abierto decenas de los presentes. “Si esto no se arregla... ¡caña, caña caña!,” braman. “¡Menos parches y más soluciones!”, chillan los vecinos, cansados de vivir entre testigos que miden cómo sus casas se hundían desde hace más de una década para ver cómo todo se ha agravado en los últimos meses.

Porque en San Fernando de Henares hay cientos de personas que llevan viviendo desde septiembre de 2021 en un apartahotel, penando mientras se entierran sus sueños y tienen que seguir pagando por la hipoteca de unas casas en las que ya no pueden vivir. En el grupo de afectados hay de todo: familias, jóvenes, mayores, niños, adolescentes... Son cientos de vidas rotas por el metro.

“Lo lamento profundamente y vamos a estar a vuestro lado todo el tiempo que haga falta”, les promete Ayuso. “Es mi mayor compromiso”, añade. “No vale decir que nosotros no lo hemos realizado. He de asumir la responsabilidad como Administración”, admite. Y remata: “Lamento lo sucedido y lo que están viviendo. No me quiero ni imaginar lo que estáis viviendo. Nos sentimos concernidos y afectados, vamos a estar aquí las veces que haga falta. A ver si ponemos solución”.

EL PAÍS publicó el lunes que los afectados han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que visite la zona. Sin confirmar el desplazamiento, la Moncloa expresó la preocupación de Sánchez. En la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional, hubo quien interpretó que eso quería decir que la foto de Sánchez en San Fernando, un municipio gobernado por el PSOE, era segura. Pocas horas después, Ayuso ha acudido al municipio por primera vez en casi cuatro años, una visita en la que le acompañan dos consejeros —además de David Pérez, la titular de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín— y el vicepresidente, Enrique Ossorio, cuya presencia sí estaba anunciada. Todos hablan. Todos cuentan mil proyectos. Todos prometen inversiones, planes, soluciones. Pero, mientras tanto, las casas de San Fernando se siguen hundiendo. Y cientos de vecinos se han quedado sin su vivienda.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-13/ayuso-visita-por-primera-vez-a-los-vecinos-sin-casa-por-culpa-del-metro-en-san-fernando-de-henares-menos-propaganda-mas-soluciones.html>

AYUSO SE VUELCA EN UNA GUERRA CULTURAL CON VOX PARA MONOPOLIZAR EL 12 DE OCTUBRE

El miércoles 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España, un día pensado para conmemorar "la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía", según reza la ley que lo estableció como día festivo en 1987. La elección del día 12 de octubre no fue casual, sino que buscaba conmemorar la fecha en la que Cristóbal Colón pisó por primera vez tierras americanas. Para conmemorar esta fecha, el Ejecutivo madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso ha organizado una amplia agenda de actividades bajo el lema de 'Todos los acentos caben en Madrid'.

Una celebración que comenzó el pasado 4 de octubre y que alberga más de 100 actividades distribuidas en 46 escenarios de la región madrileña. Además, la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo, ha colocado las banderas de los 22 países hispanohablantes. Este despliegue de recursos contrasta con el que se dedicó, el pasado mes de julio, a la celebración del Orgullo. Entonces, Ayuso se opuso a colocar la bandera LGTBI en la sede de Sol porque, a su juicio, la de España ya representaba la Igualdad.

Es más, ni la presidenta madrileña ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participaron en ninguno de los actos del Orgullo LGTBI, llegando a protestar por la duración de la fiesta: “Antes se celebraba ese día y ya estamos un mes entero aguantándolo”, afirmó Ayuso. En cambio, en esta ocasión, la líder del gobierno regional no ha tenido reparo alguno en alargar más de una semana los actos de celebración del 12 octubre. El propio metro de Madrid (que depende de la Comunidad) reparte, de manera gratuita, tarjeteros para conmemorar el evento.

Lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso ha convertido esta celebración en uno de sus frentes para dar la batalla cultural a Vox y también a su propio partido, ya que Alberto Núñez Feijóo ha evitado, hasta la fecha, esta cuestión. En su discurso abundan en posicionamientos políticos de exaltación de la conquista, que combinan con la denigración tanto de las culturas precolombinas como de la izquierda latinoamericana y el indigenismo, fenómeno que para la presidenta madrileña es "el nuevo comunismo".

La líder madrileña cree que se le está haciendo mucho "daño" a España, a la Hispanidad y "a lo español en el mundo". Según sus palabras, hay que "fomentar la Hispanidad porque es la mayor obra como país" y luchar contra "las corrientes totalitarias han infectado el mundo desde 1968" hasta llegar a "derribar estatuas y hacer un revisionismo mentiroso de la historia, a exigir disculpas por ser lo que somos, lo que nos une y nos hace únicos".

Su defensa de lo español llega a tal punto que creó un departamento (bajo el nombre de Oficina del Español) para la promoción de esta lengua. Una dirección vacante después de la marcha de Toni Cantó. El expolítico de Ciudadanos abandonó el cargo creado expofeso para él tan solo un año después de llegar al Ejecutivo madrileño. A Cantó lo ha sustituido un funcionario de la Consejería de Cultura y Deporte para realizar labores administrativas, según publica Newtral.

Vox: "Gracias a América somos nación"

En cuanto a Vox, su discurso está aún más cargado de esencialismo nacionalista. El partido de Santiago Abascal ha hecho su traducción de la noción de Hispanidad, la Iberosfera, que aúna a Latinoamérica y Estados Unidos con España en el centro, recuperando así al fin una misión a la altura de su grandeza histórica. O eso parecen pretender.

El partido ultra ha celebrado este sábado un evento llamado Viva 22, que albergó una pseudorepresentación teatral sobre la historia de España. "Asumimos el pasado sin hemiplejas, sin leyendas negras y tampoco rosas. Asumimos nuestra historia sin mordaza, sin miedo y con orgullo. No nos van a arrebatar las victorias ni las derrotas de las que tanto hemos aprendido" arguyó el líder de Vox, que también presumió de querer "levantar" las estatuas que otros "quieren tirar". En realidad, Vox tira de fondo de armario en cuanto a las imágenes utilizadas.

Esta misma semana algunos de los dirigentes de la formación ultra como el jefe de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, la portavoz de la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y el eurodiputado Herman Tertsch han participado en la Segunda Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid. "Cuando el 12 de octubre de 1492 Rodrigo de Triana grita Tierra, ese incipiente estado moderno que se había forjado en 800 años de reconquista contra el Islam, se hace de veras nación. España se configura como esa unidad con una finalidad en la historia y en el universo. Y eso es algo que le debemos agradecer a América. Gracias a América somos nación", aseguró Buxadé.

Se trata del enésimo intento de Vox por ampliar su influencia a América Latina y Estados Unidos y reivindicar sus valores –libertad frente al totalitarismo, dicen– entre todo hispanohablante que les quiera escuchar. En ese sentido, reivindican la evangelización de los salvajes indígenas por parte del ilustrado español medieval –mitos, por otro lado, ampliamente discutidos por los historiadores– y se defiende el pasado imperial y colonizador. Un discurso nacionalista con tintes católicos que también enarbola Ayuso.

Esa defensa del imperialismo español llevó a Ayuso y a la formación de Abascal a criticar la carta del papa Francisco a la Iglesia mexicana, en la que –igual que hicieron Juan Pablo II y Benedicto XVI– pedía perdón "por los errores del pasado" Ayuso no entendía que un papa hispanohablante dijera tales cosas cuando el legado de España es "el catolicismo y por lo tanto la civilización y la libertad" al continente. "No sé qué hace un Papa, jefe de Estado del Vaticano, argentino, pidiendo perdón en nombre de los demás", señaló, por su parte, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso.

Los orígenes del 12 de octubre

El origen de la fiesta del 12 de octubre y explica uno de los motivos por los que genera rechazo entre algunos colectivos, ya que a principios del siglo XX esta fecha se instituyó como una manera de celebrarla raza latina "en su sentido biológico", siguiendo las ideas nacionalistas que empezaban a tomar fuerza por entonces.

La significación del festejo adquirió un carácter diferente en 1958, cuando el dictador Francisco Franco decretó establecerla oficialmente como Fiesta Nacional bajo el nombre de Día de la Hispanidad. El objetivo era evocar la lucha histórica del "catolicismo frente al protestantismo" en

un momento en el que Franco definía a España como la reserva espiritual de Occidente. Un planteamiento que no difiere en exceso del que predicaban Ayuso y Abascal.

No fue hasta 1987 cuando el Congreso legisló para adaptar la Fiesta Nacional al formato actual. La Cámara, no obstante, decidió eliminar cualquier referencia a la Hispanidad del nombre de la celebración, denominándola únicamente "Fiesta Nacional de España", si bien se mantuvo la fecha para lograr el consenso de todos los grupos.

En los últimos años, durante el 12 de octubre han comenzado a promocionarse actividades culturales por parte del Estado, que por ejemplo declara esa fecha como día de puertas abiertas en todos los museos estatales de España. No obstante, una parte de la izquierda rechaza esta celebración ya que la asocia al militarismo y la monarquía. Este miércoles, como cada año, se realizará el habitual desfile que culminará con la recepción de la Casa Real.

<https://www.infolibre.es/politica/ayuso-vuelca-guerra-cultural-vox-monopolizar-12-octubre-1-1337348.html>

AYUSO JUSTIFICA COBRAR MÁS QUE PEDRO SÁNCHEZ: "YO NO TENGO FALCON NI NADIE ME PAGA EL DOMICILIO"

La presidenta madrileña ha criticado la subida de un 4% del sueldo del Ejecutivo central, mientras cobra casi un 20% más que Pedro Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid cobra casi un 20% más que el del Gobierno. Isabel Díaz Ayuso se embolsa 103.090,32 euros al año, frente a los 86.542 euros de Pedro Sánchez. La polémica ha saltado por la subida del 4% que se aplicará al Ejecutivo central para el 2023 y que elevará el salario del presidente hasta los 90.000 euros. La mandataria madrileña ha criticado la medida y ha justificado este lunes percibir más dinero que Sánchez. "Yo no tengo falcon, a mi nadie me paga mi domicilio, etc.", ha dicho en una entrevista en Trece TV.

"Los presidentes autonómicos tenemos cada uno [un sueldo], también en base a la población y al Producto Interior Bruto de nuestras regiones y no está en mi mente que nadie de mi consejo de Gobierno ni nadie se los suba, sino dejarlos congelados todavía más tiempo porque nadie entiende lo contrario", ha dicho Ayuso. En su intervención, la presidenta ha obviado una evidencia: España tiene más población que la Comunidad de Madrid.

Además, la presidenta ha presumido de tener "el Gobierno, yo creo, más estable de España". "Primero porque no soy amiga de ir haciendo crisis e ir cortando cabezas, porque eso significaría que hice una mala elección en su momento", ha justificado. Ayuso provocó en mayo de 2021 una repetición electoral tras dinamitar su Ejecutivo de coalición con Ciudadanos, a quien borró del mapa en la Asamblea de Madrid, con acusaciones de que planeaban apoyar una moción de censura en su contra, que desde el partido que dirige Inés Arrimadas desmintieron.

Ayuso, que ha mantenido desde el inicio de esta segunda breve legislatura a sus nueve consejeros si ha hecho alguno cambios. El principal, el ascenso como vicepresidente de su consejero de Educación Enrique Ossorio, que llevó aparejada una subida de sueldo, por encima incluso del de la propia presidenta, hasta los 112.351 euros. Pero también ha provocado otros movimientos en niveles intermedios de su Gobierno, con cambios entre sus viceconsejerías y direcciones generales, que han afectado principalmente al área de sanidad. El último y más reseñable, el de Antonio Zapatero, a quien puso al frente de la COVID y que ahora está a las órdenes del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el partido.

Este mismo martes, el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha presentado una iniciativa para que ningún miembro del Gobierno de Ayuso cobre más que el presidente del Ejecutivo Central. En su escrito, basan su petición en las críticas que la presidenta madrileña realizó al salario de Pedro Sánchez, al considerarlo excesivamente elevado dadas las circunstancias actuales. "Sin embargo, existen múltiples cargos de la Comunidad de Madrid que cobran cantidades superiores a lo que cobra el presidente del Gobierno de España", señalan.

Durante la misma entrevista, la presidenta madrileña ha defendido también a su vicepresidente, tras la polémica suscitada la semana pasada cuando afirmó que las familias ya han superado la muerte de los mayores de las residencias durante lo peor de la primera ola de la pandemia, en la que la consejería de Sanidad envió un protocolo en el que impedía su traslado a hospitales en determinados casos. “Le han retorcido las palabras. Le han buscado la reprobación. Vox se ha vuelto a sumar a ello. No lo logro entender”, ha dicho Ayuso.

En la misma línea, ha mantenido que “la izquierda necesita constantemente rescribir esta historia para sobrevivir, para tener excusas para llevar a los juzgados en según qué municipios, sobre todo sin son de la izquierda, para sacar una pancarta” y ponerla de “asesina”.

https://www.eldiario.es/madrid/ayuso-justifica-cobrar-pedro-sanchez-no-falcon-nadie-paga-domicilio_1_9613509.html

DOS AÑOS Y MEDIO DE MENTIRAS SOBRE LOS “PROTOCOS DE LA VERGÜENZA” DE AYUSO

La presidenta madrileña vuelve a afirmar, contra todas las evidencias, que los hospitales no aplicaron las reglas autonómicas que excluían a los mayores de residencias.

Dos años y medio después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a negar que su Gobierno elaboró los protocolos que impidieron la hospitalización de miles de mayores que vivían en las residencias de la región en la primavera de 2020, durante la primera ola de la pandemia. Esta vez lo ha hecho en la Asamblea durante una respuesta en la sesión de control de este jueves a la líder de la oposición. Mónica García (Más Madrid) le dijo que se cumplían 939 días desde que el Ejecutivo regional firmó “los protocolos de la vergüenza” que supusieron la muerte de 7.291 mayores. Ayuso respondió: “No dejaré de recordar cada día de mi vida mientras sea presidenta y la tenga a usted enfrente que miente de manera descarada con un informe que no es cierto y que no se aplicó de ninguna manera”. De esa forma, Ayuso se oponía descaradamente a una verdad probada por múltiples vías: investigaciones periodísticas, declaraciones de médicos de residencias y representantes de la patronal, el vídeo del jefe médico de un hospital que instruye al personal o incluso la admisión del propio alto cargo madrileño que firmó los protocolos en una comparecencia en la Asamblea.

Los “protocolos de la vergüenza” se han convertido en la expresión más usada para nombrar el episodio probablemente más oscuro de la presidencia de Ayuso, las miles de muertes en circunstancias indignas en las residencias. El tema había caído en el olvido tras la aplastante victoria electoral de la presidenta en mayo de 2021, cuando Vox secundó la petición del PP de poner fin a la comisión de investigación parlamentaria. Pero este mes los protocolos han vuelto a la agenda pública, después de que Vox retomase la propuesta de examinar lo sucedido, una idea que coincidió con la salida a la venta de un libro del exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Ciudadanos), donde cuenta con detalle lo sucedido y desmonta falsedades que emplearon sus entonces compañeros de Gobierno. Además, la semana pasada se conoció otro giro importante, ya que la Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales que pongan más empeño en las investigaciones judiciales pendientes y no archiven los casos sin entrevistar a las familias, como ha sucedido hasta ahora.

Mientras el asunto estuvo candente en 2020, la Comunidad de Madrid trató de eludir responsabilidades con el argumento falso de que los protocolos eran borradores (Ayuso en mayo) o que se enviaron por error (el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en junio). Era parte de una estrategia de ruido y confusión en la que también se acusó al entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de haber asumido la competencia sobre las residencias de todo el país, otra falsedad que se basa en una rueda de prensa del 19 de marzo en la que Iglesias anunció ayudas millonarias para el sector y el apoyo de los militares para fumigar centros. Pero no, la competencia de regulación y vigilancia de las residencias nunca dejó de ser autonómica, al estar transferida. La Comunidad también ha tratado de rebajar la gravedad de la tragedia, al repetir una y otra vez que lo mismo sucedió en todas partes. La realidad es que, aunque hospitales de otras regiones de Europa como Italia, el Reino Unido o Bélgica rechazaron a mayores de residencias, el caso de Madrid sobresale junto a Cataluña por haber puesto ese

rechazo por escrito, según Amnistía Internacional. En el caso de Madrid, los términos de los protocolos eran más severos y el sistema de filtrado en la admisión hospitalaria más elaborado.

El origen de los protocolos es una situación de pánico. Como ha contado este periódico, la cúpula del Gobierno Ayuso trató de reaccionar en la semana del lunes 9 de marzo de 2020 a un inminente colapso del sistema hospitalario por el avance de la covid-19. El fin de semana anterior se había producido un elevado número de ingresos en varios hospitales, entre ellos el de Torrejón de Ardoz. La presidenta convocó a la sede de su Gobierno, la Real Casa de Correos, al médico Antonio Burgueño para que le asesorara en una respuesta y este elaboró un plan de 270 puntos que nunca ha sido publicado. El jueves 12, el consejero Escudero anunció, entre otras medidas, la medicalización de las residencias, es decir, que los mayores de estos centros iban a ser atendidos en esos centros gracias a un supuesto refuerzo sanitario. No precisó más sobre ese plan, en el que no participó el consejero que tenía la supervisión de las residencias, Alberto Reyero, quien luego criticaría que esa medicalización no fue real.

Escudero evitó mencionar que un grupo de geriatras iba a elaborar un protocolo para restringir las hospitalizaciones. El viernes 13, diez geriatras se reunieron con el director general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, con el fin de poner por escrito un nuevo protocolo para la hospitalización de enfermos de residencias. El grupo fue ampliado a 22 geriatras el 16 de marzo. Trabajaron sobre un borrador online y elaboraron cuatro versiones que fueron distribuidas y firmadas por Mur con fecha de 18, 20, 24 y 25 de marzo.

Hasta la pandemia, las residencias que necesitaban hospitalizar a un enfermo simplemente llamaban al número de urgencias y esperaban una ambulancia. Con el sistema creado por los protocolos, los geriatras iban a actuar de filtro, siguiendo unas reglas que desaconsejaban la hospitalización de personas con dependencias de acuerdo a un índice conocido como Barthel, una escala que mide la autonomía de las personas del 0 al 100. En la última versión, la escala Barthel fue sustituida por una escala de fragilidad del 1 al 9, acompañada de dibujos, según se ve en un documento que recibieron los geriatras de enlace y al que tuvo acceso EL PAÍS. Eran descartados quienes tuvieran una fragilidad de 7 o mayor, es decir, que fueran dependientes para su cuidado personal. El dibujo que acompaña a ese nivel es el de una persona mayor empujada en silla de ruedas. En los hogares de mayores, la mayoría de los residentes son personas con dependencias, de modo que en la práctica se hacía muy difícil que un mayor pudiera ser admitido por un hospital.

Hay evidencias de que ya antes del primer protocolo del 18 de marzo se estaban denegando hospitalizaciones. El mejor ejemplo es Monte Hermoso, la residencia de la capital donde estalló la crisis al saberse el 17 de marzo que un foco de covid había supuesto la muerte de 19 personas en la semana anterior sin un traslado al hospital Clínico, del que dependían. El abogado Carlos Sardinero, de la Asociación Defensor del Paciente, ha defendido a los familiares de un enfermo al que el hospital denegó el traslado tan pronto como el domingo 8 de marzo.

También hay pruebas de que a la hora de la verdad, cuando recibían una llamada de la residencia, los hospitales no siguieron los protocolos, sino que fueron aún más estrictos. Este periódico ha contado cómo en algunos casos se usó un criterio de edad (75 años) y cómo en una residencia de Alcorcón se produjo un bloqueo total a las derivaciones durante 27 días. En otro caso, María Dolores Agenjo, de 87 años, fue rechazada por el hospital Rey Juan Carlos a pesar de ser plenamente autónoma, según denunció su hija.

Los protocolos fueron enviados a las residencias y a los hospitales, de modo que no pasó mucho tiempo hasta que fueron filtrados a la prensa. Esto ocurrió por primera vez el 25 de marzo, cuando El Español reveló la existencia de una de las versiones, la segunda. Un día después, EL PAÍS publicó la versión definitiva, en la que no se excluye a personas con discapacidad.

La alarma por la situación de las residencias fue en aumento en los días siguientes cuando la Consejería de Políticas Sociales de Reyero fue publicando los datos de mortalidad que recopilaban sus funcionarios en comunicaciones diarias con las residencias. Al final de la primavera, ese conteo llegó a 5.954 muertes dentro de las residencias. Al principio de la crisis vivían unos 50.000 mayores en 474 residencias de la región. Más tarde, la Consejería de Sanidad dio una cifra algo menor a 5.000 muertos sobre la base de otro método de conteo: los certificados

de defunción. Pero ese sistema infravaloraba las muertes, ya que muchas veces estos documentos calificaron como “parada cardíaca” lo que en realidad era una muerte causada por la covid-19.

El dato de 7.921 muertos al que se refirió Mónica García este jueves procede del diario InfoLibre, que analizó las muertes por cualquier causa dentro de residencias madrileñas en los meses de marzo y abril. Fue en esos meses cuando los protocolos hicieron mayores estragos. Este medio publicó datos de derivaciones a hospitales de la Consejería de Sanidad que muestran que las exclusiones fueron más intensas entre el 9 de marzo y el 5 de abril. Y con especial intensidad entre el 16 y el 29 de marzo. Conforme los hospitales liberaron camas, los geriatras dejaron de actuar de filtro y los residentes enfermos volvieron a ser admitidos, aunque esa situación varió de un hospital a otro. Según un análisis que publicó EL PAÍS, en toda la primera ola (de marzo a junio de 2020) murieron 11.389 mayores que vivían en residencias, de los cuales 8.338 (el 73%) no fueron trasladados a un hospital.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-14/la-verdad-sobre-los-protocolos-de-triaje-que-niega-ayuso.html>

LOS DOS AÑOS EN QUE OSSORIO FUE JEFE DE AYUSO

El vicepresidente madrileño mandó sobre la presidenta entre 2015 y 2017, una etapa en la que su empatía fue cuestionada, como ocurre ahora

El vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio (Badajoz, 63 años), es hoy un férreo escudero de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en esa tarea se está jugando su reputación con declaraciones ofensivas, entre otros a los pobres de Madrid y a las familias de los fallecidos en la crisis de las residencias. Pero hace siete años, Ossorio era el jefe de Ayuso y, según lo describen seis fuentes con conocimiento directo, iba por pasillos y despachos cuestionando la valía de la joven diputada. “Es flojita. Le falta mucho”, son las palabras que recuerda haber oído un diputado del PSOE durante una conversación con él y otros en la cafetería de la Asamblea. Cinco fuentes más confirman haber sido testigos de esas pullas —dos exdiputados del Partido Popular, otros dos de Ciudadanos y una fuente del Gobierno de la popular Cristina Cifuentes—. “Es una perfecta inútil”, llegó a decir en una ocasión sobre la hoy presidenta.

Esto sucedió entre julio de 2015 y septiembre de 2017, cuando gobernaba Cifuentes. Al principio de esa etapa, la líder conservadora nombró a Ossorio como portavoz del PP en la Asamblea, un cargo con un enorme poder sobre la bancada, con la capacidad de repartir intervenciones y por tanto hacer que unos diputados se luzcan y otros se apaguen. Cifuentes reclutó a Ossorio a pesar de que procedía de un entorno bajo sospecha. Venía de ser consejero de Hacienda y Economía en el anterior Gobierno de Ignacio González, donde tres consejeros y el propio presidente, hoy en prisión, tenían ya encima la lupa de investigadores de la corrupción. Pero a favor de Ossorio jugaba su imagen de trabajador infatigable con mucho conocimiento de la Administración. Tenía 19 años de experiencia en Gobiernos populares como alto cargo en materia de Hacienda entre las administraciones estatal y autonómica. Según se publicó, Cifuentes lo eligió porque el PP, en minoría, iba a necesitar llegar a acuerdos con los otros tres partidos y Ossorio era “un moderado”, “un pacificador”.

La presidenta le colocó a dos portavoces adjuntas: una acabó ese período muy bien. La otra terminó verdaderamente mal.

La que prosperó, a pesar del ninguneo a sus espaldas, fue Ayuso. En 2015, llevaba solo cuatro años en la Asamblea como diputada rasa y venía de haber dirigido las redes sociales de Esperanza Aguirre, incluido su perro Pecas, en una campaña fallida por la alcaldía de la capital. En una de las primeras intervenciones de Ayuso en la legislatura anterior, se cruzó con Ossorio. “Me ha parecido muy bueno tu discurso”, le dijo él con tono amable. Ella no le creyó, según reveló este año en la toma de posesión de Ossorio como vicepresidente. En la segunda legislatura de Ayuso, los dos tuvieron a la vista de todos una relación muy estrecha, como si fueran “uña y carne”. Ayuso parecía “la favorita”.

“Siempre hablaba con mucho cariño de él”, recuerda un exdiputado de Cs. “Decía que era buena gente y un referente político”.

La otra portavoz bajo los mandos de Ossorio era una diputada muy cercana a Cifuentes, Elena González Moñux. En octubre de 2016, tras un año de “humillaciones” en su trabajo, Moñux denunció a Ossorio por acoso laboral, según reveló entonces EL PAÍS. Obtuvo una baja médica por “depresión mayor”, debido a las “elevadas agresiones verbales” que soportaba. Según su versión, Ossorio la excluía de los trabajos parlamentarios, la insultaba y la menospreciaba delante de otros compañeros.

“¡Es que no te sabes la ley, eres tonta, tonta!”, le dijo una vez sentado junto a ella en el pleno, según contó Moñux. En aquella ocasión, según su relato, le prohibió ir a comer sin estudiarse una norma sobre bienestar animal que ella estaba encabezando. Otro día la echó de malos modos de su despacho: “No quiero verte. Como no haces tu trabajo, ya lo haré yo por ti”. Ossorio negó el testimonio de Moñux y la acusó de mentir. Ella presentó en noviembre una querrela ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dos meses después la archivó por “la total inexistencia de indicios de infracción penal”.

Moñux, que ha declinado hablar para esta información, no ha contado nunca cómo reaccionó su compañera Ayuso a este supuesto acoso. Lo que sí dijo es que nadie en su grupo la respaldó y, según cuentan hoy diputados de otros partidos, Moñux fue condenada al ostracismo. “Se notaba que la miraban con desprecio”, dice un exdiputado de la oposición. Aquella crisis inusitada en la política española era muy delicada para Cifuentes porque el PP dependía del voto de Moñux para deshacer el empate parlamentario. En febrero de 2017, la mano derecha de la presidenta, el consejero de Presidencia Ángel Garrido, anunció que Moñux y Ossorio firmaban la paz y desistían de una batalla judicial. Más importante, consiguieron que Moñux, a pesar de estar de baja médica, se presentase en abril para votar los presupuestos. Aquel día, tras la aprobación, toda la bancada popular estalló en una ovación en pie, salvo ella que quedó encorvada en su escaño con el rostro desencajado. Luego, entregó su acta y se marchó a dirigir la Fundación de la Energía, perteneciente a la Comunidad, hasta 2019, cuando se retiró de la política.

Ossorio ha rechazado a través de un portavoz conceder una entrevista para este reportaje, hecho tras consultar a una quincena de fuentes que han tratado con él en la Asamblea, el Gobierno y la comunidad educativa (Ossorio es hoy también consejero de Educación). Su retrato como un personaje despótico sorprende porque muchos describen un trato afable y gustos refinados como la música clásica. “Jamás le he visto levantar la voz en mi vida”, afirma Jaime de los Santos, consejero de Cultura en esta época en la que también coincidieron como patronos del Teatro Real. “Enrique Ossorio ha trabajado para muchos gobiernos diferentes de gente muy dispar en el PP que lo han elegido por algo y eso es una garantía”.

La suerte de Ayuso fue opuesta a la de Moñux. Fue ganando visibilidad en la Asamblea con intervenciones que anticipaban sus temas preferidos como la batalla cultural contra la izquierda, por ejemplo en un discurso en junio de 2017 contra una iniciativa de Podemos para lanzar una campaña en el Metro contra el manspreading (despatarre de los hombres). Para ridiculizar la propuesta, Ayuso mostró una cartulina donde se veía al líder de Podemos, Pablo Iglesias, en una posición semejante: “Tenemos al macho alfa principal en una postura de apertura de piernas de 45 grados con remango, y pudiera parecer la postura de El pensador de Rodin en una frase profunda estilo bolivariano siglo XXI”.

En septiembre de ese año, Cifuentes la promovió al cargo de viceconsejera de Justicia, lo que motivó que abandonara la Asamblea.

Ossorio, por su parte, siguió como portavoz del grupo. Sorprendió a quienes pensaron que era un tecnócrata aburrido. Fue cada vez más político y dio muestras de un estilo agresivo, a veces hiriente. “Ciudadanos sólo tiene una neurona, y se dedican a esparcir la corrupción”, dijo sobre el grupo que sostenía a Cifuentes. Y en otra intervención para defenderse de acusaciones de corrupción soltó: “A partir de ahora, cuando alguien de Podemos me diga que robo yo le voy a decir que es un acosador de menores, un pedófilo”.

En abril de 2018, se abrió para él la oportunidad de ser presidente cuando Cifuentes dimitió por el caso Máster y el vídeo robando cremas. Tras dos semanas de dudas en las que su nombre apareció en las quinielas, la dirección nacional del PP de Mariano Rajoy nombró a Garrido como sustituto hasta las elecciones autonómicas del año siguiente. La sombra de la corrupción en la etapa de González limitaba las opciones de Ossorio. En particular se había cuestionado durante esa legislatura si conoció las operaciones con sobrepagos del Canal de Isabel II que motivaron el caso Lezo, así como el posible rol en la trama Púnica -de financiación irregular del PP- de un ente que Ossorio presidió entre 2007 y 2011, la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, creado por Aguirre para “reforzar el sentimiento de que España es una gran nación”. En ningún caso fue imputado.

Intercambio de papeles

En contraste con Ossorio, los astros se alinearon para Ayuso. Tras la moción de censura a Rajoy, el nuevo líder nacional del PP, Pablo Casado, eligió a su amiga como aspirante en las autonómicas de mayo de 2019. Al formar su equipo, ella se iba a acordar de su antiguo jefe en la Asamblea. Como candidata, le encargó el diseño de su programa electoral y, una vez presidenta, le hizo consejero de Educación.

En ese cargo, Ossorio ha sido ampliamente visto como aliado del sector privado, que se ha expandido con la llegada de fondos de inversión internacionales y la luz verde a dos nuevas universidades privadas. Ossorio ha indignado a buena parte de la comunidad educativa, incluidas las escuelas concertadas, por sus ayudas económicas a los alumnos de centros 100% privados. Además, el diálogo con varios representantes del sector se ha empobrecido. “Solo en 2022 le hemos pedido en siete ocasiones una reunión, pero nunca responde”, dice Mari Carmen Morillas, la presidenta de la mayor entidad de padres en Madrid, la FAPA Giner de los Ríos. Es un claro contraste con la comunicación fluida que tuvieron con su antecesor, Rafael Van Grieken. “Teníamos su teléfono y le podíamos guasapear sobre asuntos de trabajo”, añade Morillas.

A Ossorio sí que lo ven mucho en la tele, pero no hablando de educación, sino defendiendo a Ayuso como portavoz, un cargo que asumió en marzo de 2021. También lo ven sentado a la derecha de Ayuso en el pleno desde junio de este año, cuando le hizo vicepresidente.

El desplazado ha sido otro hombre de su guardia pretoriana, Enrique López, que aparentemente cayó en desgracia tras un episodio clave el viernes 18 de febrero. Esa mañana, cuando Casado acusó a Ayuso de corrupción en la Cope, tres consejeros fueron citados en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, para que dieran la cara por la presidenta en una rueda de prensa convocada de inmediato: Javier Fernández-Lasquetty (Hacienda), Enrique Escudero (Sanidad) y Enrique López (Presidencia). Este último, con un puesto en Génova, se ausentó. Según una fuente del PP cercana a Ayuso ese día quedó claro quién estaba dispuesto a darlo todo por la presidenta y quién no. Ossorio, que había dado sobradas pruebas de fidelidad, salió reforzado: “El vicepresidente es hoy Enrique Ossorio en lugar de Enrique López porque este no fue leal”.

Ossorio tocó su techo el 20 de junio, en la ceremonia de toma de posesión de ese nuevo galón. En una breve intervención en la Casa de Correos, Ayuso tuvo las mejores palabras. Además de describirle como “culto” y “familiar”, dijo que es “un hombre bueno”. Es una descripción que choca a las muchas personas que se han sentido heridas por él.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-17/los-dos-anos-en-que-ossorio-fue-jefe-de-ayuso.html>

LA IZQUIERDA DE MADRID SE VUELCA EN QUE NO QUEDE SIN INVESTIGAR LA TRÁGICA MUERTE DE MAYORES EN LAS RESIDENCIAS EN LA PRIMERA OLA DE COVID

Más Madrid, PSOE y Podemos registran una comisión que previsiblemente no saldrá adelante, pero se comprometen a intentarlo tantas veces como haga falta: “Hubo 7.291 fallecidos, como si tenemos que registrarla 7.291 veces”

La herida abierta por las muertes de más de 5.000 ancianos en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia del coronavirus supura este jueves en la Asamblea, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a un testimonio desgarrador. Justo antes de que los tres partidos de izquierdas registren una comisión de investigación sobre lo ocurrido —que, previsiblemente, no saldrá adelante porque no tiene el apoyo de PP y Vox—, los portavoces de Podemos (Alejandra Jacinto) y PSOE (Juan Lobato) coinciden durante el pleno en leerle la carta de la hija de uno de los fallecidos. “No es que no queramos reabrir la herida, señor [Enrique] Ossorio, es que no la hemos cerrado”, golpean esas palabras con la firma de Ángeles Caballero, columnista de El Confidencial, escandalizada por las declaraciones del vicepresidente regional de que las familias ya han superado las muertes de sus seres queridos.

Ayuso, aparentemente impertérrita, muestra reflejos políticos: pide el contacto de la firmante, mientras intenta guarecerse de la tormenta desatada por la oposición, que en el hemiciclo y fuera, con ella presente, y sin ella, se convierte en el altavoz del dolor de esos familiares, que buscan respuestas sin encontrarlas.

“Hay un abandono institucional a las familias”, se queja Mónica García, portavoz de Más Madrid. “Les tenemos que dar una respuesta”, reclama. “Queremos que se investigue qué es lo que pasó durante la pandemia con los fallecidos, cómo es posible que seamos la única región de Europa que tenía un protocolo que evitaba dar el auxilio debido”, sigue. “Aquí hubo órdenes políticas que hicieron que los mayores murieran de forma indigna”, añade. “Sería un escándalo que la Mesa boicotee el debate”, añade, en referencia a que la izquierda da por descontado que el órgano que regula el día a día de la Asamblea rechazará la comisión de investigación, pues lo controla el PP, que en el pasado ya se ha acogido a motivos reglamentarios para evitar el debate y votación de iniciativas similares en el pleno de la Cámara.

En la misma línea se expresa Juan Lobato, el portavoz del PSOE: “Señora Ayuso, por decencia, pida disculpas”, reclama. “Ojalá que el PP no vuelva a tener la cobardía de parar administrativamente [en la Mesa] un debate necesario, sin ambición de revanchismo, para saber qué ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Que se tramite, debata y discuta en la Asamblea”, pide, aún escandalizado porque el PP haya evitado con su mayoría parlamentaria, en contra del criterio del resto de grupos, incluido Vox, que se debata la reprobación de Ossorio por sus palabras sobre las residencias.

Mensaje político

Todas esas dificultades reflejan que el registro de la petición de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias es un gesto de gran calado político. Da igual que ya hayan sido rechazadas varias peticiones similares en la Mesa. No importa que sea imposible que la iniciativa salga adelante mientras el PP y Vox mantengan su rechazo. Y poco influye saber que la comisión solo tendría tiempo para unas pocas sesiones, de crearse, puesto que la Asamblea será disuelta en marzo por la convocatoria electoral de mayo de 2023.

Lo que pesa, opinan los estrategas de la izquierda, es que se lanza un mensaje político de peso: al unir a todas las formaciones progresistas pese a esas dificultades, se constata su compromiso con que se esclarezca lo ocurrido en esta legislatura, la próxima o la siguiente.

“Hubo 7.291 fallecidos en las residencias, como si tenemos que registrar esta comisión 7.291 veces para que esto no vuelva a suceder”, advierte Alejandra Jacinto, de Podemos.

O lo que es lo mismo: Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no quieren que el paso del tiempo evite aclarar las responsabilidades políticas por las muertes en las residencias durante la primera ola de la pandemia. Y esperan que la Mesa no frene la iniciativa en su reunión del lunes, para que al menos se pueda debatir en el pleno, donde la condenaría la mayoría que componen el PP y Vox.

Es la culminación de una jornada en la que Ayuso se ha dedicado a regatear su responsabilidad en la gestión de la crisis sanitaria, pues culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de los peores capítulos en la lucha contra el virus. Por negar, la líder conservadora niega hasta la existencia de los protocolos de triaje que impidieron trasladar a los hospitales a los ancianos en lo peor de

la primera ola: “No se aplicó de ninguna manera”. E incluso se enfrenta con Vox, su único aliado parlamentario posible.

“Sobre las residencias, desconozco por qué se han puesto a darme lecciones de humanidad”, le espetó la presidenta regional a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que el martes retiró la propuesta de una comisión de estudio sobre las residencias acusando a la izquierda de actuar con “rencor”, y al PP, de “falta de humanidad”. “Me ha hecho cero preguntas sobre residencias desde que soy presidenta de la Comunidad”, añade Ayuso. “No sé, por tanto, a quién le falta humanidad”.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-13/la-izquierda-de-madrid-se-vuelca-en-que-no-quede-sin-investigar-la-tragica-muerte-de-mayores-sin-atencion-medica-en-las-residencias-en-la-primera-ola-de-covid.html>

EL PP DE AYUSO VETA LA REPROBACIÓN DE OSSORIO EN LA ASAMBLEA TRAS PERMITIR LA DE OTRA CONSEJERA

Los conservadores argumentan que la votación para castigar la gestión del gobierno no existe en el reglamento, pero aceptaron que se votara la de Dancausa

El PP ha impuesto este lunes su mayoría en la Mesa de la Asamblea de Madrid para vetar que la Cámara pueda votar tres iniciativas similares de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, que querían reprobar a Enrique Ossorio, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, por haber dicho que las familias de los ancianos fallecidos en las residencias durante la primera ola de la pandemia “ya lo han superado”. Según fuentes presentes en la reunión, los representantes de la formación conservadora han argumentado que permitir esa votación equivaldría a incurrir “en un fraude de ley”, pues esa figura parlamentaria no está recogida ni en el reglamento del Parlamento ni en el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, este mismo febrero, con el mismo gobierno, la misma presidenta, y la misma Mesa, se votó la reprobación de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa. Nadie observó entonces defecto de forma o fraude de ley alguno. Pero el PP no temía entonces lo que ahora: que la crisis de las residencias desgaste al número dos del gobierno y erosione la alianza del PP con Vox, de la que dependen los Presupuestos de 2023.

“El argumento es que no aparece la reprobación en el reglamento de la Cámara ni en el Estatuto”, ha explicado una fuente conocedora de lo ocurrido en la Mesa.

“Alucinante”, ha reaccionado otra. “¡Ahora salen con que es fraude de ley!”.

“Hemos visto la cobardía del PP y de la señora Díaz Ayuso”, ha lamentado Juan Lobato, el líder regional del PSOE. “Hay antecedentes numerosísimos de reprobaciones anteriores. Es de nuevo una falta de respeto, y querer ocultar a la sociedad madrileña la falta de respeto del consejero con las familias”.

Contactado por este diario, el PP no explicó qué razón o defecto de forma le han llevado a decidir no tramitar las tres iniciativas de la oposición, a las que no se ha opuesto Vox, su único socio posible en el Parlamento.

Todo arranca el martes pasado, cuando Vox sorprende al PP al anunciar su intención de patrocinar una comisión de estudio sobre las residencias que tenía congelada en la Cámara desde 2021. Tras casi tres años de desgaste por las muertes de más de 5.000 ancianos residentes en esos centros, Díaz Ayuso lo considera una traición. Pese a que la iniciativa está lejos de ser una realidad, pues Más Madrid y PSOE no están convencidos de dar su necesario apoyo, el PP se lanza al ataque contra la extrema derecha. Al día siguiente del anuncio de Vox, ya miércoles, y en ese contexto de choque entre los dos partidos, Ossorio se refiere en estos términos a la polémica durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del consejo de gobierno.

“Esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias, que podrán volver a pensar: ‘¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar?’”,

se pregunta ante los periodistas. "Eso las familias ya lo han superado, y volver a esto, por interés electoral, creo que sinceramente no es procedente", afirma. "[Con la comisión] Lanzamos el mensaje falso de que lo que sucedió se pudo evitar", se queja Ossorio, sin hacer ninguna mención a que el Gobierno regional impuso a los hospitales en marzo de 2020 unos protocolos que negaron el traslado a miles de personas mayores que vivían en residencias y los condenaron a morir sin cuidados paliativos y solos en sus habitaciones. Y argumenta: "Sucedió igual en todo el mundo, con alta incidencia en las personas mayores, y especialmente en aquellas con otras patologías. La justicia ha archivado todas las denuncias, en Madrid y en todos los sitios. (...) Lo que me extraña es que coincidan Rocío Monasterio [de Vox] y Mónica García [de Más Madrid]".

Esas palabras son doblemente dañinas: añaden leña a un fuego que ya existía, y crean otro. Así, la posibilidad de una comisión de estudio (para mejorar el sistema de residencias) tensa la relación del PP con Vox, por mucho que la extrema derecha se niegue a impulsar un órgano de investigación sobre lo ocurrido durante la pandemia (que depure responsabilidades políticas). De hecho, como adelantó EL PAÍS, Díaz Ayuso da orden de que el PP no participe en los trabajos si finalmente salen adelante. Además, la palabras de Ossorio crean un segundo frente que desgasta al Gobierno: provocan las protestas de los familiares, que en cientos de casos han recurrido ante la justicia contra los protocolos de triaje de la región, únicos que dejó por escrito una Comunidad Autónoma, allá por marzo de 2020.

Finalmente, este lunes, la Mesa, controlada por el PP, ha rechazado tramitar las peticiones de reprobación contra el número dos del gobierno registradas por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Ha dado igual que haya casi una decena de precedentes de votaciones similares, incluso de esta misma legislatura, pues Dancausa salvó la suya gracias a la abstención de Vox en febrero. O que haya habido consejeros directamente reprobados, porque el gobierno perdió la reprobación. El PP ha considerado hoy imposible lo que hace siete meses permitió votar.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-10/el-pp-enmienda-al-pp-para-proteger-al-numero-dos-de-ayuso-veta-por-fraude-la-reprobacion-de-ossorio-tras-permitir-la-de-una-consejera.html>

MADRID PAGÓ POR DERIVAR A MAYORES A RESIDENCIAS PRIVADAS, AUNQUE TENÍA MÁS DE 1.000 PLAZAS LIBRES EN LAS PÚBLICAS

El grupo socialista en la Asamblea de Madrid ha conseguido por el Portal de Transparencia las plazas libres que había en la primera ola de la pandemia en las residencias públicas. La indemnización a 15 centros privados fue de un millón de euros

Entre abril y junio de 2020 el Gobierno de Ayuso derivó a 163 mayores a 15 residencias privadas procedentes de hospitales y de otros centros. Esa intervención supuso que después se les pagara una indemnización de 1.103.642,34 euros, sin embargo, había plazas libres en las 25 residencias públicas que hay en la región y que gestiona la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Había 1.417 plazas libres en abril, 1.538 en mayo y 1.616 en junio.

Son datos oficiales que ha conseguido el grupo socialista en la Asamblea de Madrid tras preguntar a través del Portal de Transparencia. "Más de 1.500 plazas de media en residencias públicas tenía disponibles la Comunidad de Madrid entre abril y junio de 2020 mientras ingresaba a 163 mayores en residencias privadas. Plazas que se pagaron muy por encima del precio que abonaba por una plaza concertada y conforme a lo que las propias residencias privadas le pidieron y, sin embargo, ¿no podían hacer uso de sus propias plazas públicas vacías? No tiene ningún sentido", denuncia Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales del PSOE-M.

La Comunidad de Madrid, como ya adelantó Radio Madrid, pagó a estos centros como indemnización casi 90 euros por plaza frente a los poco más de 50 euros que se pagaban en esas fechas por las plazas concertadas. Además, lo hizo en contra del criterio de la Abogacía de la Comunidad de Madrid.

Fuentes de la Consejería de Política Social explican que las plazas no ocupadas de las residencias públicas responden "a la suspensión de nuevos ingresos decretada por las autoridades sanitarias, a los residentes que se fueron con sus familias durante esas semanas y

a que el AMAS aplicó desde abril la reserva de un 10% de sus plazas autorizadas para poder mantener la distancia social y los aislamientos", una medida esta última que se tomó antes de que las autoridades sanitarias lo hicieran general a todos los centros.

En cualquier caso, explican desde el departamento que dirige Concepción Dancausa, que "el traslado de residentes a otros centros no obedecía al número de plazas disponibles, la decisión se tomaba con criterios técnicos sanitarios en función del nivel de contagio de los centros, de su estructura o de las zonas sectorizadas de los mismos". Algo que no convence a la portavoz socialista que recuerda que se trasladó a mayores sin saber si estaban contagiados a centros en los que había fallecidos y dificultades para aislar.

<https://cadenaser.com/cmadrid/2022/10/11/madrid-pago-por-derivar-a-mayores-a-residencias-privadas-aunque-tenia-mas-de-1000-plazas-libres-en-las-publicas-radio-madrid/>

VOX 'SALVA' A AYUSO Y PARALIZA LA COMISIÓN DE RESIDENCIAS: "AL PP LE FALTA HUMANIDAD Y A LA IZQUIERDA LE SOBRA RENCOR"

Monasterio recula y supedita la reapertura de la investigación a que las fuerzas políticas aborden el debate con madurez

Nuevo giro en la comisión de investigación sobre residencias en la Asamblea de Madrid. Tras amagar la pasada semana con su reapertura, Vox ha reculado y ha salvado a Isabel Díaz Ayuso. El grupo encabezado por Rocío Monasterio ha paralizado el órgano, condicionando su puesta en marcha a que el debate entre las fuerzas políticas se aborde con madurez y no se utilice a los mayores. La líder ultraderechista ha argumentado que al PP "le falta humanidad" y a la "izquierda le sobra rencor".

El jueves, Ayuso y Monasterio protagonizaron un acalorado debate en un clima tensionado por la polémica afirmación del vicepresidente de la Comunidad, Enrique Ossorio. La primera acusó a la segunda de "falta de principios" al plegarse a la estrategia de la izquierda para "retorcer el dolor" de las familias de las víctimas del coronavirus en las residencias.

El enfrentamiento verbal se desencadenó después de que Vox se abriera a la creación de una comisión sobre residencias, aunque desde un prisma radicalmente opuesto al que propusieron el resto de grupos de la oposición. La izquierda parlamentaria, al contrario que los ultraderechistas, abogaron por la reapertura de la investigación, paralizada por el adelanto electoral de 2021, mientras que los de Rocío Monasterio defendían una "mirada hacia delante" a través de una comisión de estudio. La diferencia radica en que en la segunda no es necesario la comparecencia de los citados.

Falta de madurez

Ahora, Rocío Monasterio ha regresado sus pasos y ha ordenado la retirada de la propuesta para investigar el modelo de residencias de mayores en la región, debate enmarcado en el orden del día del pleno de este próximo jueves. La maniobra de Vox responde, en palabras de su líder, a rebajar el clima de tensión que impera en torno a los centros sociosanitarios y afrontar la discusión desde un punto de vista "maduro" para, así, sacar del barro político a "los mayores".

"Al PP le falta humanidad y a la izquierda le sobra rencor", ha resuelto la dirigente de Vox en la autonomía. Su propuesta, con un muy corto recorrido debido al rechazo de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, pivotaba sobre el futuro de los centros sociosanitarios y cómo mejorarlos de cara al futuro. Es decir, pretendía posar sus ojos en el futuro de las residencias y no en lo que ocurrió en los momentos más duros de la pandemia, como planteó la izquierda.

Alivio en el PP

La marcha atrás de Monasterio concede unos momentos de alivio a los conservadores, a quienes les permite coger un poco de aire después de las polémicas de Ossorio y de la comisión planteada por sus socios parlamentarios. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, ha subrayado este mismo martes que la comisión les generaba "tristeza e incompreensión" debido a que la ultraderecha hizo seguidismo de la izquierda, a quienes acusan de "utilizar el dolor de las víctimas para hacer política".

Asimismo, ha reprobado a Monasterio por deslizar que el PP carece de "humanidad" porque, a su juicio, esa es una característica imputable a la oposición. No obstante, celebra que Vox se haya percatado de "su error", dado que la comisión "no iba a ningún sitio" y favorecía la "reivindicación de la izquierda". "Ahora es demasiado tarde y ya han cogido carrerilla", ha lamentado el portavoz popular, quienes niegan cualquier tipo de conversación con los ultraderechistas para que retiraran la petición.

Un acto de "cobardía"

En otro orden de cosas, en declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces, el líder del PSOE-M, Juan Lobato, ha enmarcado la jugada de Vox en una negociación de los Presupuestos para 2023 con las víctimas de las residencias "como moneda de cambio".

Asimismo, Lobato se ha pronunciado sobre el veto del PP a la reprobación de Enrique Ossorio. El portavoz de los socialistas madrileños advierte de que se mostrarán "implacables" con el fin de descubrir la "verdad" sobre los centros sociosanitarios. De hecho, ha calificado la maniobra de los conservadores como un "acto de cobardía" porque ni siquiera "se atreven a debatir".

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/vox-salva-ayuso-paraliza-comision-residencias-al-pp-falta-humanidad-izquierda-sobra-rencor_299222102

AYUSO ADMITE AHORA QUE TUVO EL "MANDO ÚNICO" EN LAS RESIDENCIAS Y NO PABLO IGLESIAS: "NO PUEDO ESTAR ORGULLOSA"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha contradicho a su vicepresidente expresando que "el dolor de las familias lógicamente existe y eso no va a cambiar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que tuvo el "mando único" en las residencias de mayores y no el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 en aquel momento, Pablo Iglesias, tal y como el Partido Popular ha alegado hasta ahora para no hacer frente a sus responsabilidades derivadas de la pandemia de coronavirus en esta materia y ocultar el protocolo del Gobierno regional que negaba el derecho a la asistencia sanitaria a determinadas personas.

Durante una entrevista este lunes en El cascabel de Trece, la dirigente madrileña ha cambiado la versión mantenida por su formación política desde hace más de dos años, en el inicio de la crisis sanitaria provocada por la covid-19: "Tuvimos que crear un mando único para ejercer de verdad". "Con este mando único lo que hicimos fue que las competencias", incluidas las de la Consejería de Políticas Sociales que gestiona las residencias de mayores, "pasaran también al consejero de Sanidad, de Presidencia y yo al frente de esto. De esta manera pudimos conocer cuántos residentes había afectados en cada residencia, que se pudiera contactar con las familias para darles el avance de la situación o el pésame", ha relatado Díaz Ayuso en su intervención televisiva.

Además, la mandataria regional ha reconocido que colaboró con la Unidad Militar de Emergencias (UME), acción impulsada por el propio Iglesias para realizar la desinfección de las residencias: "Pudimos crear un mando único que además en coordinación con la UME y bomberos se pudo actuar". Habiendo confesado sus competencias en cuanto a las residencias de mayores, Díaz Ayuso ha recalcado que el "mando único" del Ejecutivo central era únicamente "para hacer las compras sanitarias".

Sin embargo, pese a la ayuda del Gobierno de España, Díaz Ayuso ha alegado que "fue todo muy ingrato y muy injusto". En esta línea, la líder del PP madrileño se ha quejado de que su Ejecutivo autonómico estuvo "solo en todo momento", aunque también ha confesado que no se sienten "orgullosos por nada": "No puedo estar orgullosa".

Respecto a la "única" solución que ella vio viable para las residencias de mayores durante la pandemia de coronavirus, Díaz Ayuso ha puesto como excusa que "la única manera de evitarlo habría sido tener a las personas mayores solas encerradas en una habitación". De hecho,

preguntada por el presentador, Antonio Jiménez, sobre si Iglesias tuvo competencias en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, un discurso sostenido hasta ahora por el PP, la dirigente autonómica ha escabullido la pregunta llegando tan solo a decir que él "vio que no era tan fácil".

Ayuso contradice a su vicepresidente

Tras ello, Díaz Ayuso se ha referido a los partidos políticos de la izquierda en la Asamblea de Madrid para echarles en cara que "dos años y pico más tarde" propongan impulsar "una comisión para reescribir el relato", pero sin mencionar que el PP y Vox rechazaron en anteriores ocasiones iniciativas para la creación de esta misma comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores, en especial por el protocolo impuesto por su Gobierno en el que negaba el derecho a la asistencia sanitaria y el traslado a hospitales a determinadas personas.

Además, ante la cuestión sobre el posible apoyo de Vox a la creación de una comisión de estudio sobre este mismo asunto, Díaz Ayuso ha vuelto a achacar a los partidos de la izquierda -Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE- que "necesitan excusas para llevar a los juzgados". Incluso, ha contradicho a su vicepresidente, Enrique Ossorio, quien aseguró la semana pasada que las familias de las víctimas en las residencias de mayores "ya lo han superado": "El dolor de las familias lógicamente existe y eso no va a cambiar". "No ocurrió nada en Madrid que no ocurriera en otras regiones", se ha excusado la presidenta de la Comunidad de Madrid para no incidir en el mencionado protocolo creado por su Gobierno.

https://www.elplural.com/politica/ayuso-admite-ahora-tuvo-mando-unico-en-residencias-no-pablo-iglesias_299204102

LAS SEIS FALACIAS DEL GOBIERNO AYUSO QUE HUMILLAN A LAS VÍCTIMAS DE LAS RESIDENCIAS

Enrique Ossorio, vicepresidente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), humilló de forma inhumana a las víctimas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid y a sus familiares con unas declaraciones propias de alguien entumecido mentalmente que no siente la más mínima empatía por el dolor de quien ha perdido a su padre, a su abuela o a su hermana en unas circunstancias terribles.

Pero más allá de la rabia e indignación que pueda sentir cualquier persona decente al escucharle, es fundamental analizar fríamente lo que dijo por una razón clave: Ossorio será más o menos torpe dialécticamente, pero sus palabras son la esencia del discurso que el aparato de propaganda y manipulación de Ayuso lleva repitiendo desde hace dos años y medio para ocultar lo que ocurrió y librarse así de cualquier responsabilidad política o penal. Un aparato de propaganda y manipulación que, no lo olvidemos, está formado por dos comandos: el de los comunicadores que diseñan las campañas desde el Gobierno regional y el de los periodistas que difunden ese falso relato a través de sus medios. Ambos, comunicadores y periodistas, son cómplices necesarios de los autores materiales de la barbarie sufrida por miles de personas inocentes en Madrid.

Veamos antes de nada qué afirmó Ossorio cuando le preguntaron por qué se opone el Gobierno de Ayuso a crear una comisión de estudio en la Asamblea de Madrid que analice lo ocurrido en las residencias.

Primero: "Pensamos que no tiene sentido [crear la comisión] porque mandamos un mensaje falso a los familiares. Parece que estamos diciendo o sospechando que las muertes que sucedieron se pudieron evitar y eso no es cierto".

Segundo: "Esto sucedió igual en todo el mundo, esas muertes sucedieron igual en todo el mundo, con alta incidencia en las personas mayores".

Tercero: "Ahora esta comisión solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias que podrán volver a pensar: ¿se podría haber evitado la muerte de mi familiar? Creo que eso las familias ya lo han superado. Y volver a esto por interés electoral de verdad que yo creo sinceramente que no es procedente".

Analicemos ahora los hechos, la verdad que se busca ocultar con ese discurso perfectamente elaborado. Ossorio no improvisó, sino que iba mirando cada poco las notas que llevaba escritas. Un relato que se sostiene sobre seis falacias.

Primera falacia: no es verdad que “en todo el mundo” se aprobase un Protocolo como el de Madrid para impedir el traslado de residentes a hospitales

La Comunidad de Madrid aprobó, el 18 de marzo de 2020, un Protocolo que impedía trasladar a los hospitales a las personas mayores que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física –que iban por ejemplo en silla de ruedas– o que sufrían un deterioro cognitivo importante. [Puedes consultar aquí los documentos íntegros con las cuatro versiones que se aprobaron del Protocolo].

Es fundamental recordar un elemento que no se suele destacar lo suficiente: el Protocolo afectaba tanto a personas con covid como a personas con otras patologías. Por tanto, el elemento clave que utilizó el Gobierno de Ayuso para decidir si un residente podía recibir o no asistencia en un hospital fue si esa persona era capaz de moverse por sí misma o si entendía los mensajes que recibía.

El resultado fue que, en marzo y abril de 2020, murieron en las residencias madrileñas 7.291 mayores. Unos centros que tampoco fueron medicalizados, como anunció entonces el Gobierno regional que se haría de inmediato, de forma que esas personas fallecieron sin la atención médica adecuada. En aquellos dos meses perdieron en total la vida 9.470 residentes, lo que significa que el 77% del total lo hicieron en la propia residencia.

Es falso que en “todo el mundo” se aprobasen Protocolos como el de Madrid. Incluso si Ossorio entendiese que “todo el mundo” es España, tampoco es cierto. Por supuesto, esto no es cuestión de opiniones. Y el debate es facilísimo de resolver: si Ossorio conoce algún Protocolo como el de Madrid, que lo enseñe.

¿Significa eso que no hubo Protocolos en otras comunidades o que en otros territorios no se impidió de forma masiva el traslado a hospitales?

En otras comunidades, como Cataluña, se aprobaron también Protocolos que suponían una discriminación de las personas mayores. Pero en ningún caso establecieron unos criterios de no derivación hospitalaria como los de Madrid, que afectaban a una buena parte de la población residente.

En cuanto a las personas fallecidas en las propias residencias, Madrid también encabeza esa fúnebre clasificación, con el 77% de los mayores muertos aquellos dos meses sin ser trasladados a un hospital. Un porcentaje que en Cataluña fue del 72% y en Castilla y León del 69%. En Castilla-La Mancha, aunque el Gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) sostiene que no tiene ese dato, el porcentaje también se situó en torno al 70% según apuntan otros indicadores del impacto de la pandemia en las residencias.

Pero esa cifra se situó en el 6% en Canarias, en el 37% en Cantabria y en el 50% en Galicia, de forma que miente quien diga que ocurrió lo mismo “en todo el mundo”.

Segunda falacia: no es verdad que “en todo el mundo” existiese un hospital de emergencia para tratar a los enfermos de covid y que los residentes fuesen excluidos de ese recurso sanitario

Es cierto que, en aquellas fechas, la propia Ayuso acusó de mentir a quien afirmase que los hospitales madrileños estaban colapsados. Pero supongamos que era ella quien mentía y que realmente los hospitales estaban desbordados. ¿Qué sentido tenía llevar a los mayores a un hospital donde tampoco iban a poder recibir un tratamiento?, como preguntan los defensores de la presidenta madrileña.

El problema es que esa pregunta se olvida de lo que el Gobierno regional bautizó como el “hospital milagro”, el centro creado en Ifema con capacidad para tratar a 5.500 personas con covid, según los datos oficiales del equipo de Ayuso.

El hospital de campaña estuvo operativo seis semanas, entre el 21 de marzo y el 30 de abril, y en ese periodo sólo fueron trasladados allí 23 personas que vivían en residencias. Todas ellas tenían síntomas leves. Ifema atendió finalmente a 3.811 personas, así que esos 23 residentes supusieron el 0,6% del total.

Es más, Ayuso decidió cerrar Ifema con el argumento de que los contagios en la región se habían reducido y la presión sobre los hospitales era menor. La realidad es que en los nueve días anteriores al cierre perdieron la vida 960 mayores que vivían en geriátricos de la Comunidad de Madrid.

Es completamente falso que “en todo el mundo” se decidiese no atender en los recursos hospitalarios creados para combatir el virus a las personas mayores de las residencias. En realidad, lo cierto es lo contrario: no se conoce ningún otro ejemplo en el mundo –entendido aquí “mundo” como todo el planeta y no sólo España– donde se crease un hospital de emergencia para tratar a los pacientes enfermos de covid y no se llevase a dicho hospital a los enfermos de covid que más necesitaban el tratamiento para sobrevivir.

Durante el tiempo que estuvo abierto Ifema, murieron en las residencias de Madrid más de 5.000 mayores con covid. Ninguno fue llevado a ese hospital-milagro.

Dos años y medio después de aquellos hechos, el Gobierno de Ayuso aún no ha sido capaz de explicar por qué no se utilizó Ifema para tratar allí a los residentes y por qué se cerró dicho recurso cuando cientos de ellos seguían muriendo cada día.

Tercera falacia: no es verdad que “en todo el mundo” se permitiese el traslado a los hospitales a quienes tenían un seguro privado y se prohibiese a quienes no lo tenían

El sistema ideado por el Gobierno de Ayuso para evitar que las personas mayores que vivían en residencias llegasen a los hospitales se basaba en tres pilares: el Protocolo que establecía los criterios de no derivación, la creación de la figura de los “geriatras de enlace” en los hospitales que eran quienes tenían que autorizar cualquier traslado, y la prohibición de que las ambulancias de la sanidad pública fuesen a recoger a una persona a una residencia si no contaba con el visto bueno previo del geriatra de enlace.

De esa forma, si la directora o el médico de la residencia pretendía saltarse el veto del geriatra de enlace llamando directamente a una ambulancia, fracasaría ya que esta no iba a la residencia.

Pero esas eran las normas para las personas con una tarjeta sanitaria pública. Si el residente contaba con un seguro privado, entonces podía llamar a una ambulancia privada que iría a recogerlo a la residencia y lo trasladaría a un hospital privado.

Es más, con los hospitales privados ocurrió lo mismo que con Ifema. Ni una sola persona fue trasladada desde una residencia a un hospital privado si era usuario de la sanidad pública. Y ello a pesar de que, el 29 de abril de 2020, Ayuso afirmó lo siguiente en la Asamblea de Madrid: “El jueves 12 de marzo mantuve la primera reunión con representantes de la sanidad pública y privada para crear, de manera histórica, un mando único de la sanidad en Madrid, según el cual quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad los 102 hospitales de la comunidad: 34 públicos y 68 privados; es decir, funcionaríamos como un solo hospital, que pasaba a tener 102 sucursales, y así creamos un sistema centralizado de UCI y compras. ¡Esta decisión ha salvado muchas vidas!” [puedes consultar aquí el diario de sesiones].

Puede que ese sistema “histórico” haya salvado muchas vidas, pero desde luego no de quienes vivían en las residencias de Madrid, puesto que ni un solo usuario de la sanidad pública fue trasladado desde una residencia a un hospital privado.

Es falso, de nuevo, que “en todo el mundo” se discriminase a los residentes según su capacidad económica, de forma que quienes tenían un seguro privado si recibían asistencia hospitalaria y quienes no lo tenían se quedaban sin ella. De hecho, al igual que ocurre con Ifema, lo cierto es exactamente lo contrario: no se conoce ningún caso en el mundo de una discriminación similar. Y, por supuesto, también aquí Ossorio tiene fácil resolver el debate: basta con indicar en qué país del planeta o en qué comunidad autónoma de España se implantó un sistema similar.

Cuarta falacia: no es verdad que los 7.291 residentes hubiesen fallecido igual si hubiesen recibido asistencia sanitaria

Ossorio se opone a enviar el "mensaje falso a los familiares" de que "las muertes que sucedieron se pudieron evitar" porque "eso no es cierto".

La primera pregunta es obvia: ¿cómo lo sabe Ossorio? ¿Ha tenido acceso a los expedientes médicos de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias? ¿Tiene poderes adivinatorios para saber qué habría ocurrido con esos 7.291 mayores si hubiesen recibido tratamiento médico adecuado?

Obviamente, nadie podrá saber jamás cuántos se habrían salvado y cuántos habrían fallecido igual. Pero hay dos cuestiones esenciales a tener en cuenta en relación con este tema.

La primera es de pura lógica. ¿De verdad alguien puede afirmar que si un sistema sanitario avanzado como el madrileño hubiese tratado a 7.291 personas, unas con covid y otras no, habrían fallecido las 7.291? ¿Los médicos y enfermeras de la sanidad madrileña no habrían podido salvar la vida ni de una sola de esas personas?

La segunda es que existe ya una prueba clara de lo contrario. Los traslados a los hospitales en Madrid estuvieron paralizados básicamente entre el 16 de marzo y el 5 de abril. infoLibre publicó los datos tanto de fallecimientos diarios de residentes como de derivaciones hospitalarias. Pues bien, en cuanto se recuperan los traslados a partir de la segunda semana de abril, se reducen de forma notable los fallecimientos. Una prueba de que, efectivamente, parte de los pacientes que son trasladados a un hospital salvan la vida.

Quinta falacia: el PP rechazó la comisión al comienzo de la legislatura y la rechaza cuando se acerca el final, de forma que es falso relacionar esa negativa con el calendario electoral. Esta mentira de Ossorio es quizá la más sencilla de desmontar.

La actual legislatura se inició tras las elecciones del 4 de mayo de 2021. Una de las primeras iniciativas de la oposición fue pedir que se reactivase la comisión de investigación sobre las residencias, que estaba funcionando antes del adelanto electoral. El PP y Vox lo rechazaron y enterraron aquella comisión de investigación. Eso ocurrió el 16 de julio, a los pocos días de constituirse la Asamblea de Madrid. Los familiares lo consideraron "una puñalada traperera a las víctimas".

Ahora, Vox plantea crear una comisión de estudio, que tiene un rango y una posibilidad de actuación mucho menor que el de una comisión de investigación. Faltan menos de siete meses para las próximas elecciones autonómicas y el PP también se opone.

Es fácil de entender que si alguien rechaza una comisión justo cuando comienza la legislatura y también cuando esta se aproxima a su fin, el calendario electoral no tiene nada que ver.

Pero, una vez más, hay una salida fácil para Ossorio: que explique en qué momento de la legislatura se puede constituir una comisión sobre lo ocurrido en las residencias sin que sea "electoralismo". Y una vez localizada esa fecha, seguro que no habrá problema para que el Gobierno de Ayuso se comprometa a apoyar la creación de dicha comisión en el día elegido por el propio PP.

Sexta falacia: es falso que los familiares ya hayan "superado" la muerte de sus seres queridos. Esto es una cuestión de Perogrullo: si alguien quiere saber qué opina el señor Ossorio sobre algún tema, lo lógico es preguntarle al señor Ossorio. Pues con los familiares de las víctimas de las residencias ocurre lo mismo. Si Ayuso, Ossorio o cualquier otro miembro del PP de Madrid desea saber lo que opinan, basta con que se pongan en contacto con ellas [aquí se lo explican, por cierto].

En Madrid hay tres asociaciones de familiares de residentes: Pladigmare, Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Ni Ayuso ni ningún otro dirigente del PP madrileño las ha recibido en estos dos años y medio.

Otro hecho que llama notablemente la atención, ¿verdad? Si la gestión ha sido tan excelente, ¿por qué no se lo explican cara a cara a los familiares de las víctimas? ¿Por qué no se reúnen Ayuso y Ossorio con esos familiares para convencerles de que intentar conocer la verdad de lo que ocurrió es “electoralismo”? ¿Por qué no les explican cómo saben ellos que ni una sola de las 7.291 personas se habría salvado en un hospital? ¿Por qué no les cuentan las razones por las que tenían recursos hospitalarios para tratar a los mayores, como Ifema y los centros privados, pero no los pusieron a su disposición? ¿Por qué no les indican los motivos para permitir la derivación de las personas con seguro médico privado y prohibírsela a las demás? ¿Por qué no les hablan de las bondades de no atender en un hospital a un enfermo si va en silla de ruedas o tiene deterioro cognitivo?

El pasado domingo, El Periódico publicó una entrevista con Ayuso y le preguntó sobre este tema. El diálogo fue el siguiente:

- ¿Tiene previsto recibir a las asociaciones de familiares de las víctimas después de dos años?
- La Consejería de Sanidad se reúne con numerosas asociaciones de toda índole.
- Digo usted como presidenta.
- Bueno, dependiendo... No me dejo llevar por la presión ni por el relato político. En este caso lo que hago es atender a muchos ciudadanos que no tienen por qué ir vía asociación y respondo al 100% de ellos, por cierto.

La Consejería de Sanidad quizá se reúna con asociaciones de toda índole, pero desde luego no lo ha hecho ni con Pladigmare, ni con Marea, ni con Verdad y Justicia. Y los familiares de las víctimas de las residencias no merecen ser recibidos porque tienen un “relato político”. ¿Queda ya claro por qué lo de Ossorio no ha sido un desliz?

Es difícil de creer, pero es así: tuvieron alternativas para tratar médicamente a esas 7.291 personas y no las utilizaron. Llevan dos años humillando a los familiares de las víctimas con mentiras como que el Protocolo era “un borrador” que no se llegó a firmar. Y ahora ya se atreven incluso a hablar en su nombre. ¿Qué será lo siguiente?

https://www.infolibre.es/opinion/columnas/barra-libre/seis-falacias-gobierno-ayuso-humillan-victimas-residencias_129_1333808.html

EL GOBIERNO DE AYUSO VUELVE A ELEVAR EL TONO Y CARGA CONTRA SÁNCHEZ POR SU “ODIO CONFESADO A LOS MADRILEÑOS”

“Está claro que Pedro Sánchez ha marcado con rotulador rojo aquellas partes de España que no confían en él”, ha señalado Enrique López

La Comunidad de Madrid ya ha activado toda su maquinaria de cara a 2023 y su doble cita electoral; primero las municipales (previstas para mayo) y luego las generales (diciembre). Por ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido elevar su ya de por sí durísimo tono contra el Ejecutivo central, volviendo a erigir a la región como una suerte de oposición contra todo lo que representa Pedro Sánchez.

En esta ocasión, el Gobierno de Ayuso ha acusado al Ejecutivo central de castigar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la Comunidad de Madrid por su “odio confesado a

los madrileños”, en palabras textuales del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la región, Enrique López.

"Está claro que Pedro Sánchez ha marcado con rotulador rojo aquellas partes de España que no confían en él, que afortunadamente son más. Hemos sido damnificados en el presupuesto, aunque la Comunidad de Madrid sea la primera en PIB y la tercera en población", ha señalado López durante el homenaje a la sastrería Fermín con un azulejo conmemorativo en los bajos del tendido nueve de las Ventas.

En este sentido, el consejero de Ayuso ha vuelto a denunciar un supuesto trato de favor del Gobierno central con Cataluña, señalando que esta región cuenta "con casi un millón menos de habitantes" y que la Comunidad de Madrid "con más PIB recibe un 40% menos".

"Es absolutamente indignante, pero no tanto por la cantidad sino por lo que supone de odio confesado que tiene Pedro Sánchez y su gobierno a los madrileños, no a Ayuso y al gobierno de la Comunidad. Nosotros somos aves de paso, los madrileños siguen aquí", ha sentenciado.

La Comunidad de Madrid, la tercera que más financiación recibe Sin embargo, pese a la denuncia de la Comunidad de Madrid, lo cierto es que la región es la tercera que más dinero va a recibir de los PGE, solamente por detrás de Cataluña y Andalucía, respectivamente. En concreto, la comunidad autónoma recibirá, según lo previsto en las cuentas públicas, 1.305,35 millones de euros en el ejercicio 2023, 153,89 millones de euros más que este 2022 y aproximadamente 55 millones más que en 2021.

De polémica en polémica

Estas polémicas palabras de Enrique López llegan pocos días después de que otro consejero de Ayuso, en este caso el vicepresidente madrileño y titular de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, creara una indignación general en toda la sociedad española después de negarse a impulsar una comisión de investigación sobre las muertes en las residencias durante la primera ola de la pandemia del coronavirus porque "los familiares ya lo han superado".

"Esta comisión solo tiene interés electoral y va a causar un daño a los familiares que podrán pensar '¿Se podría haber evitado?"; señalaba el consejero de Ayuso este miércoles después de que Vox anunciara su intención de impulsar otra investigación sobre cómo viven los mayores en las residencias. "Creo que eso las familias ya lo han superado y volver a esto, por interés electoral, no es precedente", añadía el dirigente popular, desatando una oleada de críticas que continúan todavía, con toda la oposición madrileña pidiendo en bloque la destitución del vicepresidente madrileño.

https://www.elplural.com/politica/espana/gobierno-ayuso-elevar-tono-carga-sanchez-odio-confesado-madrilenos_299107102

NUEVA GUERRA EN EL PP: AYUSO CONTRADICE A FEIJÓO EN EL CASO DE MACHISMO DEL AHUJA

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha negado a condenar los insultos mientras el líder 'popular' ha sido tajante

Isabel Díaz Ayuso tiene su propio argumentario y lo va a defender a capa y espada, aunque con ello contradiga incluso al líder de su partido. Eso es lo que se extrae una vez más a raíz de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid al respecto del escándalo machista del Colegio Mayor Elías Ahuja, que se ha negado a condenar en contra de lo manifestado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y es que mientras este último ha criticado de forma tajante los insultos sexistas proferidos desde la residencia de estudiantes, la lideresa ha mostrado su negativa a denunciar los gritos de "putas" y "ninfómanas".

Discrepancias en el PP

Este jueves, el líder del Partido Popular utilizaba su perfil en las redes sociales para censurar los cánticos machistas y sexistas que dedicaron los estudiantes alojados en el Colegio Mayor Elías Ahuja a las chicas del Santa Mónica, una residencia femenina que se encuentra enfrente. "Lo ocurrido es inadmisibile, en vez de salir ellas de una madriguera lo que tienen que hacer es dejar ellos la caverna", ha asegurado al respecto antes de poner de manifiesto la necesidad de "seguir trabajando en todos los ámbitos para acabar con estas actitudes machistas intolerables".

Una crítica que llegaba desde Génova y que se sumaba de esta forma a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros sectores políticos. Sin embargo, no desde la sede de la Comunidad de Madrid, donde se ha guardado escrupuloso silencio desde que en la tarde de este miércoles saliera a la luz el vídeo del bochornoso momento. Esta ausencia de manifestaciones al respecto se ha roto finalmente este viernes, cuando Ayuso se ha negado a condenar tajantemente los insultos. "Tendríamos que estar a otras cosas que suceden en la universidad", ha defendido.

Ha sido este 7 de octubre en el Circuito Madrid Jarama - Race, donde se ha celebrado la entrega de los Premios Automovilísticos Fundación Eduardo Barreiros 2022, otorgados a los pilotos Ángel Nieto y María de Villota, fallecidos en 2017 y 2013, respectivamente. Una localización que no solo se ha convertido en un escenario político para Ayuso -quien ha aprovechado el acto de forma partidista para atacar a Sánchez- sino también en la sede de una nueva posible guerra dentro de la formación. Y es que la lideresa ha contradicho de forma abierta al presidente popular y ha insistido en varias ocasiones en sus opiniones.

"Me sorprende que la Fiscalía esté para investigar esto mientras en la universidad hemos visto pancartas a favor de los presos de ETA o han escrachado a profesores y a alumnos", ha comenzado a decir ante las preguntas de los medios de comunicación sobre qué le parece lo sucedido en el colegio mayor. "Se ha perseguido a los alumnos de S'ha acabat en Catalunya para que no puedan ir libremente a la facultad y no ha pasado nada", ha añadido.

Se niega a manifestarse como Feijóo

Preguntada en concreto por la condena manifestada por el líder de su formación, Ayuso ha evitado hacer ninguna declaración al respecto y ha insistido en que "tendríamos que estar a otras cosas que suceden en la universidad y parece que no importan". "No es que lo condene es que pasan muchas más cosas todos los días. Estamos politizándolo todo. Ahora el presidente del Gobierno se ha subido el sueldo, los diputados en el Congreso también", ha insistido ante la persistencia de los periodistas allí presentes, como EIPlural.com.

De esta forma, la dirigente regional no solo ha rechazado censurar lo ocurrido en el centro de estudiantes de Madrid, sino que también se ha negado a pronunciarse en la misma línea que su presidente, lo que vuelve a poner de manifiesto la diferencias de criterios entre ambos líderes. Y es que no es la primera vez que Ayuso contradice a Feijóo en temas de gran peso social, ya que ha ocurrido lo mismo con anterioridad con respecto a la ley del aborto o en materia económica con el impuesto a las eléctricas.

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/nueva-guerra-pp-ayuso-contradice-feijoo-caso-machismo-ahuja_299070102

AYUSO SE DESMARCA DEL PP Y NO CONDENA LOS GRITOS MACHISTAS DEL COLEGIO MAYOR DE MADRID

La presidenta de Madrid cuestiona que la Fiscalía investigue la polémica, evita criticar a los alumnos y pone el foco en otros asuntos "gravísimos" de la universidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha desmarcado este viernes de la dirección nacional del PP al evitar condenar los insultos machistas que los alumnos del colegio mayor masculino Elías Ahuja lanzaron a sus vecinas del colegio mayor Santa Mónica el pasado domingo, y que investiga la Fiscalía. Pese a que el líder nacional de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, criticó abiertamente lo ocurrido —"es inadmisibile", dijo—, como el resto de portavoces de la formación, la baronesa madrileña ha evitado reprobar los cánticos de los estudiantes y ha apuntado a otras cosas "gravísimas" que pasan en la universidad.

“Tendríamos que estar a cosas que suceden en la universidad y que parece que nunca importan”, ha dicho Díaz Ayuso tras un acto en el circuito del Jarama. “Condeno que la Fiscalía esté centrada ahora de repente en esto y que, cuando pasan cosas gravísimas en la universidad, en la convivencia, nunca se diga absolutamente nada”, ha añadido. “Me sorprende. ¿Por qué no antes? No es que lo condene [o no], es que pasan muchas cosas más todos los días y estamos politizándolo todo todos los días”, ha seguido. “A mí lo que me sorprende, sobre todo, es que la Fiscalía esté para investigar esto mientras en la universidad, a lo largo de los años, hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos impidiendo conferencias en libertad, o persiguen, por ejemplo, a los alumnos de S’ha acabat para que no puedan ir libremente a su universidad, a la facultad en Cataluña”.

La presidenta autonómica, precisamente, intenta promocionar ahora como nuevo presidente de las Nuevas Generaciones del PP madrileño a Ignacio Dancausa, estudiante de Ciencias Políticas en el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense, cuya asociación, Libertad Sin Ira, ha tenido problemas para organizar encuentros con políticos como la popular Elisa Vigil, diputada en la Asamblea regional. En ese centro universitario nació Podemos.

Además, Ayuso vuelve a recalcar con sus declaraciones su condición de verso suelto en el PP. Es un ejemplo más de su compleja convivencia con Núñez Feijóo. Aunque el PP confía en el efecto multiplicador de sus dos estrategias, que representan al ala moderada y a la más conservadora de la formación, cada poco tiempo protagonizan ejemplos que ilustran sus diferencias: ya se vio cuando discreparon sobre la pertinencia del permiso paterno en el aborto

Díaz Ayuso no solo se ha desmarcado de Núñez Feijóo, o del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida (también del PP) al no condenar con claridad los cánticos. También ha dejado en fuera de juego hasta a su propio consejero de Presidencia, Enrique López, que el jueves criticó “esta expresión del más reprobable y atávico machismo”.

Tampoco ha condenado lo ocurrido la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, de Ciudadanos, que ha asegurado este viernes que los gritos machistas proferidos por un estudiante del colegio mayor Elías Ahuja a las alumnas del Santa Mónica deben solucionarse “con un expediente disciplinario” en el ámbito educativo, y ha insistido en que, en España, “hay problemas mucho más graves” actualmente.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-07/ayuso-se-desmarca-del-pp-y-no-condena-los-gritos-machistas-del-colegio-mayor-de-madrid.html>

AYUSO UTILIZA UN ACTO PRIVADO DE HOMENAJE A DOS DEPORTISTAS FALLECIDOS PARA ATACAR A SÁNCHEZ

La dirigente regional ha aprovechado una entrega de premios a Ángel Nieto y María de Villota para cargar contra el Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no cesa en su empeño de presentarse como "contrapeso" del Gobierno liderado por Pedro Sánchez, sea cual sea el contexto. Tanto es así que este viernes la dirigente regional ha utilizado un evento privado en homenaje a dos deportistas españoles fallecidos para cargar contra el Ejecutivo nacional y su política fiscal.

El Circuito Madrid Jarama - Race ha acogido este 7 de octubre la entrega de los Premios Automovilísticos Fundación Eduardo Barreiros 2022, otorgados a los pilotos de competiciones de automoción Ángel Nieto y María de Villota, fallecidos en 2017 y 2013, respectivamente. Un acto privado de la citada fundación para homenajear a ambos deportistas a la que ha asistido la lideresa como autoridad competente para entregar uno de los galardones. Cabe destacar que a la salida de este encuentro, la lideresa se ha negado a condenar de forma tajante los insultos machistas del Colegio Mayor Elías Ahuja.

Un acto de homenaje para cargar contra Sánchez

En concreto, tras la intervención de miembros de este sector así como de la propia organización y la proyección de vídeos de las dos figuras automovilísticas, Ayuso se ha subido al estrado para hacer entrega del premio a Ángel Nieto a su nieto, que tiene el mismo nombre. Entonces, la presidenta madrileña ha aprovechado esta ocasión para volver a presentarse como adalid del Gobierno de Sánchez, en este caso a raíz de su política fiscal y de impuestos.

"Todos los días estamos viendo la gran diferencia entre el modelo de la Comunidad de Madrid, que es polo de atracción de empleo y de ilusión, y el de aquellos que no dejan de crecer en gasto y en tamaño, lastrando a las próximas generaciones con tremenda deuda y empequeñeciendo la acción privada", ha comenzado diciendo la lideresa, que ha insistido en presumir en varias ocasiones durante su intervención de su política basada en la "libertad".

"En este momento, ahora que conocemos los planes para 2023 en materia de impuestos [en referencia a los Presupuestos Generales del Estado], me veo obligada a reivindicar algo que está sucediendo", ha dicho antes de apuntar a que ella es un "político", lo que parece justificar a su juicio el uso partidista de este acto.

Esto no es un mitin

Ha sido entonces cuando ha cargado directamente contra el Ejecutivo de coalición y los presupuestos. "Este gobierno va a dedicar a Cataluña más del doble de inversión que a Madrid. Tengo curiosidad por saber cómo se lo va a explicar a los españoles este sábado en Getafe", ha señalado, en referencia al acto que va a protagonizar Sánchez este fin de semana en la localidad madrileña. Esto también lo ha vuelto a señalar en declaraciones a los medios al finalizar el encuentro.

Según su opinión, ante esto se contraponen "ejemplos como la Fundación Barreiros", de quien ha dicho "demostrará que el dinero político sin más no sirve, que lo que realmente mueve un país es el esfuerzo, la imaginación de su gente y de personas como vosotros", ha dicho para finalizar a los asistentes, quienes se han arrancado a aplaudir.

Cabe destacar que durante su intervención, algunos de los allí presentes han expresado estar en contra de este uso partidista de la dirigente madrileña. "Esto no es un mitin", ha manifestado un asistente, tal y como ha podido escuchar EIPlural.com allí mismo. Este parecer, la crítica de la utilización del acto de homenaje para atacar al Gobierno y hacer campaña, no ha sido sin embargo secundada por la fundación, que rechaza hacer declaraciones al respecto a este periódico aunque sí niega haber escuchado estos comentarios.

Presume de su modelo de "libertad"

Antes de estas manifestaciones partidistas, la dirigente popular ha vuelto a presumir de su modelo de "libertad" al frente del gobierno regional. Ha asegurado que su administración "no castiga el éxito ni la iniciativa, al contrario". "El Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere facilitar el camino a quien emprende con una fórmula que nunca falla: libertad y más incentivo. Más dinero en el bolsillo de los ciudadanos para poner en marcha sus ideas, sin asfixiarles con impuestos adicionales", ha insistido con vehemencia.

Una afirmación que ha arrancado el aplauso de los asistentes, entre los que se encontraban empresarios del sector, que han interrumpido el discurso de Ayuso. Tras unos segundos, esta ha continuado declarando que Madrid es "la única Comunidad Autónoma de régimen común sin impuestos propios" y ha defendido que "los empresarios se merecen una administración ágil y requisitos más fáciles", algo de lo que ha alardeado permite precisamente su Administración.

Mensaje al feminismo

En cuanto a los galardonados, Ayuso también ha aprovechado para hacer política partidista. De ambos ha considerado que son "figuras de reconocido prestigio en el campo de la automoción" y "ejemplos de tesón y espíritu", aunque ha querido mandar un mensaje con Villota a sus seguidores.

Mientras de Nieto ha dicho que es un caso de "esfuerzo, perseverancia y generosidad", de Villota ha afirmado que ha sido "sonriente, determinada y que llegó a lo más alto". "Una mujer que sí nos representa a otras muchas mujeres", ha dicho en un clara alusión a su visión del feminismo.

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/ayuso-utiliza-homenaje-dos-deportistas-fallecidos-atacar-sanchez_299059102

EL GOBIERNO ARGENTINO LE RESPONDIÓ A DÍAZ AYUSO: “LE RECORDAMOS QUE EL MACRISMO DEJÓ UN PAÍS ENDEUDADO POR 100 AÑOS”

“Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”, había señalado horas antes la presidenta de la Comunidad de Madrid durante un debate de la Asamblea local

La presidenta de la Comunidad de Madrid apuntó contra el peronismo este jueves al criticar la reforma fiscal del gobierno de Pedro Sánchez en España y la portavoz presidencial no dudó en responder con contundencia. “Le recordamos que el macrismo dejó un país endeudado por 100 años”, replicó Gabriela Cerruti esta tarde en conferencia de prensa.

“La presidenta de la capital española se refirió al peronismo después de haberse reunido con Mauricio Macri, con lo cual si la señora (Isabel Díaz) Ayuso cree que es mejor para España tener macrismo que peronismo, nosotros le recordamos que el macrismo dejó a la Argentina con una deuda de USD 40.000 millones, con el país endeudado por los próximos cien años, con un nivel de inflación del 50%, con un desempleo en tasas altísimas”, comentó la portavoz presidencial.

“Sánchez nos va a llevar a la ruina”, había indicado Díaz Ayuso, del conservador Partido Popular (PP), durante un debate en el Pleno de la Asamblea de Madrid. “Y no es el gobierno de las mayorías y mucho menos el gobierno de la gente real. Es el gobierno que primero crea la pobreza para luego crear dependencia del Estado”.

Posteriormente, Díaz Ayuso hizo otra referencia al peronismo en un tuit que compartió junto al video de su intervención: “Me niego a que el peronismo arruine el motor económico de España”, escribió.

“Efectivamente el peronismo no tiene que ver con lo que la señora Ayuso quiere para su país, porque el peronismo defiende los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los que menos tiene y quiere un país donde todos puedan alcanzar su bienestar en base a lo que se proponen y sus talentos, sin que dependa del lugar en el que nacieron”, agregó Cerruti en su réplica.

Luego, la portavoz presidencial apuntó directamente al vínculo que aparentemente registran Díaz Ayuso y el ex mandatario argentino. “Ella tiene una buena relación con Macri, así que entre otras cosas le recordamos que él está siendo investigado porque durante su gobierno muchos de los negocios se dieron para la familia de Macri”, apuntó.

En ese punto, Cerruti también encontró otro punto de contacto entre ambos dirigentes. “Si no entiendo mal, la señora Ayuso está siendo investigada por la Fiscalía Europea porque el negocio de los barbijos en el peor momento de la pandemia en su país lo llevó adelante su hermano”, dijo y remarcó: “Está siendo investigado”.

“Tal vez esta cuestión de dejar todo para los ricos y quedarse con los negocios del Estado para la familia sea algo que tienen en común la señora Ayuso y Mauricio Macri”, completó Cerruti en su respuesta.

A las críticas también se sumó la legisladora Victoria Tolosa Paz: “A la derecha argentina le preocupa mucho el peronismo, lo que no sabía es que le molestaba tanto o más a una derecha española que lamentablemente olvida el gesto humanitario de Juan Domingo Perón, quien no dudó en ayudar al pueblo español en la hambruna de la posguerra”.

“Por eso señora le recomiendo que revise la historia, esa que evidentemente ignora o desprecia, pero que sin duda alguna vive en el considerado y agradecido pueblo español. Modestamente de una peronista a una franquista fascista”, agregó en su cuenta de Twitter.

Este jueves, Díaz Ayuso también advirtió que está dispuesta a recurrir la reforma ante el Tribunal Constitucional al considerarla una subida de impuestos encubierta que viola la autonomía de su

región, calificó el plan de Sánchez de "populismo fiscal". "Le quitan el dinero a la gente para luego, como hacen los peronistas, repartirlo en pagas, ayudas, subsidios", dijo en referencia a las políticas propias, según ella, del principal partido gobernante de Argentina.

Esta tarde, luego de la conferencia de prensa de Cerruti, el Partido Justicialista también emitió su respuesta. "El peronismo fue, es y será sinónimo de la búsqueda permanente de una Argentina con justicia social, independencia económica y soberanía política", señalaron desde este sector a través de la cuenta oficial en Twitter. "Quienes intentan convertir la palabra 'peronismo' en un insulto en realidad atacan esas aspiraciones", completaron.

<https://www.infobae.com/politica/2022/10/06/el-gobierno-le-respondio-a-diaz-ayuso-le-recordamos-que-el-macrismo-dejo-un-pais-endeudado-por-100-anos/>

LA FISCALÍA DA UN GIRO EN LA INVESTIGACIÓN DE MUERTES EN RESIDENCIAS QUE ABRE ALGUNA ESPERANZA EN LAS FAMILIAS

El Ministerio Público exige a los fiscales que escuchen a los familiares en sus diligencias de investigación y que asistan a las declaraciones judiciales de investigados o testigos clave

Las familias consideran que esto "supone un giro de ciento ochenta grados" respecto de la actitud que venía manteniendo la Fiscalía General del Estado

El Ministerio Público mueve ficha en relación con la tragedia vivida en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. Con la polémica por las declaraciones del Gobierno madrileño aún caliente, la Fiscalía General del Estado ha dado orden a los fiscales superiores para que rindan cuentas sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con el fallecimiento de personas en estos centros sociosanitarios y, sobre todo, para que escuchen a las familias. La instrucción insufla un aire de esperanza a todos aquellos que perdieron a un ser querido en los geriátricos de todo el país. Cónyuges o hijos que ven en este movimiento un cambio de actitud. Primero, por el interés a la hora de componer un dibujo exacto de la situación en toda España. Pero, fundamentalmente, por la importancia que se da a los familiares tanto en las pesquisas que se lleven a cabo como en los procedimientos judiciales.

La orden a todo el estamento se dio este jueves a través de un oficio [puedes consultarlo aquí] firmado por el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe. "La trascendencia de los hechos y su resultado, así como el hecho de que los mismos afecten a personas especialmente vulnerables, exigen del Ministerio Fiscal una posición particularmente proactiva en el procedimiento", recoge el documento. Es la segunda vez que el órgano dicta una instrucción relativa a lo sucedido en estos centros en lo que va de año. Ya lo hizo el pasado mes de febrero la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Entonces, el paso se dio después de que Amnistía Internacional denunciase la "deficiente" investigación sobre las muertes de residentes durante los momentos más negros de la pandemia. Ahora, la orden llega con las polémicas declaraciones del vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, como telón de fondo.

Ambos movimientos, sin embargo, presentan diferencias importantes. Primero, en el ámbito de actuación. Delgado únicamente solicitó información relativa a los casos en la Comunidad de Madrid, Barcelona y Ciudad Real, unos datos que el Ministerio Público rechaza facilitar a este periódico alegando que están desactualizados. Pero el actual fiscal general, Álvaro García, quiere una fotografía lo más exacta posible del estado de la cuestión en todo el país. Por eso, ha ordenado que en el plazo de un mes todos los territorios remitan a la Fiscalía General del Estado el "número de diligencias de investigación en tramitación", la cifra de denuncias o querellas interpuestas por el Ministerio Público en lo que va de año –con copia de las mismas– y la cantidad de procedimientos judiciales en tramitación. Información que se deberá actualizar "trimestralmente".

Pero, sobre todo, pretende dar voz a las víctimas y a sus familias. Así, mientras los de Delgado se centraban únicamente en los datos de esos tres territorios, el actual escrito exige a los fiscales superiores que se muevan para garantizar que los familiares "sean oídos en las diligencias de investigación" o que siempre se pida su declaración en los procedimientos judiciales en curso. En su informe de finales de enero, Amnistía Internacional avisaba sobre esta falta de escucha

por parte del Ministerio Público en sus pesquisas. Según sus datos, solo en Madrid y Barcelona se habrían dado carpetazo a las diligencias de investigación de al menos 129 casos sin haber llamado a testificar a familiares. "Dan mucha importancia al hecho de ser escuchadas en la investigación y poder aportar toda la información relevante", resaltaban desde la organización.

El oficio no se queda ahí. También exige que se garantice que los fiscales asistan en las causas judicializadas "a la toma de declaración de los familiares" y de "las personas investigadas", así como "a todas aquellas declaraciones testificales que resulten de relevancia en el proceso". Algo que no ocurre siempre. Ahí está el caso de la residencia Elder, en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real), donde se investigaban presuntos delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro y que fue archivado por el juez al considerar que todo "obedeció a un cúmulo de circunstancias desafortunadas" –carpetazo confirmado luego por la Audiencia Provincial–. Un procedimiento en el que, según desveló infoLibre, la fiscal no planteó ninguna actuación instructora en un año ni acudió a la declaración del único investigado o de dos testigos clave porque "estaba de vacaciones".

"Un giro de ciento ochenta grados"

A Miguel Vázquez, portavoz de la asociación Pladigmare y de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarías de Residencias, le resulta sorprendente que el Ministerio Público tenga que recordar a sus integrantes que deben hacer su trabajo. "Igual es porque no se había hecho hasta ahora", reflexiona. Fuentes fiscales consultadas por este diario, sin embargo, aseguran que este punto no se ha incluido en el oficio porque hayan apreciado que los miembros de la Fiscalía no estén siendo "proactivos" en todo lo que tiene que ver con el fallecimiento de mayores en residencias durante la primera ola de la pandemia. Reconocen haberse enterado por la prensa de algún caso que puede dejar entrever cierta inactividad, pero no creen que sea algo que vaya más allá de un hecho aislado.

Los diferentes colectivos de familiares ven con buenos ojos el movimiento. "Supone un giro de ciento ochenta grados respecto de la actitud que venía manteniendo la Fiscalía General del Estado", apunta Vázquez al otro lado del teléfono. Algo con lo que coincide Mariví Nieto, de Marea de Residencias. La portavoz del colectivo califica como "esperanzador" el oficio, que les lleva a pensar en un "cambio" de rumbo que permita "impulsar" las causas y las investigaciones. Sin embargo, se muestra cauta después de dos años y medio en los que, considera, los fiscales "no han hecho nada". "No han investigado, no han acudido a las testificales, no se han pronunciado en algunos casos a favor de desestimar querellas de las familias. Nos hemos sentido tan abandonados, tan vendidos...", apunta Nieto.

¿Qué pasa con los casos 'cerrados'?

Si todo marcha según lo previsto, el nuevo fiscal general del Estado debería tener sobre la mesa a comienzos de noviembre una fotografía fija de las pesquisas y denuncias o querellas del Ministerio Público, así como de los procedimientos judiciales activos. Desde Amnistía Internacional, sin embargo, se muestran preocupados por el hecho de que solo se soliciten datos relativos a 2022. "Muchas denuncias se archivaron el año pasado y corresponden a los peores momentos de la pandemia", ha aseverado en sus redes sociales la organización, que cree que la iniciativa del Ministerio Público es buena pero "insuficiente". Al ser cuestionadas justamente por este extremo, las fuentes fiscales aseguran que del año anterior tienen "información recopilada". "Es algo que se lleva haciendo desde el principio", resaltan.

Según el artículo 25 del estatuto orgánico de la carrera, los miembros del Ministerio Público deberán poner en conocimiento de su fiscal general aquellos hechos que "deba conocer" dada su "importancia o trascendencia". "Es para que los pueda ver y para que se mantenga un principio de unidad", señalan fuentes fiscales. Ahora bien, tanto los familiares como Amnistía Internacional se preguntan qué va a pasar cuando se haya recopilado la información. En concreto, ponen el acento en aquellas investigaciones a las que se dio carpetazo antes del oficio de García sin ni siquiera hablar con las familias. "Es necesario reexaminar y valorar si algunos casos archivados deben reabrirse", sostiene la organización. "Se deberían reabrir todos", asevera el portavoz de Pladigmare.

Las fuentes fiscales consultadas no cierran a la puerta a la posibilidad de que pueda haber reaperturas. Eso sí, no parece que se vaya a hacer de forma masiva y automática. Es decir, no se van a reabrir los casos solo por el hecho de que no se haya tomado declaración a un hijo o un cónyuge. "Es algo que dependerá de cada una de las fiscalías. Si consideran que hay testigos o allegados importantes con los que no se ha hablado, puede que se reabra el asunto y se tome esa declaración. Pero hay que ir caso a caso, es algo que depende de cada uno de ellos", apuntan las fuentes fiscales pulsadas.

https://www.infolibre.es/politica/fiscalia-da-golpe-timon-investigaciones-muertes-residencias-esperanza-familias_1_1335340.html

AYUSO, SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS DE MADRID: "REABRIR ESTO NO TIENE NINGUNA EXPLICACIÓN"

La presidenta autonómica insiste en la línea de su número dos y acusa a Vox de querer liderar el sector de la izquierda regional

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantiene su negativa a debatir en la Asamblea de Madrid sobre la situación en las residencias de mayores y sobre lo que pasó durante la primera ola de la pandemia, cuando un protocolo de la Consejería de Sanidad negaba atención hospitalaria a los mayores con COVID-19 que vivían en estos centros. "Reabrir esto no tiene ninguna explicación", ha asegurado este viernes la presidenta madrileña, que acusa a VOX de querer ponerse "a la cabeza de la izquierda". El partido ultra ha pedido abrir una comisión de estudio sobre las residencias, pero Ayuso rechaza la idea. De hecho, advierten de que el Partido Popular ni siquiera participará si, finalmente, se aprueba.

"Nosotros vamos a estar en todo momento con las familias, lo hemos hecho siempre desde el primer momento. Reabrir esto no tiene ninguna explicación y, si se ha hecho, es porque ha querido Vox, que quiere ponerse al frente de la izquierda en algo que no tiene sentido alguno. Si sigue adelante esa comisión en la Asamblea van a estar solos porque el Partido Popular no va a participar de nada de esto", ha declarado la presidenta regional.

La líder autonómica mantiene la misma postura que su número dos, Enrique Ossorio. El vicepresidente del Ejecutivo regional aseguraba el pasado miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que proceder con una investigación sobre lo ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid sería abrir un dolor innecesario para las familias. "Ya lo han superado", comentaba entonces.

La polémica acerca de la reapertura de una investigación ha surgido de nuevo esta semana después de que la ultraderecha haya solicitado la creación de una comisión de estudio. Sin embargo, la izquierda de la Asamblea de Madrid ha pedido en reiteradas ocasiones que se investigue lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia en reiteradas ocasiones.

Las formaciones de la oposición en la Asamblea de Madrid criticaron este jueves la postura del Partido Popular (PP), que se ha negado en rotundo a esclarecer lo sucedido en estos centros durante la primera ola de la pandemia.

"Respeto, verdad y justicia", reclamaba este jueves la coportavoz de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto. Pero no fue la única crítica con el Ejecutivo regional. El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, también recriminó la actitud de Ossorio en los últimos días. "Que pida disculpas, que pida perdón y que se vaya", dijo.

Más Madrid también pidió la dimisión del número dos de Ayuso tras sus palabras acerca de los familiares de las residencias. La formación, junto con el PSOE, solicitaron la reprobación del vicepresidente regional, aunque sin éxito.

"Sigo sin poder dormir"

Las palabras de los máximos dirigentes regionales no han sentado bien entre los familiares de los fallecidos. De hecho, varias personas cuyos seres queridos perdieron la vida en las residencias de mayores han criticado duramente la actitud de bloqueo del Ejecutivo regional.

María Jesús Valero, que perdió a su madre durante los momentos más duros de la pandemia, aseguraba esta semana que todavía mantiene vivo el doloroso recuerdo de aquellos momentos. "Yo sigo despertándome por la noche dos años y medio después pensando cómo murió mi padre. Si pensaría que sus hijas le abandonaron. Si sufrió o si de verdad le pusieron paliativos", aseguraba.

De hecho, Valero recriminaba las palabras de Ossorio, al que criticaba por su osadía al asegurar que los familiares han superado las muertes de sus seres queridos. "Es imposible que él pueda saberlo porque jamás se ha reunido con los familiares. Este Gobierno de Ayuso jamás nos ha pedido una reunión para hablar o calmarnos en nuestro dolor. Cómo es posible que este señor diga que ya hemos olvidado y superado las muertes de nuestros seres queridos", decía.

Carmen López también perdió a su madre en aquellos primeras semanas en las que el virus entró en las residencias. "Por supuesto que no lo he superado ni lo superaré mientras que no haya justicia. Al abrir el teléfono tengo la fotografía de mi madre y no quiero olvidarlo", dice con firmeza mientras recuerda que "en ningún momento se han interesado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid por cómo nos sentimos o qué pensamos acerca de lo que sucedió después de los protocolos de la vergüenza". El único contacto que tuvieron fue una vez con la Consejería de Políticas Sociales que entonces dirigía Alberto Reyero, el consejero que terminó abandonando el Ejecutivo de Ayuso y muy crítico con la gestión que había hecho el Gobierno regional en las residencias.

<https://cadenaser.com/cmadrid/2022/10/07/ayuso-sobre-la-investigacion-de-las-muertes-en-las-residencias-de-madrid-reabrir-esto-no-tiene-ninguna-explicacion-radio-madrid/>

OSSORIO NO RECTIFICA: INSISTE EN QUE "NO TIENE SENTIDO" INVESTIGAR LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS Y ACUSA A LA IZQUIERDA DE "HACER DAÑO A LOS FAMILIARES"

En un pleno muy tenso en la Asamblea de Madrid, el vicepresidente regional, Enrique Ossorio, ha decidido no pedir perdón por sus polémicas palabras y ha cargado contra la "izquierda miserable": "Me quieren encasquetar a mí su falta de humildad"

Este miércoles, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, pronunció unas polémicas palabras en las que afirmaba que los familiares de las víctimas en las residencias durante la primera ola de la pandemia "ya lo han superado". Como era de esperar, estas declaraciones han sido el asunto que ha monopolizado el pleno en la Asamblea de Madrid de este jueves.

Por un lado, Más Madrid, PSOE, y Unidas Podemos han pedido su cese inmediato a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha descartado esta opción. Además, Vox, socio de Gobierno del PP, ha impulsado una comisión de estudio sobre las residencias, lo que ha provocado tensiones entre ambas formaciones.

Durante el pleno, Ossorio ha tildado de "miserable" a la izquierda por "hacer daño a los familiares por sus intereses políticos". "Me quieren encasquetar a mí su falta de humildad", ha expresado el vicepresidente, y ha añadido que está "harto" de que cambien lo que dice "para hacer política cutre".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, Ossorio cargó contra Vox y la izquierda por pretender causar "un daño innecesario" a las familias al querer impulsar una comisión para investigar las muertes en las residencias durante la primera ola, porque volverán a pensar que se podrían haber evitado cuando "ya lo han superado".

Además, el vicepresidente señaló que la propuesta de Vox de creación de la comisión de estudio de las residencias "no tiene sentido" porque supone mandar el "mensaje falso a los familiares" de que "las muertes que sucedieron se pudieron evitar y eso no es cierto".

La oposición en bloque carga contra Ossorio y Vox asegura que "rectificó"

"Respeto, verdad y justicia", ha pedido la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, mientras que el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha exigido a Ossorio que "pida disculpas, que pida perdón y que se vaya".

"A su mandato no le queda ni una pizca de vergüenza ni una pizca de dignidad", ha aseverado por su parte la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que ha tildado las declaraciones de Ossorio de "miserables". Con gritos de "dimisión" se ha dirigido la bancada de la izquierda al vicepresidente, por cuyas palabras el PSOE ha avisado que no participará en ninguna iniciativa en la que esté presente en lo que resta de legislatura, porque consideran que "no está habilitado" para estar en su cargo.

Frente al rechazo de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, los diputados del PP y miembros del Ejecutivo autonómico han mostrado su respaldo a Ossorio en el pleno, en el que la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballido, ha tenido que llamar al orden a diputados de la izquierda por los murmullos durante la intervención del vicepresidente.

También Vox ha apoyado a Ossorio, de quien no pedirán su reprobación, como sí lo harán PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, porque, según Monasterio, ya "rectificó" el miércoles y matizó sus palabras cuando dijo que "evidentemente la muerte de un ser querido nunca se supera, pero sí se ha superado la mentira de la izquierda, sin escrúpulos, que afirmó que se pudo haber evitado".

Los reproches a Ossorio han sido constantes a lo largo del debate, con acusaciones de "sinvergüenza", "canalla" y "deleznable" por parte del diputado de Más Madrid Emilio Delgado, o de la diputada de Unidas Podemos Paloma García, que ha afirmado que "el único legado que va a dejar su Gobierno" va a ser dejar morir "encerrados" a los mayores en las residencias.

El PP acusa a Vox de ponerse "a la cabeza de la izquierda"

La decisión de Vox de activar la comisión de estudio sobre residencias, que se votará en el próximo pleno del 13 de octubre, ha indignado a la presidenta madrileña, que ha acusado al partido de Rocío Monasterio de "ponerse a la cabeza de la izquierda y de 'ir de la mano otra vez' con los que le tildan de 'ultraderecha'".

Una maniobra de Vox que, previsiblemente, dificultara las negociaciones de los presupuestos de 2023 con su socio preferente. "Me llama especialmente la atención que Vox sea el mejor aliado de la izquierda en esta Cámara", ha aseverado Ayuso, que ha apuntado que la intención de la izquierda es "retorcer el dolor de las familias" y lo harán "gracias a Vox".

"En esta vida hay que tener principios", ha dicho Ayuso a Monasterio. Sobre su voluntad impulsar una comisión de estudio sobre residencias, la portavoz de Vox ha asegurado que su obligación es "mejorar la vida de nuestros mayores en los próximos años" y le ha dicho a la presidenta que "no se escandalice y trabajemos juntos".

Y ha añadido, en declaraciones posteriores a los medios, que Vox rechaza "la comisión del rencor" de la izquierda y apuesta por trabajar en un nuevo modelo y una nueva ley de residencias en una comisión de estudio, como aseguran que, en su momento, apoyaba el PP.

<https://cadenaser.com/nacional/2022/10/06/ossorio-no-rectifica-insiste-en-que-no-tiene-sentido-investigar-las-muertes-en-las-residencias-y-acusa-a-la-izquierda-de-hacer-dano-a-los-familiares-cadena-ser/>

"NO LO SUPERAREMOS HASTA QUE HAYA JUSTICIA": LA RÉPLICA DE FAMILIARES DE FALLECIDOS AL 'NÚMERO DOS' DE AYUSO

Enrique Ossorio ha afirmado este miércoles que las familias de los mayores fallecidos en las residencias durante la primera ola de la pandemia "ya lo han superado"

"¿A cuántos familiares de los más de 8.000 mayores que murieron les ha preguntado él?", se pregunta Miguel Vázquez, presidente de Pladigmar

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha afirmado este miércoles que las familias de los mayores fallecidos en las residencias durante la primera ola de la pandemia "ya lo han superado". "Él no puede hablar de algo que él no ha sentido ni ha vivido", responde Carmen Martín, de Marea de Residencias, en conversación con infoLibre, al tiempo que también señala que los familiares lo "no lo superaremos hasta que haya justicia": "No queremos revancha, queremos justicia". En la misma línea se pronuncia Javier Cordón, miembro de la plataforma Verdad y Justicia para las residencias de Madrid: "Hay que tener bastante poca vergüenza para decir esto". "¿A cuántos familiares de los más de 8.000 mayores que murieron les ha preguntado él?", se pregunta Miguel Vázquez, presidente de Pladigmar, que califica estas declaraciones de "indignantes" y de "gente sin escrúpulos".

En la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso fue, con diferencia, donde más residentes fallecieron sin atención hospitalaria: 7.291 personas, lo que supone el 77,0% del total, que fueron 9.470 mayores. A pesar de estas cifras, el número dos del Ejecutivo madrileño ha asegurado que la comisión de estudio para abordar las necesidades sociosanitarias en las residencias de mayores y de discapacitados que ha activado Vox para el pleno de este jueves responde a un "interés electoral". "Va a causar un daño innecesario a los familiares que podrán volver a pensar '¿se podría haber evitado?'. Las familias ya lo han superado y volver a esto, por interés electoral, sinceramente, no es procedente", ha explicado Ossorio.

No obstante, los familiares de los fallecidos en las residencias de mayores no opinan lo mismo. "Quieren enterrar a los muertos dos veces, cuando fallecieron y ahora. Los familiares no han pasado página y quieren respuestas", reconoce Miguel Vázquez. "Quien no es víctima, no lo sabe. No conozco a ninguno que haya superado el dolor", matiza Javier Cordón, que insiste que el proceso de duelo se le suma no tener el reconocimiento de víctima y "el Gobierno es culpable de esto" ya que "nunca ha pedido perdón, ni ha recibido a las víctimas".

"No quieren que se conozca la verdad"

Preguntado por esta comisión de estudio, que no saldrá adelante por la oposición del PP que cuenta con mayoría en la Asamblea, Ossorio ha querido destacar que para él lo "raro" a estas alturas es que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la de Vox, Rocío Monasterio, coincidan "en esta actuación". El PP tumbó el lunes una iniciativa de Más Madrid en este sentido aprovechando que controla la Mesa del Parlamento. 24 horas después, Vox aprovechó para activar un proyecto similar que tramitó en noviembre de 2021, aunque no la puso en marcha. Ahora, con el debate de nuevo acaparando titulares por la presentación del libro escrito por el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, la ha activado para el pleno de este jueves, según la líder de ultraderecha, porque tienen "la obligación moral de construir un sistema de residencias que garantice a nuestros mayores estar tranquilos y bien cuidados".

"No quieren que se conozca la verdad", afirma Javier Cordón, preguntado ante la negativa del PP de investigar las muertes en residencias. Para Carmen Martín, "lo único que quieren es tapar su gestión y taparlo con el tiempo. Y a nosotros no nos van a callar hasta que consigamos justicia, aunque tengamos que ir a Europa". "Hay cosas que chirrían mucho. El propio sentido común indica que habría que investigar qué pasó para que no vuelva a suceder", sostiene Miguel Vázquez.

"No era un borrador y la prueba está en el número muertos"

Según ha explicado Ossorio, este tipo de iniciativas mandan el "mensaje falso" a los familiares de que las muertes que tuvieron lugar durante la pandemia se pudieron evitar. La Comunidad de Madrid vuelve a obviar así de nuevo los protocolos ejecutados en marzo de 2020 que impidieron en la primera ola de la pandemia la derivación de muchos residentes, con o sin covid, a los hospitales.

"No era un borrador y la prueba está en el número muertos. Suplicamos que los llevaran al médico y nos decían que no, que los iban a ayudar a morir", afirma Carmen Martín, que insiste en que desde Marea de Residencias ya no piden una reunión con el Gobierno de Ayuso sino con "la Fiscalía" para que se investigue. "Creo que la última palabra la tienen que tener los tribunales",

coincide Vázquez. El protocolo, tal y como desveló infoLibre, no sólo se aprobó sino que se ejecutó de forma sistemática —aquí puedes consultar el dossier con nuestra investigación—.

"Es una vergüenza tener a una persona así en representación de Madrid"

Asimismo, Ossorio también ha insistido en la culpabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de las residencias y le ha reprochado que no tomasen "medidas rápidas". "Con esta negativa tan persistente de no investigar existe la sospecha de que algo quieren ocultar y más cuando llevan diciendo todo este tiempo que el responsable es Pablo Iglesias", recuerda Javier Córdón.

"Este hombre es miembro de un gobierno negacionista y él es especialmente negacionista", afirma este miembro de la plataforma Verdad y Justicia de que recuerda que el también consejero de Educación negó que hubiese pobres en la región: "Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres pues... ¿por dónde estarán?". "Es una vergüenza tener a una persona así en representación de la Comunidad de Madrid", insiste Córdón.

"Hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más"

Las reacciones políticas a estas declaraciones no se han hecho esperar. Desde Más Madrid han pedido la dimisión de Ossorio. En concreto, el partido ha registrado una Proposición No de Ley para exigir su reprobación en Pleno. "Estas declaraciones son una vergüenza para Madrid. Exigimos su dimisión o cese inmediato, hay 7.291 razones para que no siga en su puesto ni un día más", ha asegurado la formación en Twitter.

Desde el PSOE, también han anunciado que pedirán ante la Asamblea de Madrid la reprobación de Ossorio. El secretario general de los socialistas madrileños portavoz en la Asamblea, Juan Lobato, ha reclamado a Ayuso que Ossorio "no debe seguir ni un minuto más" en el cargo, según recoge el PSOE en un comunicado. "Declaraciones como las que hemos oído hoy demuestran y explican decisiones como las que se tomaron en la pandemia", ha declarado al tiempo que ha afirmado que "los únicos que no ponen por encima de todo el respeto a las personas mayores es el PP de la Comunidad de Madrid".

Por su parte, las portavoces de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto y Carolina Alonso han afeado en Twitter sus palabras a Ossorio. "El problema del señor Ossorio es, una vez más, negar la evidencia", ha escrito Jacinto, mientras que Alonso ha afirmado que "Ayuso y sus secuaces no es que hayan superado sus muertes, es que nunca las sufrieron, por eso no quieren la comisión".

https://www.infolibre.es/politica/familiares-muertos-residencias-responden-numero-ayuso-no-superaremos-haya-justicia_1_1333704.html

LA IZQUIERDA EXIGE LA DIMISIÓN DE OSSORIO, QUE SE NIEGA A RECTIFICAR SUS PALABRAS SOBRE LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS, Y AYUSO CULPA A VOX

Bronca en la Asamblea tras decir el número dos del Gobierno que las familias de los residentes fallecidos en la primera ola de la pandemia "ya lo han superado" para oponerse a una comisión de estudio impulsada por la extrema derecha

Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, sonríe y mira cómplice a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, cada vez que un portavoz de la oposición pide su dimisión en el pleno de este jueves en la Asamblea regional. Menos de 24 horas después de que el número dos del Ejecutivo dijera en rueda de prensa que las familias de los miles de ancianos muertos en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia "ya lo han superado", sus rivales le enseñan la puerta de salida una y otra vez. Le pide que se vaya Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos: "Respeto, verdad y justicia", reclama. En ello insiste Juan Lobato, del PSOE: "Dígale a su vicepresidente que pida disculpas y abandone el gobierno de Madrid", le reclama a Ayuso. Y lo mismo exige Mónica García, de Más Madrid: "Cese a su vicepresidente por esas declaraciones miserables". Entonces toma la palabra Ossorio. Y se desata la tormenta. Donde pudo haber una rectificación, hay un ataque. Donde pudo haber una disculpa, hay una queja. Donde pudo haber un paso atrás, hay dos adelante. Es Ossorio provocando un incendio en el pleno, mientras los diputados del PSOE abandonan sus escaños

y los de Más Madrid golpean la madera de sus mesas y estallan en un coro: “¡Dimisión! ¡dimisión!”.

“Me quieren encasquetar a mí su falta de humanidad”, reta Ossorio, con una sonrisa irónica siempre colgada de la cara que observan algunos familiares de los fallecidos desde la tribuna de invitados. “Mis declaraciones están en la web y están transcritas. A ellas me remito”, sigue, negando la evidencia, porque no hay ninguna diferencia, o matiz, entre lo que dijo y lo que transcribieron los medios de comunicación. “Estoy harto de que cambien lo que digo para hacer política cutre. La falta de dignidad tendría que tener un límite incluso para sus señorías”.

Y se desata el caos. Los diputados de la izquierda se revuelven. Alejandro Sánchez, representante de Equo integrado en Más Madrid, abandona el hemiciclo con el rostro desenchajado, tras recibir dos advertencias de la presidenta de la Cámara, María Eugenia Carballo (PP). Esta intenta coger las riendas de la sesión, que para entonces es como un caballo indomable y encabritado, tan encendidos están los ánimos.

“Esto es inadmisibile”, interviene ante las protestas de la oposición. “Es una vergüenza para el pueblo de Madrid, al que representamos”, sigue mientras retumban los golpes de los diputados de Más Madrid contra sus mesas. “Dejen de usar la violencia en el pleno. Escuchen al señor vicepresidente”.

Pero cuesta que las cosas vuelvan a la calma. La indignación entre la izquierda es absoluta. Son más de 5.000 ancianos muertos en residencias durante lo peor de la pandemia. Son los protocolos de triaje impuestos por el Gobierno regional, que impidieron la entrada de los residentes en los hospitales para salvar la vida o al menos paliar su sufrimiento. Y un Gobierno que ha pasado de no querer depurar responsabilidades en una comisión de investigación a dar el asunto por superado para unos afectados que aún penan las heridas abiertas por ni siquiera haber podido despedirse de sus mayores. Justo en los mismos días en los que el exconsejero Alberto Reyero (Cs) relata en un libro la frialdad con la que sus compañeros del PP vivieron, a su juicio, aquel drama, las palabras de Ossorio reavivan un fuego nunca apagado.

“¡Esto es inadmisibile!”, se escucha en el pleno, mientras algún diputado hace gestos imitando el vómito como reacción a las palabras de Ossorio. “¡Usted no sabe un carajo!”, le dice Emilio Delgado (Más Madrid) al vicepresidente. “¿Cree que es normal que se escude en las familias a las que ningunea? Es usted un canalla (...) Son pobres en honestidad, decencia, coraje, empatía y sentido común”, estalla. “Si tuviera algo de esto, dimitiría”.

A esa exigencia se une luego, a través de un comunicado, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuaris de Residencias: “Sus declaraciones ninguneando a las familias de las 6.891 víctimas en su comunidad hablan de un malandrín, de una mala persona, no todo tiene cabida en la democracia, por ética, e incluso por estética también”.

El PSOE, mientras tanto, anuncia que sus diputados se irán del pleno cada vez que intervenga Ossorio, insta a todos los grupos a crear una comisión de investigación sobre lo que ocurrió en las residencias, y mantiene, como Más Madrid, su iniciativa para reprobar al vicepresidente autonómico por sus palabras.

Cuando pasa la tormenta, interviene Jaime de Berenguer (Vox), y afea a la izquierda su comportamiento. Es el único momento de complicidad entre el PP y su socio de la extrema derecha. Los dos partidos afrontan la negociación de los Presupuestos en un ambiente más que enrarecido. El PP ha visto como una traición que Vox activara el martes la comisión de estudio sobre las residencias, que tenía guardado en un cajón desde noviembre de 2021. Este partido, por su parte, considera que el PP ha dado orden de atacarlo a sus afines en los medios de comunicación. Y por si faltara leña para ese fuego que crece y crece, Rocío Monasterio, la portavoz de la extrema derecha en la Cámara, y Ayuso, se enzarzan durante el pleno.

“¿Qué ocurre?”, le pregunta Monasterio a Ayuso. “¿Es que cree que no es nuestra obligación mejorar la vida de nuestros mayores?”, insiste, para subrayar que el órgano que impulsa no es de investigación (para dirimir responsabilidades políticas por las miles de muertes en residencias durante la pandemia), sino de estudio (para proponer mejoras en el sistema). “Nos ha atacado

desde sus terminales mediáticos”, acusa. “Nosotros votamos en contra de una comisión revanchista de la izquierda”, recuerda. Y remata, mirando a Ayuso: “No se sienta usted atacada (...) Ustedes hablan del pasado, nosotros de ir de juntos a mejorar el futuro de nuestros mayores”.

Esas palabras ofrecen a Ayuso dos opciones dialécticas: choque o diplomacia. Pero el día no está para sutilezas, ni parece pedirle el cuerpo tender la mano al partido con el que negocia los presupuestos regionales. Es una Ayuso enfadada, y autoritaria, pues reclama a Vox que rectifique, diciendo, sin decirlo, que retire la iniciativa para formar la comisión. No es de extrañar: en la primavera de 2021, Vox anunció su apoyo a una comisión de investigación, la presidenta les acusó de echarse en brazos de la izquierda, y Monasterio acabó dando marcha atrás. Un precedente que está ahora en mente de todos.

“Me llama la atención que Vox sea el mejor aliado de la izquierda en esta Cámara”, afea la presidenta. “Usted no tiene poder, fuerza política ninguna, para frenar a los subvencionados, las plataformas afines, que vayan a esa comisión”, argumenta. “La pretensión de la izquierda es retorcer el dolor de las familias, y ahora lo podrán conseguir en la Cámara, gracias a Vox”, insiste. “Es insensato lo que hacen”, opina. Y remata: “Es otra comisión más contra mí. Esta gente les llama ultraderecha, querría ilegalizarles. Hay que tener principios. Se tienen que replantear esa comisión”.

Ossorio escucha todo eso atentamente. Este es un hombre clave en el organigrama de Ayuso. En el Gobierno, coordina la acción política. En el PP, el programa electoral de 2023. Aunque el número dos del Ejecutivo pisa por segunda vez el charco de la polémica —“¿Por dónde estarán [los pobres]?”, dijo para cuestionar un informe sobre la exclusión y la pobreza en la región—, eso cimienta su posición interna frente a las peticiones de dimisión. Su intervención es recibida con una ovación cerrada por la bancada del PP. Uno tras otro, los consejeros anuncian a los cuatro vientos su apoyo al vicepresidente. Pero Ayuso se marcha rápido del hemiciclo, igual que quien huye de un incendio, y sin dejar ninguna palabra sobre su número dos.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-06/la-izquierda-exige-la-dimision-de-ossorio-que-se-niega-a-rectificar-sus-palabras-sobre-las-muertes-en-las-residencias-y-ayuso-culpa-a-vox.html>

EL PP SE PLANTEA RENUNCIAR A PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DE LAS RESIDENCIAS DE MADRID Y DEJAR A VOX SOLO CON LA IZQUIERDA

El partido de Ayuso se inclina por ausentarse del órgano para mostrar su rechazo si sale adelante en el pleno del jueves 13

El PP se inclina por no participar en la comisión de estudio sobre las residencias que patrocina Vox en la Asamblea de Madrid, y que saldrá adelante el próximo jueves 13 si recibe el apoyo de Más Madrid, PSOE y Podemos. Así lo avanza a EL PAÍS una fuente que cuenta con toda la confianza de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. De tomarse, la decisión, que aún no ha sido discutida por el grupo parlamentario, según un segundo interlocutor (“Ni lo hemos hablado”, advirtió) tendría un triple objetivo. Primero, reflejar el inmenso enfado de los conservadores con sus socios de la extrema derecha. Segundo, atraer a sus votantes de cara a los comicios de 2023 al mostrar a Vox en alianza con la izquierda. Y tercero, recuperar el control de una polémica que está desgastando al máximo la figura del vicepresidente Enrique Ossorio, cuya dimisión exige la oposición de izquierdas por haber dicho en una rueda de prensa que los familiares de los miles de ancianos muertos en las residencias regionales durante la primera ola de la covid “ya lo han superado”.

“Vox queda en manos de la izquierda”, resume la intención del PP una fuente gubernamental. “El PP no participará en la comisión de residencias”, insiste. “Esto significa que solo los testigos de la izquierda entrarán en la Asamblea de Madrid”, añade sobre los posibles comparecientes en el órgano. “Vox, líder de la izquierda hasta marzo de 2023”, remata, vinculando la decisión de la extrema derecha, que ha activado ahora una comisión que tenía congelada desde noviembre de 2011, con un intento de desgastar a Díaz Ayuso de cara a las elecciones de mayo del año que viene.

Las muertes en estos centros se empezaron a investigar la pasada legislatura, cuando el PP estaba en minoría y dependía de Ciudadanos. Rota la coalición de gobierno, y con Ayuso en un momento dulce tras las elecciones del 4-M, Vox se mostró dispuesto a reanudar los trabajos de investigación en la actual legislatura. Nunca ocurrió. Ayuso intervino en público para acusar a Monasterio de echarse en brazos de la izquierda. Esta rectificó. Y todo ha seguido igual hasta ahora, cuando Vox ha asombrado al PP al facilitar que la izquierda logre la comisión de estudio que persigue desde hace tiempo: se aprobará si la extrema derecha, Más Madrid, el PSOE y Podemos, unen sus votos en el pleno del jueves 13.

La Comunidad de Madrid fue la única que dejó por escrito los polémicos protocolos de triaje de marzo de 2020, que impidieron que miles de ancianos enfermos de las residencias fueran atendidos en los hospitales. En los centros murieron más de 5.000. Pese a que la comisión propuesta por Vox no se centraría en depurar responsabilidades políticas sobre ese pasado, sino en ofrecer mejoras en el sistema residencial de cara al futuro, el PP ha visto una oportunidad política en la apuesta por ausentarse del órgano.

Primero, porque sus dirigentes observan que la comisión tendrá poco contenido, y recorrido, pase lo que pase, ya que apenas tendrá tiempo de reunirse antes de que se disuelva la Cámara por las elecciones de 2023. Y segundo, porque ahí ven los estrategas del PP un resquicio por el que aupar a Díaz Ayuso hasta la mayoría absoluta: si ese tramo de la escalera se tiene que subir a costa de captar votantes de Vox, la comisión, piensan en el PP, es el mejor impulso, pues mostrará juntos a la extrema derecha y a la izquierda de Más Madrid, PSOE y Podemos.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-06/el-pp-se-plantea-renunciar-a-participar-en-la-comision-de-las-residencias-de-madrid-y-dejar-a-vox-solo-con-la-izquierda.html>

VOX SORPRENDE AL PP Y OFRECE A LA IZQUIERDA UNA COMISIÓN SOBRE LAS RESIDENCIAS EN LA ASAMBLEA DE MADRID

Tras ver cómo el partido de Ayuso bloqueaba una iniciativa de Más Madrid, los ultras llevan al pleno del jueves 13 una iniciativa que ya tenían tramitada desde 2021

Vox ha provocado este martes un tremendo enfado en el PP de Isabel Díaz Ayuso al facilitar que la izquierda pueda formar una comisión de estudio sobre las residencias de la región en la Asamblea de Madrid. “Nos sorprende y nos entristece, porque Vox se ha sumado a la estrategia de la ultraizquierda”, ha dicho Pedro Muñoz Abrines, el portavoz del grupo parlamentario del PP, que hasta ahora había usado su mayoría en la Cámara para bloquear cualquier intento de investigar las más de 5.000 muertes en estos centros durante lo peor de la pandemia, y cualquier opción de analizar cuáles son los déficits del sistema. De hecho, el PP aprovechó que controla la Mesa del Parlamento para impedir el lunes que Más Madrid activara una iniciativa similar a la que se votará este jueves 13 en el pleno, lo que ocurrirá gracias a Vox, que la tramitó en noviembre de 2021 y luego la guardó en un cajón, sin ponerla en marcha. Hasta ahora.

“Nuestra postura es que hemos activado la comisión de residencias y que se va a votar en el próximo pleno”, ha dicho la portavoz de la extrema derecha en la Asamblea, Rocío Monasterio. “Entiendo que van a votar a favor [los partidos de izquierdas], porque es muy importante”, ha añadido. “Tenemos la obligación moral de mejorar la situación de nuestros mayores, construir un sistema que les garantice que pueden estar tranquilos, bien cuidados”, ha seguido. “Cuento con que nos van a apoyar, porque sería de un cinismo espectacular que no nos apoyaran”.

“Lo que ha hecho Vox nos sorprende y nos entristece, porque se ha sumado a la estrategia de la ultraizquierda, hacerle el juego a Mónica García, y darle publicidad a la venta y promoción de un libro”, ha contrapuesto Muñoz Abrines. Se refería a Morirán de forma indigna (Libros del KO), escrito por Alberto Reyero, que fuera consejero de Políticas Sociales con Ciudadanos, y en el que describe las evasivas y la frialdad del bando popular en el Gobierno de Ayuso ante las muertes en los centros de mayores. “¿Qué análisis serio podrá hacer una comisión que en el mejor de los casos podrá reunirse en tres meses? ¿Alguien piensa que esto es restañar la dignidad de las familias?”, se ha preguntado, ya que la Asamblea se disolverá el próximo marzo para que se celebren las elecciones. “Es todo lo contrario: les están tomando el pelo”.

El choque entre PP y Vox llega en un momento doblemente clave. Por un lado, los dos partidos empezarán en los próximos días a negociar los presupuestos del año que viene: tarde lo que tarde la negociación, las dos partes han expresado su interés por que llegue a buen puerto. Del otro, las elecciones de mayo de 2023 azuzan los conflictos entre las dos formaciones: ambas lucharán en unos pocos meses por seducir a la misma bolsa de votantes.

Pocas cosas reflejan mejor esa tensión de intereses contrapuestos, que acerca y aleja al mismo tiempo, que la polémica que rodea desde 2020 a las residencias regionales. Las muertes en estos centros se empezaron a investigar la pasada legislatura, cuando el PP estaba en minoría y dependía de Ciudadanos. Rota la coalición de gobierno, y con Ayuso en un momento dulce tras las elecciones del 4-M, Vox se mostró dispuesto a reanudar los trabajos de investigación en la actual legislatura. Nunca ocurrió.

Ayuso intervino en público para acusar a Monasterio de echarse en brazos de la izquierda. Esta rectificó. Hasta ahora, aunque con un importante matiz: la comisión anterior era de investigación, por lo que se centraba en aclarar las responsabilidades en las muertes en las residencias, mientras que esta será de estudio, con lo que se limitará a estudiar mejoras en el sistema.

Si Vox recaba el apoyo de Más Madrid, PSOE y Podemos en la votación de este jueves 13, tendrá los votos necesarios para que la comisión vea la luz. Aunque lo previsible es que los cuatro partidos se alíen, ni el de Mónica García ni el de Juan Lobato habrían aclarado su posición en el momento de publicación de este artículo. Sí lo ha hecho el de Alejandra Jacinto, que apoyará la comisión, aunque hubiera preferido que fuera de investigación.

“Vamos a apoyar todo lo que sea para mejorar las condiciones de las residencias”, han explicado en Podemos. “Pero su comisión se queda corta porque quieren hacer un estudio de lo que sucede actualmente, pero dejar sin investigar la gestión de Ayuso en las residencias durante el covid”.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-04/vox-sorprende-al-pp-y-ofrece-a-la-izquierda-una-comision-sobre-las-residencias-en-la-asamblea-de-madrid.html>

EL ‘NÚMERO DOS’ DE AYUSO SOBRE LAS MUERTES EN LAS RESIDENCIAS DURANTE LA PANDEMIA: “LAS FAMILIAS YA LO HAN SUPERADO”

Los hijos de los fallecidos durante el tapón sanitario de 2020 responden con una mezcla de furia e indignación al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio: “Hace falta ser mala persona”

Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ha provocado este miércoles la indignación de las familias de los mayores fallecidos en las residencias de la región durante la primera ola de la pandemia, al decir que “ya lo han superado”. Su declaración ha causado una mezcla de enfado y rabia a los aludidos consultados por este diario, que en algunos casos están en manos de psicólogos y abogados para tratar de cerrar las heridas abiertas por la crisis y obtener justicia, dos años y medio después de que los protocolos de triaje decididos por el Gobierno regional cerraran las puertas de los hospitales a miles de ancianos residentes enfermos por el coronavirus.

Ossorio ha hecho estas afirmaciones en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, un día después de que Vox sorprendiera al PP, al facilitar que se vote en la Asamblea de Madrid, el próximo 13 de octubre, una comisión de estudio sobre las residencias de la región, donde murieron más de 5.000 ancianos en la primera ola de la pandemia de coronavirus.

“Esta comisión yo creo que solo tiene un interés electoral y va a causar un daño innecesario a esas familias, que podrán volver a pensar: ‘¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar?’”, se ha preguntado Ossorio ante los periodistas, tras la reunión semanal del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso. “Eso las familias ya lo han superado, y volver a esto, por interés electoral, creo que sinceramente no es procedente”, ha afirmado. “[Con la comisión] Lanzamos el mensaje falso de que lo que sucedió se pudo evitar”, se ha quejado Ossorio, sin hacer ninguna mención

a que el Gobierno regional impuso a los hospitales en marzo de 2020 unos protocolos que negaron el traslado a miles de personas mayores que vivían en residencias y los condenaron a morir sin cuidados paliativos y solos en sus habitaciones. Ossorio ha argumentado: “Sucedió igual en todo el mundo, con alta incidencia en las personas mayores, y especialmente en aquellas con otras patologías. La justicia ha archivado todas las denuncias, en Madrid y en todos los sitios. (...) Lo que me extraña es que coincidan Rocío Monasterio [de Vox] y Mónica García [de Más Madrid]”.

La Comunidad de Madrid fue la única en la que los polémicos protocolos de triaje quedaron por escrito, en marzo de 2020. Cientos de familiares han recurrido desde entonces a la justicia. Una de las que espera que prospere su caso es Belén Muñoz, cuya madre, Esperanza Tavira de Andrés, de 81 años, murió durante el bloqueo sanitario en Vitalia Home Leganés: “A mi madre la mataron. Estoy fatal y no paso página, ni la quiero pasar, por mucho que me lo recomienda la gente”. Su esperanza está en el proceso judicial que reside en un juzgado de Leganés, donde desde hace meses han declarado médicos del hospital y personal de la residencia.

“Desaprensivo” y “mala persona”

El presidente de la plataforma de familiares Pladigmare, Miguel Vázquez, califica a Ossorio de “desaprensivo”. Y añade: “No les importa el dolor de las familias. Quieren enterrar a los muertos dos veces: cuando fallecieron, y ahora, para que nunca se sepa si podían haberse salvado”.

Otra afectada es Ana Ruiz, hija de Ana María Artola, una residente que falleció en Monte Hermoso, el 16 de marzo de 2020: “Cuando Ayuso salió en El Hormiguero diciendo que investigar lo sucedido era ‘ahondar en un dolor innecesario’, dejé de ver ese programa. Hoy he oído a este [por Ossorio] en el telediario y he tenido que contenerme”.

“Hace falta ser mala persona. No sabe lo que es la empatía”, dice Laura Grela, hija de Luis Grela Antequera, de 77 años, que falleció el 3 de abril de 2020 encerrado en la residencia Orpea Villanueva de la Cañada. “Mi hermana y yo llevamos en tratamiento psicológico desde julio de 2020. Este señor opina que eso se supera así tal cual, pero yo lo que tengo es una rabia contenida que no respondo de mí”, agrega. “Es que me tendrían que sujetar”.

Muchos familiares no han tenido éxito en el plano judicial porque, en muchos casos, la Fiscalía ha dado carpetazo a las investigaciones, una actuación que motivó una crítica de Amnistía Internacional porque las causas eran cerradas sin una indagación mínima.

Ante la polémica que han despertado sus palabras, el vicepresidente regional ha intentado matizarlas con un tuit. “Evidentemente, la muerte de un ser querido nunca se supera, pero sí se ha superado la mentira de la izquierda, sin escrúpulos, que afirmó que se pudo haber evitado”, ha escrito en Twitter, donde ha atribuido a una edición “malintencionada” de sus declaraciones las protestas que han generado su intervención.

Las declaraciones del número dos de Ayuso, que ya provocó un escándalo cuando negó los niveles de exclusión y pobreza que reflejaba un informe de la Fundación Foessa (“¿Por dónde estarán?”, ironizó), se producen en la misma semana en la que ha salido a la venta un libro con un relato demoledor de lo sucedido en las residencias. La obra está escrita por Alberto Reyero, que fue el consejero encargado de estos centros madrileños durante la crisis de 2020. Este político de Ciudadanos fue uno de los protagonistas de la guerra interna en el Ejecutivo de coalición que entonces gobernaba la región, por su oposición a los protocolos de triaje. Reyero, que lleva semanas dando entrevistas sobre el libro, ha criticado la oposición de Ayuso a que se terminen de investigar y esclarecer las responsabilidades políticas de lo sucedido.

Las muertes en estos centros se empezaron a investigar la pasada legislatura, cuando el PP estaba en minoría y dependía de Ciudadanos. Rota la coalición de gobierno, y con Ayuso en un momento dulce tras las elecciones del 4-M, Vox se mostró dispuesto a reanudar los trabajos de investigación en la actual legislatura. Nunca ocurrió. Ayuso intervino en público para acusar a Monasterio de echarse en brazos de la izquierda. Esta rectificó. Y todo ha seguido igual hasta ahora, cuando Vox ha asombrado al PP al facilitar que la izquierda logre la comisión de estudio

que persigue desde hace tiempo: se aprobará si la extrema derecha, Más Madrid, el PSOE y Podemos, unen sus votos en el pleno del jueves 13.

La decisión de Vox ha sido muy mal recibida por el PP. “Nos sorprende y nos entristece, porque Vox se ha sumado a la estrategia de la ultraizquierda”, llegó a decir esta semana el portavoz parlamentario de los conservadores, Pedro Muñoz Abrines.

Gato encerrado

En Más Madrid creen que hay gato encerrado. El anuncio de Vox ha llegado cuando Vox y PP se disponen a negociar los presupuestos de 2023, y en la formación de Mónica García aventuran que la extemporánea activación de la iniciativa de la comisión, que Vox tenía guardada en un cajón desde noviembre de 2021, puede ser una medida de presión para sacar adelante puntos bloqueados en el tira y afloja de las conversaciones sobre las cuentas públicas. Si eso ocurre, deslizan en Más Madrid, la posibilidad de la comisión de estudio puede desaparecer tan rápido como ha aparecido.

“Este es un juego pimpinelesco, y de cartas, para sacarle algo al PP”, ha dicho este miércoles García, la portavoz del partido que lidera la oposición, que también ha pedido la dimisión o destitución de Ossorio por sus declaraciones y ha registrado una votación en la Asamblea para reprobado al vicepresidente de Ayuso. El PSOE también quiere reprobado al consejero, en lo que previsiblemente también estará de acuerdo Podemos, pero la iniciativa no saldrá adelante sin el apoyo de Vox.

Además, los partidos de izquierdas preferían una comisión de investigación, centrada en dirimir las responsabilidades de lo que ocurrió en las residencias durante la pandemia, en lugar de una de estudio, que solo alumbrará, de hacerlo, mejoras para el sistema. Las dos opciones, en cualquier caso, son consideradas como innecesarias por el PP, que, además, ve en el movimiento de Vox una traición.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-05/el-numero-dos-de-ayuso-sobre-las-muertes-en-las-residencias-durante-la-pandemia-las-familias-ya-lo-han-superado.html>

LA CRISIS DE LA COVID DESGASTA AL GOBIERNO DE AYUSO: CINCO SALIDAS Y OCHO CAMBIOS DE CARGO EN TRES MESES

La marcha del viceconsejero Zapatero acelera la reestructuración en Sanidad: mientras se decide el futuro del consejero Ruiz-Escudero, al que el PP tatea como candidato en Pozuelo, gana poder el primer coordinador del Zandal

El Gobierno más estable de España, como suele definir Isabel Díaz Ayuso al Ejecutivo que dirige la Comunidad de Madrid, afronta desde hace tres meses la pesada digestión de la crisis del coronavirus. Son más de un millón de contagiados. Decenas de miles de fallecidos. Días angustiosos. Y una polémica gestión, llena de decisiones controvertidas que premiaron los votantes en las elecciones del 4 de mayo de 2021. Con los comicios de 2023 ya en el horizonte, Ayuso ha decidido que es el momento de relanzar el departamento que más se ha desgastado desde que accedió a la presidencia, en 2019. Desde julio, ha habido cinco salidas (tres directores generales, un gerente y el viceconsejero Antonio Zapatero); ocho cambios de funciones; y al menos otros seis nombramientos. Como consecuencia, gana poder el que fue coordinador del hospital de emergencias Enfermera Isabel Zandal, Fernando Prados, ahora viceconsejero; y queda rodeado de incógnitas el futuro del consejero Enrique Ruiz-Escudero. El número dos de la última lista electoral del PP es una opción para la candidatura del partido al Ayuntamiento de Pozuelo.

Lunes, 3 de octubre. Ruiz-Escudero acude al Zandal para presentar los resultados de un estudio que demuestra que el 90% de los madrileños mantiene la inmunidad contra el coronavirus 10 meses después de vacunarse contra la enfermedad. Solo hay tres preguntas. Una de ellas resume cuán pesada es la mochila de la gestión del coronavirus, y cuán alargada la sombra de la pandemia.

“¿Leerá el libro de Alberto Reyero?”, le preguntan a Ruiz-Escudero, en referencia a Morirán de forma indigna (Libros del KO), en el que el exconsejero de Políticas Sociales con Ciudadanos denuncia la pasividad del equipo de Ayuso ante las muertes de los ancianos en las residencias durante lo peor de la crisis sanitaria.

“No pienso leerlo”, responde, tajante, el consejero de Sanidad.

Es la segunda vez en muy poco tiempo en la que a Ruiz-Escudero le preguntan por un libro que no ofrece un retrato amable de la gestión del coronavirus en Madrid. Antes fue el turno del que firma el exministro de Sanidad, Salvador Illa. “Madrid fue el único desafío a la autoridad del Gobierno en la pandemia”, escribe en su libro el hoy líder del PSC, que describe a un Ruiz-Escudero encadenado a las decisiones de Ayuso, y sin casi capacidad de decisión.

Las dos escenas ilustran lo difícil que es abrir un tiempo nuevo, y vinculado a la etapa poscovid, con el mismo equipo que se enfrentó la pandemia. Igual que hay reformas de viviendas que se emprenden por la fatiga de los materiales, en la Consejería de Sanidad madrileña hay un proceso de sustitución que tiene que ver con el agotamiento por la gestión de la crisis y la voluntad de abrir una nueva etapa. El Gobierno, sin embargo, intenta rodear de optimismo los cambios.

“La consejería, durante la pandemia, ha sido un referente”, defendió la pasada semana el vicepresidente y portavoz gubernamental, Enrique Ossorio. “Queremos que salir de la pandemia sea un revulsivo, y que nuestra Sanidad dé más pasos en la mejora del servicio que presta a los ciudadanos”, añadió. “Por eso se han hecho una serie de cambios organizativos, para que sea una organización más moderna”.

Durante lo peor de la pandemia, la continuidad de Ruiz-Escudero, varias veces cuestionada, fue el escudo del que se sirvió el Ejecutivo para defender la estabilidad del departamento, y el acierto de sus polémicas políticas, mientras se acometían cambios en niveles intermedios.

Ocurrió cuando dimitió la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, en desacuerdo con la estrategia de Ayuso; cuando fue destituido Carlos Mur, director general de proceso integrado, en medio de la polémica por los protocolos de triaje que impidieron atender en hospitales a determinados mayores que estaban en residencias; o cuando la vuelta de Antonio Burgueño a la Administración apenas duró un suspiro.

Sin embargo, la marcha del zar de la covid, como llamaba la oposición al viceconsejero Zapatero por sus competencias frente a la pandemia, ha hecho mella en el argumentario del Gobierno. “Termino hoy una etapa dura y difícil”, admitió él en la hora de su salida, reconociendo el desgaste por gestionar la crisis, rompiendo el espejismo de la simple renovación de equipos; y culminando, por ahora, un proceso de cinco salidas, ocho cambios de funciones; y al menos otros seis nombramientos en solo tres meses.

Los cambios en la Consejería de Sanidad de Madrid

Estos son los cargos que han salido de la Administración:

Antonio Zapatero, viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública.

Teresa Chavarría Giménez, directora General de Investigación, Docencia y Documentación.

Jesús Vázquez Castro, director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud.

Pablo Busca, gerente del Summa 112.

Paula Gómez-Angulo Amorós, directora general de Humanización y Atención al Paciente.
Han cambiado de funciones:

Fernando Prados Roa (dos veces: Hospitales e Infraestructuras Sanitarias; Proceso Integrado de Salud; y viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública).

Pedro Irigoyen Barja (de director general de Gestión Económico-Financiera y Farmacia del Servicio Madrileño de Salud a consejero de Gestión Económica).

Elena Mantilla García (de directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria a directora general de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria)

María Dolores Moreno Molino (de viceconsejera de Humanización Sanitaria a directora general de Humanización y Atención al Paciente)

María Luz de los Mártires Almingol (de directora general de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud a directora general de Investigación, Docencia e Innovación)

Antonio López Porto (de secretario general del Servicio Madrileño de Salud a secretario general técnico de la Consejería de Sanidad)

Francisco Javier Carmena Lozano (de secretario general técnico de la Consejería de Sanidad a interventor general de la Comunidad).

Otros nombramientos:

Andrés Gómez Blanco como director general de Infraestructuras Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.

Victoria Buezas como directora general de Adecuación y Supervisión Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud.

Miguel López-Valverde como director general de Sistemas de Información y Salud Digital del Servicio Madrileño de Salud.

Joaquín Rubio Agenjo como secretario general del Servicio Madrileño de Salud.

Juan José Fernández Ramos, como director general del Proceso Integrado de Salud del Servicio Madrileño de Salud con rango de consejero.

Manuel José Guiote, nuevo gerente del summa 112.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-06/la-crisis-de-la-covid-desgasta-al-gobierno-de-ayuso-cinco-salidas-y-ocho-cambios-de-cargo-en-tres-meses.html>

ANTONIO GONZÁLEZ TEROL, EL PARACAIDISTA DE AYUSO ABONADO A LAS POLÉMICAS

El exalcalde de Boadilla del Monte será el candidato del PP por Alcorcón en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo

El Partido Popular de Madrid, que encabeza Isabel Díaz Ayuso, ya trabaja en poner a punto toda su maquinaria de cara a las elecciones municipales -previstas para el 28 de mayo de 2023-, que los populares afrontan como una suerte de barómetro de cara a las generales de diciembre de este año -salvo adelanto electoral-.

En este sentido, tal y como publica EIPlural.com, la presidenta madrileña ha admitido por primera vez que “la situación del PP en Madrid es complicada” y ha pedido a los suyos no pecar de “triumfalismo” y no dar “nada por ganado” -la euforia en las filas populares se encuentra desbordada tras la victoria contundente en las autonómicas del pasado 4 de mayo-.

Una advertencia que Ayuso realizaba este lunes en la sede de Génova durante una reunión del Comité Ejecutivo Autonómica en la que desvelaba el nombre de hasta 25 nuevos alcaldables. Una extensa nómina formada por perfiles desconocidos la gran mayoría y en la que sobresalía el nombre de Antonio González Terol, exalcalde de Boadilla del Monte, que será el candidato del PP por Alcorcón, uno de los grandes bastiones de la izquierda en la Comunidad de Madrid.

Una designación muy sorprendente, puesto que hay que recordar que Terol fue una de las únicas personas que permaneció fiel a Pablo Casado en su guerra civil contra la propia Ayuso. De hecho, hay que recordar que la presidenta madrileña, tras salir airoso del conflicto después de la dimisión forzada de Casado, aseguró que iba “a tener en cuenta” quienes “habían puesto en tela

de juicio la honorabilidad” de su gobierno y de su gestión a la hora de diseñar la nueva estructura del PP de la región.

Asimismo, también cabe destacar que el nombre de Terol sonó con mucha fuerza para sustituir a Ángel Garrido como líder del PP en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, finalmente Casado optó por la propia Ayuso, colocando al exedil de Boadilla del Monte como vicesecretario general de Política Territorial de los populares.

Terol y la alargada sombra de Púnica

Por otra parte, además de su andadura en Boadilla del Monte, Terol también ha ocupado portadas después de que un auto de la Audiencia Nacional sobre la trama Púnica ratificara la versión de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y apuntara que el dirigente popular estuvo en la reunión -con fecha del 7 de junio de 2012, según siempre la justicia- en la que se solicitaba a los asistentes un millón de euros con el fin de “sanear” la caja B del Partido Popular, dañada tras la gigante campaña para las elecciones de 2011.

En concreto, según el juez, en 2012, la campaña de las elecciones autonómicas aún estaba pendiente del pago completo. Por lo tanto, Ignacio González requirió, en la reunión celebrada en el despacho de Inmaculada Sanz – directora general de relaciones con la Asamblea -, el “pago subrepticio” de los gastos electorales para la campaña de 2015.

En estos encuentros estaba, según el auto del magistrado García Castellón, Antonio González Terol. El exalcalde de Boadilla del Monte es considerado un fiel a Esperanza Aguirre y, en esa época desempeñaba las labores de director general de Asuntos Europeos, compaginándolo con la Alcaldía de localidad madrileña.

Premió con 9.000 euros a la hija del catedrático que le aprobó la tesis

Por último, entre otras polémicas, Terol, tal y como informa Genoveses, también ha sido noticia por premiar con 9.000 euros a la hija del catedrático que le aprobó la tesis de Derecho Europeo.

En concreto, Terol aprobó su tesis en diciembre de 2010, cuando era director general de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Desde su dirección general se convocaba cada año el premio Europa de tesis doctorales, "destinado a distinguir las tesis que tengan como objeto alguna de las políticas comunitarias que tengan mayor incidencia y especial interés para el desarrollo de la política regional y local de la Comunidad de Madrid". En la edición de 2009, cuando Terol estaba necesariamente preparando su tesis de más de 700 páginas, que defendería un año después, presidió el jurado que concedió el premio, valorado en 9.015 euros, a Diana Catalina Pérez-Bustamante Yabar, hija del catedrático Rogelio Pérez-Bustamante. Da la casualidad de que este formaría parte del tribunal evaluador que un año después aprobaría a González Terol con un sobresaliente 'cum laude'.

https://www.elplural.com/politica/espana/antonio-gonzalez-terol-paracaidista-ayuso-abonado-polemicas_298838102

AYUSO RECOLOCA AL NÚMERO TRES DE CASADO Y VECINO DE BOADILLA DEL MONTE COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE ALCORCÓN

El 'popular' ha desarrollado su carrera en el ámbito municipal en otra localidad diferente a la que se presenta

Antonio González Terol, exalcalde de Boadilla del Monte, número tres del PP de Pablo Casado y diputado en el Congreso, será el candidato del PP a la alcaldía de Alcorcón, uno de los grandes bastiones de la izquierda en la Comunidad de Madrid. Así lo ha decidido el comité ejecutivo regional celebrado en la tarde de este lunes, donde se han oficializado el nombre de 25 nuevos aspirantes electorales populares, que se suman a los 16 nombres ya conocidos y anunciados antes de verano.

De esta forma, Ayuso rescata a una de las personas más cercanas a Casado, contradiciendo sus palabras en plena guerra contra Casado por denunciar que el hermano de la líder madrileña

ganara más de 55.000 euros por aportar material sanitario a Madrid. "Voy a tener en cuenta a quien haya puesto en tela de juicio la honorabilidad de mi gobierno, y su gestión", dijo sobre el núcleo duro del expresidente del PP.

Además, se trata de una designación que sorprende ya que Terol ha desempeñado su carrera en el ámbito local en Boadilla del Monte y no en Alcorcón. No obstante, el PP quiere aprovechar su tirón aprovechando que la localidad en la que se presentará del cinturón sur se encuentra cerca Boadilla del Monte, el municipio en el que Terol gobernó entre 2011 y 2019. No obstante, en este municipio gobierna desde 2019 la socialista Natalia de Andrés y el morado Jesús Santos, cuando la izquierda consiguió quitar el bastón de mando a David Pérez, actual consejero de Transportes de Ayuso.

Además de Terol, el PP ha anunciado a más de una veintena de candidatos entre los que destaca Rocío Alcántara (Alcobendas), Miguel Ángel Pulido (Colmenar de Oreja), Ana María Romero (San Martín de la Vega) o Silvia Gallego (Soto del Real).

https://www.elplural.com/autonomias/ayuso-recoloca-numero-tres-casado-vecino-boadilla-monte-como-candidato-alcaldia-alcorcon_298778102

AYUSO ASEGURA QUE SUS PRIMAS DE BARCELONA CONOCEN LAS COMARCAS CATALANAS PERO NO LOS RÍOS DE ESPAÑA

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado la educación en Cataluña contra el "derecho de hablar el español"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a caer en otro bulo. Si hace unos meses insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez intenta adoctrinar a los niños mediante los libros de texto, ahora la lideresa ha cargado contra la educación en Cataluña, donde asegura que no se respeta la voluntad de los padres para decidir en qué idioma debes estudiar sus hijos o que no se habla adecuadamente de España. En concreto, Ayuso ha asegurado que sus primas de Barcelona no se saben los ríos españoles o las capitales de provincia pero sí las comarcas catalanas.

Así lo ha asegurado este lunes precisamente desde Barcelona, hasta donde se ha trasladado para participar en un encuentro con empresarios. En el desayuno informativo, organizado por Forum Europa, la lideresa ha pronunciado un discurso cargado de críticas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, de halagos a su modelo basado en una política fiscal de libertad en Madrid y con un claro mensaje hacia Mariano Rajoy, de quien ha dicho que debería haber aplicado el artículo 155 "más firme y duradero".

"Es mi séptima visita. Diría viaje, pero es visita, porque estoy en mi país", ha defendido nada más subir al estrado. Ya en la ronda de preguntas al final de su intervención, la presidenta madrileña ha sido cuestionada por el debate lingüístico que rodea a Cataluña. "Creo que el bilingüismo es una riqueza y es, además, un tesoro que no tenemos todas las comunidades autónomas y que desde Madrid hemos mirado con admiración", ha comenzado a decir.

"Pero eso no quita para no entender por qué un español en España no puede dominar y hablar el español como un derecho y una obligación constitucional y, por tanto, recibir la educación como consideran sus padres", ha afirmado después. Una manifestación que ha ido acompañada de la defensa de que los padres puedan determinar si quieren que sus hijos estudien en un idioma u otro.

"Un abuso del poder en manos de los de siempre"

"Tanto si es el 100% incluso, en algunas ocasiones que no haya ni siquiera esa oportunidad me parece que es atentar contra el propio derecho constitucional", ha dicho. Sin embargo, ha puntualizado que esta consideración "nada que ver con ir contra el catalán" y ha lanzado un aviso a los medios de comunicación y la oposición. "Que ya me conozco yo el debate maniqueo al respecto", ha dicho.

Tras estas declaraciones, el moderador ha cambiado de pregunta pero la propia Ayuso ha vuelto sobre ella para ampliar sus opiniones. En concreto, el periodista ha cuestionado a la presidenta madrileña si ella considera que España está en crisis así como qué medidas deben tomar las pymes para afrontar la inflación o escasez de materias primas.

Sin embargo, la dirigente regional ha insistido en sus palabras y ha asegurado que en Cataluña no se le da a nuestro país el lugar que ella considera que merece. Ha sido entonces cuando ha explicado la situación de los familiares que dice que tiene en la región. "Yo, que tengo familia aquí catalana, en Barcelona, me comentaban el otro día mis primas como están estudiando, por ejemplo, todas las comarcas catalanas pero no se sabían los ríos españoles y no conocían donde estaban las principales capitales de provincia del resto del territorio", ha dicho textualmente.

A pesar de asegurar que estudiar el territorio catalán le parece "de gran riqueza" -"insisto, todo es importante", ha dicho-, Ayuso ha manifestado estar en contra de cómo tratan a España en las escuelas de la región. "Llega un momento en el que ni siquiera les tratan en el colegio, les cuentan... tratan a España como un país vecino o directamente como un proyecto inexistente. A mí eso me parece un abuso del poder en manos de los de siempre", ha denunciado.

https://www.elplural.com/autonomias/madrid/ayuso-asegura-primas-barcelona-conocen-comarcas-catalanas-no-rios-espana_298769102

DÍAZ AYUSO: "SÁNCHEZ ESTÁ DESLEGITIMANDO LA CORONA Y HACIÉNDOLA DESAPARECER"

Isabel Díaz Ayuso (43 años) visitó el viernes un vivero de compositores, productores y managers que Warner Music ha inaugurado este año en la antigua estación del Norte de Madrid. Las instalaciones, de grandes ventanales, mesas corridas, estudios para ensayar y grabar y hasta un plató, son para la presidenta un símbolo de cómo ve a su comunidad autónoma: con vitalidad en todas las áreas, también la cultural. Antes de recorrer el edificio, concede la entrevista en una de las salas de reuniones, con piano incluido.

El Gobierno anunció el jueves un "impuesto de solidaridad" que es similar al de patrimonio que usted y Juanma Moreno, en Andalucía, han eliminado. ¿Qué le ha parecido la decisión?

El plan se ha pergeñado de manera autoritaria para tapar otros titulares y, como no tiene ni consenso ni criterio, aporta poco. Más bien expulsa patrimonio, que no nos sobra, y a las rentas medias no las roza siquiera. Y luego, encima, el tramo beneficiado, que siempre debería haberlo estado, no verá este beneficio hasta dentro de dos años. Son titulares para tapar la presión de sus barones socialistas, que ven cómo en la calle los ciudadanos les exigen que de una vez bajen impuestos.

"El Gobierno está erosionando la imagen de todas las instituciones, la justicia es una más" Pero ahora los impuestos a esas grandes fortunas irán a las arcas del Estado y no a las de sus dos autonomías...

Hay que ver cómo queda redactado. Si se invaden competencias, lo recurriremos. Ya pueden hacerlo bien.

¿La competencia fiscal entre autonomías es de patriotas?

Esa competencia es necesaria, porque es la única manera de corroborar quién está haciendo las cosas bien o mal. Y es absolutamente falso que bajando los impuestos perjudiques la sanidad o la educación.

Organismos como el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertan contra la bajada de impuestos para no dañar el Estado del bienestar.

Pues lo que tienen que hacer otras comunidades, para evitar la competencia, es bajar ellas también los impuestos y así estaremos todos igualados. Pero en esa escalada de la supuesta igualdad no tenemos que ir contra los ciudadanos y sus intereses. Catalunya tiene entre 12 y 15

impuestos propios inventados como ingeniería fiscal para meter la mano en el bolsillo del contribuyente y el dato que estamos conociendo hoy es que tiene una deuda que duplica a la de la Comunidad de Madrid: un 35% de deuda sobre su PIB frente al 14% de Madrid. A lo mejor lo que estás haciendo es otra cosa, que es recaudar. Y gobernar no es recaudar, es gestionar.

"Andalucía es el preludio de lo que le espera a España cuando el PSOE salga de las comunidades que está arruinando"

Estos días lo que ha calado es que el Gobierno estaba respondiendo al anuncio de su compañero Moreno, que bonificará el impuesto de patrimonio en Andalucía. ¿Cómo ha podido ser que le robe la bandera de la bajada de impuestos?

Aquí nadie ha robado nada. Aquí lo que ha habido es un ejemplo de que se podían bajar los impuestos en otras regiones, no solo en Madrid. El motor económico en que se está convirtiendo Andalucía es el preludio de lo que le espera al resto de España cuando los socialistas salgan de las comunidades que están hoy arruinando.

Han pasado ya más de dos años de la llegada del covid. ¿Se arrepiente de alguna decisión?

No haberlo hecho todo antes, por ejemplo el cierre de los colegios. Fuimos los primeros en hacerlo pero, si lo hubiéramos adelantado más, habríamos obligado al resto de autonomías y al Gobierno a actuar. Todo habría sido mucho menos doloroso.

¿Volvería a aprobar un protocolo como el que se aplicó a las residencias de ancianos en la primera ola?

No se aplicó ningún protocolo aprobado por nadie. Murieron ancianos en casas, en residencias y especialmente en hospitales, donde fueron derivados la mayoría de ellos. Pero no hubo ningún protocolo firmado. Hubo una filtración de una propuesta que de manera malintencionada ha creado un relato totalmente falso de la realidad, sin contar que la mayoría de los ancianos en residencias fallecieron en los primeros días de la ola en Madrid y en el resto de España, mucho antes de que habláramos de derivaciones o no.

¿Tiene previsto recibir a las asociaciones de familiares de las víctimas después de dos años?

La Consejería de Sanidad se reúne con numerosas asociaciones de toda índole.

Digo usted como presidenta.

Bueno, dependiendo... No me dejo llevar por la presión ni por el relato político. En este caso lo que hago es atender a muchos ciudadanos que no tienen por qué ir vía asociación y respondo al 100% de ellos, por cierto. Lo que se hace siempre con la sanidad y la pandemia en Madrid, a mi juicio, es un tanto injusto, porque no contextualiza lo que ocurrió y no se miran con la misma lupa los datos de las demás regiones. Se hizo todo lo que se pudo y por eso los madrileños nos han dado su apoyo en las urnas.

¿Cómo va la relación con Feijóo? Llevan unos días que no coinciden. Usted no fue a la conferencia de Moreno, tampoco fue...

Hemos tenido una relación muy buena y no tenemos, por tanto, que mostrar otra cosa. Vivimos con total normalidad juntos... La relación es la de siempre, vamos, muy buena.

Lo que quería decir es que usted no fue a la conferencia de Moreno en Madrid, tampoco al comité ejecutivo nacional y ha faltado a varios ya, Feijóo no acudió a su coloquio en 'El Mundo'...

Hombre, que yo le esté poniendo deberes o le esté marcando la agenda al líder de la oposición o él a mí, como presidenta de la comunidad, cuando en Madrid tenemos 10 o 15 eventos cada día...

¿Tiene que sentarse el PP con el Gobierno y renovar de una vez el CGPJ?

Lo que tiene que hacer el Gobierno de una vez por todas es dejar de erosionar la imagen de la justicia como está haciendo con el resto de las instituciones. Ya consiguieron poner en tela de juicio las decisiones judiciales con los indultos de los independentistas y ahora con el posible indulto a los responsables de la mayor trama de corrupción de la historia de España por número de imputados, que son los ERE de Andalucía. El Gobierno está erosionando la imagen de todas las instituciones bajo la estrategia de la carcoma, desde la Corona hasta el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y la justicia es una más.

¿Cómo erosiona Pedro Sánchez la Corona?

Pues deslegitimándola y haciéndola desaparecer.

¿Cómo la está haciendo desaparecer?

La Corona está siendo ahora mismo más invisible que nunca y lo está haciendo con todas las instituciones y con todo aquello que le da sentido a la nación como unidad: la Constitución, la transición, los símbolos del Estado y Madrid, que son de todos. Siempre acaban señalados, nunca defendidos a ultranza.

"Pedro Sánchez deslegitima la corona y la hace desaparecer"

Este lunes pronuncia una conferencia en Barcelona. Supongo que está siguiendo el choque entre los miembros del Govern. ¿Cómo lo ve?

No lo estoy siguiendo, no. Llega un momento en que lo único que trasluce es que ellos, que lo tienen todo, el poder, el control del Parlament y retuercen las leyes a su manera, son incapaces de ponerse de acuerdo. Lo que demuestran es que eso es una ensoñación y simplemente es una maquinaria de poder-contrapoder donde se pegan los responsables de la evolución de Catalunya.

Elías Bendodo, número tres de su partido, afirmó el otro día en estas páginas que el PP cometió errores en Catalunya y tiene que volver a ser un partido moderado. ¿Comparte esas dos afirmaciones?

Yo creo que un problema que hemos tenido todos los partidos en Catalunya es que la hemos abandonado en muchas ocasiones. Hemos generado expectación a catalanes que querían que se cumplieran las normas, que hubiera seguridad jurídica y normalidad. Y cuando los independentistas han causado tanto daño y se han creído dueños de su historia no ha habido una presencia del Estado, que es lo suyo, para responder con la Constitución, con la ley y con la normalidad.

¿Cree que Alejandro Fernández tiene que continuar?

No es decisión mía. Tengo muy buena opinión de Alejandro, me parece muy buen parlamentario. Pero nadie mejor que la dirección nacional, y además se hace así, conoce qué perfiles son mejores, del mismo modo que yo conozco mejor qué candidatos son mejores en Madrid...

¿Teme que la fiscalía europea acabe encontrando alguna irregularidad en la adjudicación del contrato de mascarillas a su hermano?

No.

¿Cuándo cree que se va a cerrar?

Una vez ya escuchados los fiscales en España, pues ya es cuestión de estirarlo lo que ellos quieran. Yo lo respeto y que cada uno decida lo que es conveniente.

¿Cree que la fiscalía europea lo va a estirar artificialmente?

No tengo ni idea.

Usted ha dicho en alguna ocasión que recuperó la fe durante la pandemia. ¿Ha tenido que hacer algún ejercicio de contrición después de su choque con Pablo Casado?

(Silencio) No he tenido información de él, no sé... Cada uno ha seguido un camino.

¿Se arrepiente de cómo se gestionó todo?

Por mi parte, no.

<https://www.epe.es/es/politica/20221002/isabel-diaz-ayuso-entrevista-impuestos-76649434>

AYUSO RECONOCE QUE POSPONE SU CONVENCIÓN IDEOLÓGICA PARA IR "DE LA MANO" DE GÉNOVA

Isabel Díaz Ayuso es desde mayo presidenta del PP de Madrid, como anhelaba para equipararse al resto de los barones del PP, pero confiesa que no le dedica a la formación todo el tiempo que querría porque gobernar la Comunidad de Madrid es su prioridad y le quita mucho tiempo.

La gestión del día a día en el PP de Madrid la ha delegado en su número dos, Alfonso Serrano, actual secretario general de la formación. Fue él quien esta semana presentó el nuevo formato que han decidido dar a la prometida convención ideológica, transformada ahora en unas jornadas temáticas de contenido tan amplio que cabe cualquier asunto y que se extenderá durante cinco meses.

¿Le ha sugerido Génova o alguno de sus compañeros en el PP de Madrid que no era oportuno tener una convención para ahondar en los valores del partido una vez que Alberto Núñez Feijóo dejó claro que él no iba a hacerlo a escala nacional?

Es todo más sencillo. El congreso de Feijóo y el mío fueron extraordinarios, por tanto, hay una ponencia que no se ha renovado y que es estatutaria y se ha de aprobar con los afiliados. Como ellos lo han pospuesto, lo lógico es que haga yo lo mismo porque vamos de la mano. Otra cosa es que haya temas que me parecen muy interesantes para hablar con empresas, ciudadanos, sociedad civil sobre medioambiente, impuestos, familia y para eso vamos a organizar esos foros.

¿Pero tiene esto la misma fuerza que una convención al uso?

¿Qué es fuerza? Para mí sí, si tienen utilidad, nos traen buenas propuestas y marcamos el mensaje en temas que son muy complejos pero muy necesarios, como la convivencia entre el cuidado del medioambiente y la economía, las nuevas formas de consumo con la ecología o la conservación del patrimonio natural con la lucha contra el fuego, la creación de empleos en el campo y la agricultura.

Una de estas jornadas estará dedicada a la juventud, y acogerá el Congreso de Nuevas Generaciones de Madrid. De momento hay un único candidato, Ignacio Dancausa, sobre el que Ayuso no se pronuncia aunque el perfil que ha pedido encaja totalmente con él.

¿Será una de sus funciones borrar de las NNGG cualquier rastro de Ángel Carrmero (exdirigente de esta formación, hombre para todo de Casado y muy cercano colaborador de Almeida hasta que estalló el caso del espionaje) ?

A mí eso... que se organicen como consideren. Lo que tienen que tener, a mi juicio, es vocación por la política pero no por los cargos políticos, que deslucen la idiosincrasia de lo que tiene que ser una organización juvenil, que debe ser inconformista, idealista.. y quedarse en el entorno de la universidad porque es la mejor etapa de la vida para discurrir, tener tiempo para leer y profundizar y forjar un pensamiento político.

¿Qué políticos de los que ha nombrado Feijóo esta semana en el segundo nivel de la cúpula del PP, los secretarios de área, ha propuesto usted?

Yo desde el comienzo he apostado por la consejera de Medio Ambiente (Paloma Martín), por Antonio Zapatero (que llevará el área sanitaria y salud pública en la cúpula de Feijóo), está con él también mi director de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado (José Herrera), tenemos también a diputadas de la Asamblea como la portavoz de Educación (Lorena Heras)... Y hay gente que está con nosotros en el PP de Madrid y en la Consejería de Administración Local (Alejo Miranda) que también están con él. Su equipo es mi equipo y mi equipo es su equipo.

Lucha contra las adicciones de los menores

Durante la entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, Ayuso también ha profundizado muy brevemente en algunos asuntos relacionados con su gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Se muestra confiada en que Vox no va a poner sobre la mesa asuntos de difícil digestión para el PP y que los presupuestos saldrán adelante a pesar de estar en año electoral. Y parece se muestra tan satisfecha con su balance en estos años, que ha decidido emprender una nueva cruzada: terminar con las adicciones.

Este es un tema universal, ¿cómo pretende abordar este asunto desde su Gobierno?

Tenemos muchos planes, desde el control de drogas en los colegios a contactos con influencers para intentar hablar, sobre todo, a las mujeres en torno a la verdad de las redes sociales. Porque se tiraniza a las chicas en torno a unos ideales que no existen y que están fabricados por los filtros, que las convierte en mujeres presas de algo inexistente. También estamos reforzando la salud mental en los centros de salud, la Consejería de Educación está trabajando para meter más programas que hablen a los adolescentes sobre el consumo de drogas; también trabajamos para crear unidades caninas que vayan a colegios para acabar con la entrada de drogas en los mismos. Todo el gobierno de la Comunidad, cada uno desde sus consejerías, está poniendo en marcha planes, pero nos hace falta más ayuda por parte de los medios, las administraciones, empresas, cine.... para entre todos poner freno a esto porque es un sinsentido.

¿Y se ha puesto en contacto con otras administraciones para emprender planes conjuntos que puedan ser más efectivos o es algo que de momento afronta sola? Cuando empecé con el plan de natalidad, maternidad y paternidad, al principio, estábamos un poco solos y ahora estoy escuchando a otros gobiernos autonómicos, e incluso al Gobierno de la nación hace poco, hablar del asunto. Detectamos problemas que están ahí, a los que no sé si se les está prestando atención suficiente, hasta que empezas a hablar de ello y nos vamos convenciendo unos a otros de que efectivamente hay que abordarlos, cada uno desde su responsabilidad.

Respecto a lo que ya forma parte del balance de gestión de esta legislatura, ¿está usted satisfecha con cómo funciona la sanidad pública en Madrid? Sí, en líneas generales desde luego. Tenemos hospitales de referencia a nivel mundial, siendo líderes en tratamientos avanzados oncológicos, enfermedades raras, infanto-juveniles. Tenemos una atención solidaria, acogemos a pacientes de toda España cuando necesitan tratamientos de mayor complejidad, red asistencial de primer orden, más puertas de emergencias que ninguna otra región, con mayor horario de apertura, y esa es la verdad de la sanidad en Madrid. Y noticias todos los días de hospitales en los primeros puestos internacionales.

En relación con los hospitales, pasado ya el Covid, ¿qué función le queda ahora al Hospital Enfermera Isabel Zendal?

Entre otras muchas cosas, laboratorios y centros de estudio, el Zendal está concebido como un hospital al servicio de los demás (centros) para situaciones de catástrofes, nuevas epidemias, campañas de vacunación masiva... Es un hospital que crece o decrece en función de la demanda, y evita que otros hospitales se vean colapsados, por ejemplo, cuando haya obras integrales. Va a estar preparado y siempre listo para cualquier hospital en cualquier situación sobrevenida y que no pueda colapsar la sanidad de Madrid, para que este hospital sirva como desahogo.

Uno de los hospitales de Madrid que está precisamente en fase de ampliación es La Paz, ¿quiere decir que el Zendal va a ser una extensión de La Paz próximamente?

Bueno, y el 12 Octubre, el Gregorio Marañón, en todos los hospitales se están realizando reformas profundas, el de La Paz es uno de ellos porque se va a reconstruir desde cero en su mismo solar. Las derivaciones en según qué especialidades, evidentemente, servirá para agilizar las obras.

Hay un centro que también necesita una ampliación, el Hospital Universitario Niño Jesús, pero su edificación parece depender de la construcción de un parking de cuatro plantas junto al Parque del Retiro, en pleno Paseo de la Luz. Hay protestas de los vecinos y en el Ayuntamiento de Madrid no se atreven aún a autorizar las obras porque el aparcamiento podría conllevar que la UNESCO suprima el título de Patrimonio de la Humanidad de esta área de la ciudad.

¿Por qué no incluyen la ampliación del centro en sus presupuestos en lugar de condicionarlo a la construcción del parking?

Se está en contra del parking desde el principio y eso es un sinsentido. Es el mejor hospital infanto-juvenil de Europa, que atiende de manera generosa a pacientes de fuera de Madrid, a familiares sin recursos a los que les ponemos una casa porque no tienen para mantenerse en hoteles durante tantos meses, algunos de ellos con niños con tratamiento oncológico o enfermedades raras y que están en Madrid durante meses o año y medio. Esas familias no se pueden venir desde Parla, Alcobendas, Leganés, Córdoba o A Coruña sin coche, donde también traen objetos familiares. Y son desplazamientos diarios costosísimos. Era necesaria la construcción de este parking porque no se pueden permitir estar pagando parquímetros y perdiendo horas en aparcar. Y esa era una forma necesaria de poder ayudar a familias que están en una situación como esa.

Residencias de mayores: "Se ha creado un relato falso"

De su gestión en los tiempos de pandemia, solo se arrepiente de no haber tomado sus decisiones antes y niega, como ha repetido en los últimos días Alberto Reyero, quien fuera su consejero y responsable de las residencias de mayores, que hubiera un protocolo que frenara la derivación de ancianos a los hospitales. Está convencida de que "se ha creado un relato falso sobre la realidad" e insiste en que los mayores fallecieron porque el virus fue muy virulento en la primera ola y ocurrió lo mismo en otras comunidades a las que no se mira con la misma lupa que a Madrid.

Precisamente esta semana, Más Madrid ha registrado una petición para crear una comisión de estudio sobre las residencias de mayores. Está dispuesta a sentarse a hablar con la oposición para ver cómo se puede mejorar la gestión de estos centros y mejorar el cuidado de los mayores?

Si la oposición tiene buenas propuestas, serán bienvenidas y estudiadas, pero no hace falta para eso crear una comisión en la que ya está la resolución escrita por adelantado, que es lo que suelen hacer con todas las comisiones parlamentarias.

La vivienda es otro de los principales problemas de los madrileños. Desde el Gobierno han puesto en marcha varios planes que pretenden ser de ayuda principalmente a los jóvenes de menos de 35 años. Usted dijo hace unos meses que quería comprarse un piso, ¿ha conseguido ahorrar lo suficiente?

Siempre me he querido comprar un piso, pero los políticos lo que tienen que hacer es no hipotecarse. Para tomar decisiones complejas y ser realmente independiente en política tienes que volar libre y no tener ataduras de ese tipo. No me he hipotecado hasta la fecha porque siempre he pensado que la política era algo a corto plazo y, por ahora, me he mantenido así. Madrid, como las grandes capitales, ha visto cómo en los últimos años crece mucho el precio de la vivienda, para lo que nosotros estamos poniendo soluciones. Esa es la realidad de la vivienda y por la que hasta la fecha no he tomado una decisión de ese tipo.

<https://www.epe.es/es/politica/20221001/isabel-diaz-ayuso-convencion-ideologica-genova-76419853>

AYUSO TOMA LA DELANTERA FRENTE A LA IZQUIERDA EN EL PULSO ELECTORAL DE MAYO DE 2023

El PP ya ha organizado sus candidaturas en los principales bastiones de sus rivales, prepara una convención móvil de cinco meses en ciudades clave para los comicios y ultima la renovación de las nuevas generaciones para atraer el voto joven

El PP de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, ha tomado la delantera frente a la izquierda en la preparación del pulso electoral de 2023. Solo cuatro meses después de que la líder fuera elegida para dirigir el partido regional, los conservadores ya han seleccionado a 16 candidatos para intentar recuperar en los comicios de mayo los principales bastiones del PSOE en la Comunidad; les han publicitado aprovechando las fiestas veraniegas y mítines compartidos con Ayuso; han organizado una convención móvil por toda la región que durará cinco meses y tendrá a la líder como estrella; y ultiman el nombramiento de un nuevo presidente de las nuevas generaciones para atraer al voto joven. En contraste, el PSOE se ha enredado con el cabeza de cartel para la capital, aún vacante; Más Madrid solo ha señalado a dos aspirantes municipales (Rita Maestre en Madrid y Emilio Delgado en Móstoles, si ganan las primarias); y Podemos se ha centrado en lanzar a Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor como cabezas de cartel a la Comunidad y la ciudad de Madrid.

“Hay un elemento determinante. Venimos de unos tiempos en los que la designación de candidatos se postergaba muchísimo, y la presidenta creía importante visualizar los liderazgos cuanto antes para que organizaran equipos y se dieran a conocer”, explica una fuente popular conocedora de la estrategia del PP. “A raíz de nuestro pistoletazo, el resto de partidos han empezado a hacer algo”, ironiza, para recalcar la diferencia de velocidad entre unos y otros. “De aquí hasta Navidad seguiremos nombrando a los candidatos de los municipios que no gobernamos, hasta 97, y después de Navidad llegará el turno de los sitios en los que estamos gobernando, porque los alcaldes tienen que tener tiempo para seguir firmando, gobernando, y aplicando su programa tras una legislatura llena de dificultades, como la pandemia y Filomena”, elabora, mostrando la apuesta porque los regidores no puedan ser acusados de electoralismo. “Si queremos repetir el éxito del 4-M hay que trabajar a nivel municipal”.

En junio, cuando apenas habían pasado unos días de su elección como presidenta del PP de Madrid, Díaz Ayuso nombró a Enrique Ossorio como vicepresidente regional. “Lo que quiero es que a partir de ahora, además de coordinar el gobierno, lo prepare para la nueva legislatura”, dijo, encomendándole la elaboración del programa electoral.

Desde entonces, las sinergias entre la agenda del gobierno y los intereses electorales del PP de Madrid son evidentes. En ello también trabajan el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez; el secretario general del PP, Alfonso Serrano; y el asesor gubernamental y encargado de estrategia de la formación, Rafael Núñez. Por ejemplo, la semana pasada Díaz Ayuso trasladó el consejo de gobierno a Móstoles, la segunda ciudad más poblada de la región (más de 200.000 residentes), y una de las fortalezas del PSOE en la Comunidad. Allí publicitó que el Ejecutivo invertirá 100 millones de euros en la zona.

Porque el PP está ejecutando un plan definido desde hace meses. Tras anunciar el pasado mayo un conclave de carácter ideológico diseñado para atraer a los votantes de Vox, el partido ha reformulado ese concepto, reconvirtiéndolo en un tour con cinco paradas por toda la región. El primero será en Parla y en octubre. El último, en la capital y en febrero. Al final, Díaz Ayuso se habrá dejado ver en los cuatro puntos cardinales de la región, según una fuente que conoce su estrategia, pues la presidenta cerrará cinco jornadas diseñadas alrededor de temas que facilitan la confrontación ideológica con la izquierda: “Ecología y cambio climático”, “La persona en el centro de la política”, “El valor del esfuerzo”, “Vivir a la madrileña” y “Los retos de la Juventud”.

“Con este formato dividido en cinco fases, profundizas más en los temas, y vas a más sitios”, argumentan en el PP de Madrid, recalcando su voluntad de aumentar la presencia del partido y la presidenta por todo el territorio según se acercan los comicios de mayo. “Mientras la izquierda busca candidatos, nosotros seguimos hablando y planteando debates y preparando el proyecto

y el programa para mayo”, apuntan. “Es una manera de llevar esta dinámica prácticamente hasta la precampaña, ya en febrero de 2023”.

En ese periodo se multiplicará la presencia de Díaz Ayuso junto a los nuevos aspirantes de su partido, que intentarán aprovechar su tirón para darse a conocer. Igual que la líder popular ya promocionó a Miguel Ángel Recuenco, candidato en Leganés, al nombrarle presidente del congreso del PP de Madrid, en mayo se desplazó a Fuenlabrada para dar a conocer a Noelia Núñez; y en septiembre a Alcalá, donde compartió mitin con Judith Piquet. Todo, para mantener al partido en alerta ante las elecciones.

A eso también debería ayudar la próxima elección (4 y 5 de noviembre) de un nuevo líder de las nuevas generaciones del PP de Madrid, que servirá para renovar una organización en la que hasta ahora abundan los treinteañeros. El favorito es Ignacio Dancausa, presidente de la asociación Libertad sin Ira, estudiante de la Complutense, y próximo a la joven diputada regional Elisa Vigil y a otro nombre en ascenso en la organización, Alejandro Da Silva Montes, vocal vecino de la Junta Municipal de Centro.

Juan Lobato, candidato del PSOE

¿Y la izquierda? Mientras Díaz Ayuso engrasa la maquinaria del PP en busca de la mayoría absoluta autonómica y de los municipios perdidos en 2015 y 2019 por la derecha, Más Madrid (donde repetirá Mónica García como aspirante autonómica) y Podemos (“en breve irán saliendo nombres”, dicen) apenas empiezan a encender la caldera de la maquinaria electoral.

La excepción es el PSOE. Esta semana se confirmó que el candidato autonómico de los socialistas será Juan Lobato, que se está multiplicando con actos sectoriales por toda la región, entrevistas y visitas a municipios. El PSOE contará con sus alcaldes actuales como candidatos (no necesitan someterse a primarias, salvo que el 50% de las bases se opongá); ya tiene doce aspirantes en municipios en los que no gobierna; y ha definido hasta el momento tres procesos de primarias por tener más de un posible cabeza de cartel.

Pero en la capital, todo sigue en pausa: a ocho meses de las elecciones, no tiene candidato para desplazar a José Luis Martínez Almeida (PP) y gobernar la ciudad de Madrid.

<https://elpais.com/espana/madrid/2022-10-01/diaz-ayuso-toma-la-delantera-frente-a-la-izquierda-en-el-pulso-electoral-de-mayo-de-2023.html>

UN CIRCUITO DE FÓRMULA 1 PARA MADRID: EL PROYECTO DE AYUSO QUE ARRUINÓ A LA VALENCIA DE CAMPS

El circuito del Jarama carece de licencia para albergar carreras ni de Fórmula 1 ni de MotoGP y tampoco cuenta con las instalaciones ni los informes medioambientales que exige la FIA

Hace más de una década, el expresidente Francisco Camps aseguró que celebración de un Gran Premio no iba a costar “ni un euro” a los valencianos y el proyecto acabó siendo un agujero negro para las arcas públicas

Casi medio siglo después de que el circuito del Jarama acogiera su última carrera de Fórmula 1 —en el año 1981—, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso quiere que sea la sede de una nueva competición en el año 2026, justo cuando expira el contrato de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) con el circuito barcelonés de Montmeló, donde actualmente se celebran el Gran Premio de Fórmula 1 y el Gran Premio Mundial de Motociclismo.

Sin embargo, el circuito del Jarama carece de licencia para albergar carreras ni de Fórmula 1 ni de MotoGP. Tampoco cuenta con las instalaciones ni los informes medioambientales que exige la FIA, por lo que debería someterse a una costosa remodelación. Y, además, se enfrenta a una fuerte oposición vecinal, que en los últimos años han presentado quejas ante el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y el Defensor del Pueblo por el ruido.

Pese a todos los inconvenientes, el Ejecutivo de Ayuso ya ha iniciado los contactos con el máximo responsable de la competición automovilística, Stefano Domenicali. "Queremos hablar con todas las instituciones públicas y privadas que tienen relación con estos certámenes para que también esté en Madrid, porque estoy convencida de que será todo un éxito", explicó hace unos días la líder madrileña.

Lo cierto es que el plan de Ayuso ya lo intentó poner en marcha otro dirigente del Partido Popular, Francisco Camps, hace más de una década. El entonces presidente de la Comunitat Valenciana ganó la campaña electoral de 2007 asegurando que la celebración de un Gran Premio no iba a costar "ni un euro" a los valencianos y que pondría "a Valencia en el mapa". El circuito acabó siendo un agujero negro para las arcas valencianas y únicamente estuvo en funcionamiento cuatro años, de 2008 a 2012.

El actual Govern del Botànic, dirigido por Ximo Puig, es el que paga la deuda de un crédito de 60 millones de euros que se solicitó en su día para financiar parte de los costes de la construcción del trazado. Puig estimó en 308 millones de euros el coste total de la operación, lo que equivale a 16.000 empleos para jóvenes o a la construcción de 60 colegios, según los cálculos del presidente.

Además, el asunto se judicializó y Camps fue acusado de cometer malversación de caudales públicos, derivada de varios contratos presuntamente amañados para la construcción del circuito. En el año 2019 el expresidente valenciano fue absuelto, pero no por falta de pruebas: el fiscal consideró que existían indicios de corrupción. Camps se salvó porque los delitos preescribieron en 2017.

Historia de un fracaso económico y político

A dos semanas de que se celebran las elecciones autonómicas y municipales de 2007, el entonces patrón de la Fórmula 1 y dueño de Formula One Administration (FOA), Bernie Ecclestone, puso como condición que Camps ganara los comicios para firmar el contrato con la administración valenciana. "Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él, y luego conocí a la alcaldesa, Rita Barberá, y me enamoré de ella", aseguró el magnate.

Un gesto que el conservador le agradeció públicamente: "Voy a intentar con mi esfuerzo ganar estas elecciones y que este contrato haga que Valencia tenga lo que ya tenemos preparado, un circuito urbano", aseguró. Camps ganó por mayoría absoluta, al igual que Barberá, y el primer Gran Premio se celebró en agosto de 2008.

Tal era el éxito esperado que se estableció que el futuro promotor de esta iniciativa correría a cargo de los 40 millones de la construcción del circuito urbano. La Generalitat adjudicó, a través de un ente público sin experiencia en la construcción de infraestructuras urbanas, todas las obras necesarias para la ejecución del circuito. Ese ente dejó en manos de la empresa Valmor Sports la organización del evento. Una empresa creada exprofeso y que era propiedad, a partes iguales, de Bancaja, Fernando Roig y el expiloto Jorge Martínez Aspar, que compartió su participación con Vicente Cotino.

La Generalitat calculó un beneficio estimado de 70 millones de euros gracias al impacto turístico que, según sus cuentas, generarían los 500 millones de espectadores en el mundo. Sin embargo, la recaudación estuvo muy lejos de cubrir las expectativas. Los precios para asistir como público oscilaban entre los 250 y 400 euros. Algunos de los asistentes lo llegaron a calificar de "timo" ante la escasa visibilidad por la ubicación e inclinación de los asientos.

El canon y otros gastos de gestión pronto comenzaron a ser asumidos por la Generalitat valenciana. Valmor únicamente pagó a Ecclestone el canon del premio de 2008. El resto, corrió a cargo de sociedades de la Generalitat. En total, 111 millones de euros. Tras la quiebra de Valmor, el Ejecutivo valenciano se hizo cargo de las deudas que arrastraba la empresa y que ascendían a 34,2 millones de euros.

Meses después de la dimisión de Camps en 2011 por el caso de los trajes, fue Alberto Fabra el que tomó la decisión de rescatar a Valmor. El sucesor de Camps justificó esa decisión alegando

que, de esa forma, la Generalitat evitaba pagar 50 millones de euros al magnate de la F-1 como indemnización si el premio dejaba de celebrarse, lo que sucedió ese mismo año.

En 2017, un informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acreditó, tras analizar más de 105.000 correos electrónicos, que Camps tomó un rosario de decisiones que habrían permitido enriquecerse a Aspar, el exmotorista socio de Valmor.

Un circuito abandonado y repleto de chabolas

El lugar que albergó los excesos de la Fórmula 1 es ahora un asentamiento de chabolas al que los vulnerables (mayoritariamente migrantes de origen saharauí) acuden buscando refugio. Según un informe del Servicio de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de València, está incluido en el Censo de Vivienda Precaria desde noviembre de 2019.

El plan de la Concejalía de Renovación Urbana es que los kilómetros de circuito que atraviesan esta amplia parcela de terreno se conviertan en un itinerario biosaludable, con zonas verdes, centros de salud y colegios. Sus responsables miran a China, donde se logró transformar una antigua pista de aterrizaje en un gran parque: el Xuhui Runway Park, en Sanghái.

Sin embargo, una de las dificultades del consistorio dirigido por Compromís y el PSPV radica en la negociación con los propietarios del suelo urbanístico. "Costó 45 millones de euros y los propietarios de ese suelo no quieren asumir ese coste. Entonces, la administración actual y los propietarios estamos negociando unos precios y unas cargas que sean equilibradas", afirmó recientemente la vicealcaldesa Sandra Gómez.

https://www.infolibre.es/politica/circuito-formula-1-madrid-proyecto-ayuso-arruino-valencia-camps_1_1328828.html